



**PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL**

**COMISIÓN DE ORDEN
DEL CONSEJO NACIONAL**

Av. Coyoacán No. 1546, C.P. 03100, México, D.F.
Tel.: 5200-4000 Ext. 3156 y 3344, Ext. Fax: 3218

RECURSO DE RECLAMACIÓN

EXPEDIENTE: 56/2011

RECURRENTE: CUAUHEMOC CALDERON
GALVAN

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE
ORDEN DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN ZACATECAS

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN

México, Distrito Federal, a treinta de agosto de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al rubro, relativo al Recurso de Reclamación promovido por **CUAUHTÉMOC CALDERON GALVÁN**, por su propio derecho, en contra de la Resolución de fecha tres de noviembre de dos mil once, emitida por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, por la que resolvió el procedimiento de sanción radicado con el número de expediente **COE-CDEZ/003/2011**, en la que determinó imponer al recurrente la sanción consistente en la expulsión de las filas del Partido; y encontrándose debidamente integrada la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por los suscritos integrantes que firman al calce, actuando válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 55 de los Estatutos Generales y 10 del Reglamento del Consejo Nacional; y,

RESULTANDO

I. Antecedentes.

a) Aprobación de solicitud de sanción. En sesión extraordinaria de fecha **veintisiete de junio de dos mil once**, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas aprobó solicitar a la Comisión de Orden del Consejo Estatal de la propia entidad federativa el inicio de procedimiento disciplinario en contra de **Cuauhtémoc Calderón Galván**, miembro activo en el citado Estado, por la presunta comisión de actos contrarios a la disciplina partidista acordándose solicitar la sanción consistente en su expulsión del Partido.

Por una patria ordenada y generosa



b) Procedimiento disciplinario intrapartidista. La solicitud de sanción fue radicada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas el día trece de septiembre de dos mil once; posteriormente, previa secuela procedimental, la Comisión de Orden responsable emitió resolución el día **tres de noviembre de dos mil doce**, en el sentido de imponer a **Cuauhtémoc Calderón Galván** la sanción consistente en su Expulsión de las filas del Partido, misma que le fue notificada al miembro activo el nueve de noviembre siguiente.

II. Presentación del Recurso de Reclamación. Disconforme con la anterior determinación, el día veintidós de noviembre de dos mil once **Cuauhtémoc Calderón Galván** interpuso Recurso de Reclamación ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, medio de impugnación al que se le asignó el número **56/2011**.

III. Solicitud del expediente formado con motivo del acto impugnado y del informe pormenorizado del asunto en cuestión. Mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil once se ordenó solicitar a la autoridad señalada como responsable el envío del expediente original formado con motivo del acto impugnado así como un informe pormenorizado del asunto de referencia.

IV. Recepción del expediente formado con motivo del acto impugnado y del informe pormenorizado solicitado. Mediante oficio recibido en la Comisión de Orden del Consejo Nacional el día treinta de noviembre de dos mil once, el Lic. Reynaldo Delgadillo Moreno, en su carácter de Secretario Técnico e integrante de la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas, remitió las constancias del expediente formado con motivo del acto impugnado y rindió el informe pormenorizado solicitado.

V. Acuerdo. El día siete de diciembre de dos mil once, la Comisión de Orden del Consejo Nacional acordó la radicación del Recurso de Reclamación de cuenta, notificándose a las partes para que hicieran valer argumentos en vía de alegatos; el día veintisiete de diciembre de la propia anualidad se recibió en la Comisión de Orden del Consejo Nacional oficio suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal en Zacatecas a través del cual realizó las manifestaciones que al órgano que preside convenían, y ofreció pruebas supervenientes, asimismo, mediante diverso oficio recibido en la Comisión de Orden del Consejo Nacional el día seis de enero del año que transcurre el propio Presidente partidista en el Estado de Zacatecas, realizó manifestaciones en alcance a su diverso oficio recibido el día veintisiete de diciembre del año próximo pasado y exhibió lo que denominó "prueba documental



superveniente"; asimismo, por acuerdo de 10 de enero de 2012 se ordenó reservar la admisión o desechamiento de las pruebas "supervenientes" ofrecidas por el Presidente del Comité Directivo Estatal de Zacatecas a la resolución colegiada de la Comisión de Orden del Consejo Nacional.

VI. Diligencias para mejor proveer. En etapa de resolución y análisis de autos, en sesión ordinaria de la Comisión de Orden del Consejo Nacional de fecha ocho de marzo de dos mil doce, se ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer; a dicho proveído recayeron informes del Presidente y Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas y manifestaciones realizadas por el enjuiciante Cuauhtémoc Calderón Galván; finalmente, se pusieron a la vista de las partes los informes y manifestaciones expresadas en las diligencias ordenadas.

En consecuencia, quedó en estado de resolución el presente medio de impugnación en términos de lo que establece el artículo 59, fracción IV, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, consecuentemente se procede a emitir resolución; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional es competente para conocer y resolver en forma definitiva el presente Recurso de Reclamación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, sexto párrafo, 16, 55 y 56 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 12, fracción II, 56, fracción IV, 57, 58, 59, fracción IV, 61 y demás relativos y aplicables del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, al haberse interpuesto en contra de una resolución dictada por una Comisión de Orden de Consejo Estatal, en el caso específico, la del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Dado que el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas manifiesta que el Recurso de Reclamación materia de la presente determinación debe ser desechado por ser evidentemente frívolo, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede a analizar en primer término dicha cuestión por ser de estudio preferente y determinar lo conducente.

Por una patria ordenada y generosa



Sobre el particular, el legislador no proporciona un concepto de frivolidad y tampoco un catálogo de causales de la misma que sean evidentes; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Es decir, un medio de impugnación resulta frívolo cuando sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o cuando evidentemente no pueda alcanzar su objeto o pretensión planteada. Así, la frivolidad de un medio de impugnación implica que por la acción que pretenda alcanzar resulte jurídicamente imposible lograrla, y por ello el mismo resulte totalmente intrascendente o carente de sustancia para ser estudiado.

De este modo, se colige que en materia de medios de impugnación electoral podrá desecharse de plano el recurso cuando resulte evidentemente frívolo.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación consultable en las páginas 136-138 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro dice: **FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.**

Ahora bien, de un análisis que se realiza al Recurso de Reclamación promovido por Cuauhtémoc Calderón Galván, se advierte que éste se endereza para controvertir la resolución de la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas en virtud de la cual le impuso la sanción consistente en su expulsión del Partido, la vía impugnativa intentada es la prevista por nuestra normatividad para controvertir una determinación de tal naturaleza, al efecto el impetrante da cumplimiento a lo que ordena el artículo 51 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones que indica:

"Artículo 51. Los recursos deberán formularse por escrito en triplicado, en el que se expresará por lo menos:

- I. Nombre, firma y domicilio del recurrente
- II. Autoridad que emitió la sanción
- III. Los agravios que en su concepto, le causa la resolución.
- IV. Las pruebas ofrecidas.

Por una patria ordenada y generosa



De una revisión que se realiza al escrito que contiene el Recurso de Reclamación, se colman tales requisitos, dado que lo formula Cuauhtémoc Calderón Galván, obra su firma autógrafa en el mismo, señala como autoridad responsable a la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas, formula conceptos de agravio que serán materia de estudio de manera subsecuente, y en autos obra el expediente formado con motivo del acto impugnado que será revisado precisamente a través de los conceptos de impugnación propuestos por la parte recurrente.

Es decir, en el caso concreto, Cuauhtémoc Calderón Galván está ejerciendo su derecho de contradicción que se traduce en obtener la decisión justa del litigio que se le plantea al demandado o acerca de la imputación que se le formula al imputado o procesado, mediante la sentencia que debe dictarse en ese proceso, luego de tener oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias, para defenderse, alegar, probar e interponer los recursos que la ley procesal consagre.

Consecuentemente, es de desestimarse la causal de improcedencia alegada por el Presidente del Comité Directivo Estatal de Zacatecas.

TERCERO. Pronunciamiento de la Comisión de Orden del Consejo Nacional sobre las pruebas "supervenientes" ofrecidas por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Zacatecas.

En términos de lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, esta resolutoria se pronunciará por la admisión o desechamiento de los medios de prueba "supervenientes" que ofreció el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas, mediante oficios recibidos en la Comisión de Orden del Consejo Nacional los días 27 de diciembre de 2011 y 06 de enero de 2012, y que se hacen consistir en lo siguiente:

1. Ejemplar del Periódico Imagen de Zacatecas, de fecha 16 de diciembre de 2011.
2. Acuse de recibo de solicitud de información dirigido al Director del periódico Imagen.
3. Copia certificada de la resolución de fecha 30 de noviembre de 2011, dictada en el Recurso de Apelación 5/2011-II, por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y cédula de notificación de fecha 01 de diciembre de 2011.



4. Cédula de notificación de fecha 16 de diciembre de 2011 y acuerdo en copia simple emitido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, en el expediente J.O.M. 33/2010.

5. Oficio de fecha 02 de Enero de 2012, suscrito por Patricia Mercado Sánchez, en su carácter de Directora General del Periódico Imagen.

En este apartado y para sostener el sentido de lo que resuelve la Comisión de Orden del Consejo Nacional, cobra especial relevancia el contenido del artículo 60 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones que señala lo siguiente:

"Artículo 60. La Comisión de Orden del Consejo Nacional no admitirá más pruebas que las presentadas durante el procedimiento de sanción, salvo que a juicio de la propia Comisión aquellas se refieran a hechos supervenientes"

Asimismo, el criterio orientador de la jurisprudencia 18/2003 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, *mutatis mutandis*, que reza así:

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.—

Los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—Autoridades responsables: LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2287/2007.—Actor: José Ignacio Rodríguez García.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—16 de enero de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Enrique Martell Chávez y Juan Carlos López Penagos.



Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-635/2007 y acumulado.— Actores: Partido Alternativa Socialdemócrata y otro.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa de Sonora.—23 de enero de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.— Secretario: Alejandro David Avante Juárez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

De tal manera, a juicio de los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional, deben ser **admitidas** las documentales identificadas como:

- a) Copia certificada de la resolución de fecha 30 de noviembre de 2011, dictada en el Recurso de Apelación 5/2011-II, por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y cédula de notificación de fecha 01 de diciembre de 2011.
- b) Cédula de notificación de fecha 16 de diciembre de 2011 y acuerdo en copia simple emitido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, en el expediente J.O.M. 33/2010.

Lo anterior, porque tales documentales no pudieron ser ofrecidos por el Comité Directivo Estatal de Zacatecas dentro del plazo legal para aportarlas conforme a lo que ordena el artículo 44, fracciones II y III del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, por haberse emitido con posterioridad al inicio y resolución del procedimiento sancionador, pues sus fechas de emisión son 30 de noviembre de 2011 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente, lo cual debe contrastarse con el hecho de que el procedimiento sancionador fue resuelto el día 03 de noviembre de 2011, entonces el órgano directivo estatal no se encontraba en aptitud de conocerlas.

Ahora bien, su admisión obedece a que las autoridades jurisdiccionales competentes resolvieron en definitiva el juicio ordinario mercantil 33/2011-II, promovido por Jehu Chan Hernández en contra del Partido Acción Nacional, cuyo expediente en copia simple fue ofrecido por el Comité Directivo Estatal de Zacatecas al solicitar el inicio del procedimiento sancionador en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván y que fue hecho del conocimiento de este último precisamente en el emplazamiento respectivo; en dicho expediente se reclamó el pago de \$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), pretensión que fue acogida por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas y confirmada por el Tribunal Unitario de Vigésimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, y conforme a las citadas constancias se está requiriendo el pago correspondiente al Partido Acción Nacional, tales hechos se encuentran estrechamente

Por una patria ordenada y generosa



relacionados con aquellos en los que el órgano directivo estatal sustentó sus pretensiones.

En relación con lo anterior, también se destaca que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la jurisprudencia S3ELJ 12/2002, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 254-255, cuyo rubro es **"PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE"**, lo anterior, tomando en consideración que las documentales que se admiten como pruebas supervenientes fueron emitidas por órganos jurisdiccionales ajenos a la voluntad del Comité Directivo Estatal en Zacatecas.

En cambio, deben **desecharse** las pruebas relativas a:

1. Ejemplar del Periódico Imagen de Zacatecas, de fecha 16 de diciembre de 2011.
2. Acuse de recibo de solicitud de información dirigido al Director del periódico Imagen.
3. Oficio de fecha 02 de Enero de 2012, suscrito por Patricia Mercado Sánchez, Directora General del Periódico Imagen.

Lo anterior porque se refiere a un hecho novedoso que no se relaciona **de manera directa** con alguno de los actos que se le reclaman en la solicitud de sanción a Cuauhtémoc Calderón Galván, dado que si bien es cierto el Presidente del órgano directivo estatal manifiesta que *"los ataques de hecho y de palabra en contra del Partido Acción Nacional en el estado de Zacatecas y del suscrito como Dirigente Estatal del mismo, al día de hoy han continuado, y prueba de ello lo es la inserción pagada y publicada en el periódico de circulación estatal denominado IMAGEN, de fecha 16 de diciembre de 2011, misma que aparece en la página nueve (9) a media plana, con el título **"A LOS PANISTAS DE ZACATECAS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA"...**"* tal situación constituiría en los hechos una ampliación de la solicitud de sanción, etapa que ha concluido y que desahogó la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas y por ende, no debe constituir una oportunidad de sanción en esta etapa procesal, además de ser inviable su estudio en el presente Recurso de Reclamación.

Lo anterior es así, porque como quedó evidenciado en la jurisprudencia de rubro **"AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR"**, los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva,

Por una patria ordenada y generosa



implican que los justiciables **conozcan los hechos** en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, **para garantizarles la adecuada defensa** con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes; siendo así, el admitir dichos medios de prueba atentaría contra esos derechos precisamente porque no fueron parte de los actos de infracción que en el momento procesal oportuno imputó el Comité Directivo Estatal de Zacatecas a Cuauhtémoc Calderón Galván ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal en la propia entidad federativa, consecuentemente se estaría variando la Litis en el presente Recurso de Reclamación al añadir presuntos actos de indisciplina que no fueron materia de estudio por el órgano partidista responsable.

De tal manera, a juicio de los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional, éstas últimas documentales ofrecidas por el Presidente del Partido Acción Nacional en Zacatecas ante esta instancia no pueden ser admitidas con los fines que pretende el funcionario partidista, so pena de vulnerar los derechos del recurrente y el desahogo del Recurso de Reclamación en estudio, por lo tanto deben desecharse.

CUARTO. Análisis de fondo. A continuación se procede a establecer la materia de la *litis* que motivó al recurrente a instar el presente medio de impugnación y precisar de manera clara la intención del promovente a fin de interpretar el sentido de su pretensión, tal criterio encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/99, consultable en la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen "Jurisprudencia", páginas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y tres, con el rubro y texto siguientes:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.—*Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.*"

Para tal efecto se transcribe ^{Por una patria ordenada y generosa} de manera íntegra el medio de impugnación de cuenta.



AGRAVIOS

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 en relación con el 35 de nuestra Carta Magna, toda vez que las autoridades señaladas como responsables sin fundamento ni motivación alguna decretan como infundada por una parte e improcedente por otra las causales de improcedencia hechas valer por el suscrito en mi escrito de defensa que hice valer entiendo y forma legales lo que me causa los siguientes agravios:

A).- En cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por el suscrito relativo al ilegal emplazamiento a procedimiento realizado al suscrito y que la autoridad partidista inferior decreta como infundado, sustentándose en el siguiente argumento: **"Esto, ya que esta autoridad intrapartidaria, en fecha 25 de octubre del año 2011, resolvió el incidente de notificación no especificado, en donde confirmó como válida dicha notificación para que surta sus efectos respecto del expediente identificado al rubro, de ahí que la causal de improcedencia antes señalada y hecha valer por el denunciado deba de desestimarse"**, sustento erróneo y sin fundamento alguno que vierte la autoridad partidista inferior, puesto que si bien es cierto en fecha 25 de octubre del año 2011, la inferior resolvió el incidente no especificado de nulidad de notificaciones hecho valer por el suscrito, mediante el cual de forma ilegal y sin sustento, no menos cierto es que dicha resolución como ya se dijo carece de sustento legal alguno, puesto que, en primer lugar, el suscrito hice valer como agravio en dicho incidente el hecho de que no se cumplió en la notificación realizada al suscrito con lo ordenado en los artículos 18 en su primer párrafo, 35 párrafo primero y 43 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, que a la letra señalan lo siguiente: **Artículo 18. Ningún miembro activo podrá ser suspendido, inhabilitado o expulsado del Partido sin que medie acuerdo específico de órgano competente para solicitarlo y que quien deba resolver sobre la sanción: Cite a las partes interesadas; le dé a conocer por escrito y por medio fehaciente los cargos que haya en su contra, el inicio del procedimiento, su derecho a nombrar defensor entre los miembros activos de Partido el cual no deberá ser miembro del Consejo o Comité que solicitó la sanción o de Comisión de Orden del Partido; oiga su defensa, considere las pruebas y alegatos necesarios.**

..." así mismo el **"Artículo 35. Todo acto o resolución dictada por los órganos competentes deberán ser notificados al interesado en los términos que establezca el presente Reglamento..."** y por último el **"Artículo 42. La Comisión de Orden citará a las partes a audiencia que deberá efectuarse en un plazo no menos de diez ni mayor de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación. La audiencia se celebrará en el lugar designado en los términos del artículo anterior, o en aquel que se habilite a efecto de facilitar la asistencia de las partes"**.

Como se desprende de los articulados antes transcritos, la inferior tenía la obligación de que en la notificación que se me realizará de la sujeción a procedimiento sancionador, se me citara como parte interesada; se me diera a conocer por escrito y por medio fehaciente los cargos que hay en mi contra, el inicio del procedimiento sancionador, se me citara como parte interesada; se me diera a conocer por escrito y por medio fehaciente los cargos que hay en mi contra, el inicio del procedimiento, mi derecho a nombrar defensor entre los miembros activos del Partido; se oiga mi defensa, considere las pruebas y alegatos que presente; y sobre todo que recabe todos los informes y pruebas que estime necesarios, se notifique de todo acto o resolución dictada por los órganos competentes, se me citará a la audiencia que debió de efectuarse en un plazo no menos de diez ni mayor de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, circunstancias que no se cumplió al momento de realizarme la notificación de sujeción a proceso, toda vez que el notificador no acompañó a la notificación que se me realizara el acuerdo de radicación e inicio de procedimiento sancionador, no se me citó a la audiencia de alegatos y de ofrecimiento de pruebas, ni se me cito a la audiencia de alegatos y de



ofrecimiento de pruebas, ni se hizo saber del derecho de nombrar defensor, violaciones procesales que al inferior desestima al señalar en la resolución de dicho incidente que el procedimiento contiene varias etapas, y que en fecha 5 de octubre del año 2011, se celebró la audiencia en la cual el suscrito compareció por escrito y nombre defensor y que el suscrito era sabedor de dicha audiencia, y que por ende era sabedor de la misma y que en consecuencia no me causaba ningún perjuicio en el ejercicio de mi defensa, aberración jurídica que realiza la responsable, puesto que en el hecho de que el suscrito hubiese comparecido a dicha audiencia no quiere decir que el procedimiento de notificación se haya realizado conforme a derecho, puesto que la notificación trae consigo mismo una serie de procedimientos que se deben de realizar so pena de que de no cumplirse debe de declararse nulo el emplazamiento, como en la especie aconteció que la notificación de emplazamiento no cumplió con los requisitos señalados en la ley reglamentaria del Partido Acción Nacional y que por ese simple hecho debió de haberse declarado nulo dicho emplazamiento y ordenar de nueva cuenta el mismo con todas las formalidades exigidas por dicha ley reglamentaria y que por ende tanto la resolución al incidente como en lo resuelto en la resolución que se tacha de ilegal y que este acto se impugna carezca de sustento legal alguno y conlleve a que este órgano partidista de alzada revoque la sentencia y en su caso ordene de nueva cuenta el emplazamiento del suscrito procedimiento sancionatorio; **en segundo lugar**, porque la interposición del incidente de nulidad de notificaciones es un incidente que desde luego suspende el procedimiento del expediente principal, hasta en tanto no se resuelva dicho incidente, lo que en el caso en comento no aconteció pues la autoridad partidista inferior no suspendió el expediente principal y lo continuo por sus etapas procedimentales, es decir, el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el suscrito lo resolvió hasta el día 25 de octubre del presente año, habiendo celebrado dentro del principal dos audiencias los días 5 y 10 de octubre de año 2011, lo que desde luego trae consigo mismo una flagrante violación al procedimiento, máxime que la responsable inferior, radico y resolvió el fondo de dicho incidente, lo que demuestra el desaseo jurídico de la autoridad partidista inferior, pues en dichas audiencias se desahogaron los alegatos y pruebas que las partes ofrecimos y se cito a resolución lo que desde luego era ilegal, pues en orden jurídico lo procedente era que una vez interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones, se resolviera lo que en derecho procediera y una vez hecho lo anterior citar a la audiencia a que hace alusión el artículo 18 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, lo que en la especie no aconteció y que por ende esta autoridad partidista de alzada deba de revocar la sentencia recurrida que en este acto se impugna para todos los efectos legales a que haya lugar.

B).- En cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por el suscrito relativo a la violación de falta de conocimiento veraz y oportuna de los derechos para realizar una adecuada defensa, en la cual la autoridad partidista inferior señala que es infundada, al determinar textualmente lo siguiente: " **Se determina lo anterior, en la medida de que el denunciado se limita exclusivamente a manifestar que no conoció de manera oportuna y veraz de los cargos que hay en su contra, cuestión que se aparta de la objetividad, puesto que es evidente que conoció en todas y cada una de sus partes del escrito inicial así como de todos y cada uno de sus anexos en que se sustenta la solicitud de procedimiento de aplicación de sanción, como se evidencia de la resolución de fecha 25 de octubre del año 2011**

Recurrida que en este acto se impugna para todos los efectos legales a que haya lugar.

B).- En cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por el suscrito relativo a la violación de falta de conocimiento veraz y oportuna de los y derechos para realizar una adecuada defensa, en la cual la autoridad partidista inferior señala que es infundada, al determinar textualmente lo siguiente: "Se determina lo anterior, en la medida de que el denunciado se limita exclusivamente a manifestar que no conoció de manera oportuna y veraz de los cargos que hay en su contra, cuestión que se aparta de la objetividad, puesto que es evidente que



conoció en todas y cada una de sus partes del escrito inicial así como de todos y cada uno de sus anexos en que se sustenta la solicitud de procedimiento de aplicación de sanción, como se evidencia de la resolución de fecha 25 de octubre del año 2011 en que se resolvió como válida la notificación de emplazamiento de la instauración del procedimiento que hoy se resuelve por este órgano intrapartidario." De igual modo la responsable sigue señalando ilegalmente lo siguiente: "De ese modo, si en la fecha precitado ya se tuvo por demostrado el conocimiento cabal de las conductas reprochables por el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, al determinarse la validez de la notificación del escrito inicial de denuncia y sus anexos, dicha circunstancia no puede implicar que hoy nuevamente se desestime, por resultar ocioso y que a nada práctico nos conduce a repetir que dicha notificación se ajustó al orden legal y reglamentario del PAN." Por último la responsable señala: "Por otro lado, respecto de que no se le hizo saber de sus derechos que le asisten, debe decirse que en forma intrínseca cada persona goza de sus derechos, de manera tal que inherentemente es el titular de la esfera de esos derechos y por lo tanto, en el caso, de su ejercicio pleno." Como se desprende de la anterior argumentación que vierte la responsable para desestimar mi causal de improcedencia, la misma carece de una adecuada fundamentación y motivación, pues si bien es cierto que la responsable inferior se sustenta en una resolución que recayó al incidente no especificado de nulidad de notificaciones en la cual se confirmó la ilegal notificación realizada al suscrito, no menos cierto es que dicha resolución es ilegal como ha quedado plenamente establecido en el agravio que precede y que desde este momento y por economía procesal solicito se me tenga por reproducido en este apartado para efectos de ley, aunado al hecho de que el suscrito fui violentado en mi derecho de conocer de manera veraz y oportuna de todos los datos tendientes a preparar adecuadamente mi defensa, y que se basa en esencia en el derecho de conocer con certeza jurídica, todos y cada uno de los pasos del procedimiento, a decir, del acuerdo de radicación, en donde se establezca si la responsable inferior requirió o no a la autoridad partidista denunciante de alguna omisión en la interposición de la denuncia, en su caso la forma en que subsano dicha omisión, elementos necesarios para que el suscrito pudiera legalmente imponerme a ello, circunstancia que no pude legalmente imponerme por no haberseme acompañado a la ilegal notificación de emplazamiento a procedimiento, el auto de radicación de la denuncia, lo que consigo mismo existe una merma de mis derechos partidistas que la responsable paso por alto, al no haber entrado al estudio exhaustivo de mis causales de improcedencia; así mismo en cuanto a lo que aduce ilegalmente la responsable que el hecho de que no se me hiciera saber de mis derechos que me asisten, y que a su decir en forma intrínseca cada persona goza de sus derechos, de manera tal que inherentemente es el titular de la esfera de esos derechos y por lo tanto, en el caso, de su ejercicio pleno, es de señalarse que la responsable no funda ni motiva adecuadamente su actuar, esto es así porque si bien es cierto que el suscrito soy el titular de mis derechos y que el suscrito soy el que debo de ejercerlo, no menos cierto es que es obligación de la responsable hacerle ver al suscrito de todos y cada uno de los derechos que me asisten de conformidad al artículo 18 del Reglamento Sobre aplicación de Sanciones, en especial el de haberme citado a la audiencia en tiempo y formas legales y de hacerme ver mi derecho a nombrar defensor entre los miembros activos del Partido, circunstancia que desde luego no aconteció y que era obligación de la responsable de hacerme ver esos derechos a efecto de poder estar debidamente asesorado en tiempo y formas legales, pues si bien es cierto el suscrito comparecí a la audiencia por escrito y nombre defensor de mi parte, eso en nada implica que no se haya violentado en mi perjuicio los artículos 14 y 15 de nuestra carta magna en relación con el artículo 18 del reglamento en que, por ende, se merma al suscrito mi derecho de enterarme en tiempo y formas legales de todos y cada uno de mis derechos que tengo para preparar adecuadamente y en tiempo mi legal defensa, de ahí que se desprenda la ilegal resolución dictada por la responsable inferior y que por ende conlleve a esta autoridad de alzada a revocar en todos y cada uno de sus términos la sentencia que en esta acta se recurre para todos los efectos legales a que haya lugar. Y deje a salvo mis derechos partidistas como militante activo del Partido Acción Nacional.



C).- En cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por el suscrito relativo a la violación de que la solicitud de sanción del órgano competente no cumple con los requisitos señalados en el artículo 41 en relación con el artículo 36 del Reglamento, de igual manera la resolución que realiza la responsable a dicha causal de improcedencia es ilegal y fuera de todo sustento, pues la responsable inferior únicamente se ciñe en señalar que la denuncia si cumple con todos los requisitos legales pero no entra al estudio de mi agravio siendo que el mismo fue al tenor de lo siguiente: "De igual forma se interpone la de nulidad del acuerdo de radicación de fecha 13 de septiembre del año 2011, realizada por los CC. Lic. Reynaldo Delgadillo Moreno, Lic. Juan Manuel Solís Villa y Lic. Elías Ortiz González, en sus calidades de Secretario Técnico, Presidente y Secretario de la Comisión de Orden, respectivamente, dentro de los autos del expediente número COE-CDEZ/003/2011, lo anterior toda vez que dicho acuerdo de radicación no cumple con los Lineamientos del artículo 41 del Reglamento de Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, que a la letra señala: Artículo 41. Recibida la solicitud de sanción a que se refiere el artículo 36 del presente Reglamento, la Comisión en un plazo no mayor a diez días hábiles, emitirá acuerdo de radicación mediante el cual da inicio al procedimiento, en su caso, de prevención o desechamiento.

El acuerdo de prevención se emitirá cuando la Comisión considere necesaria la aclaración de la solicitud de sanción, para lo cual concederá al solicitante, un plazo de cinco días hábiles para la aclaración solicitada. Cuando se dicte acuerdo de prevención el plazo para resolver la radicación o desechamiento se contará a partir de la fecha en que se hubiera hecho la aclaración o se hubiere vencido el plazo para hacerla.

En el acuerdo de radicación se establecerá:

I. Que fue recibida solicitud de sanción de órgano competente. II. Que la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 36 del presente Reglamento. III. Ordenará la notificación de la causa a las partes, debiendo correr traslado al miembro activo sujeto a procedimiento de sanción, del escrito inicial así como de todos y cada uno de los anexos en los que sustente dicha solicitud. IV. El día y hora, así como el lugar, en que se llevará a cabo la audiencia que se establece en el artículo 43 del presente Reglamento, haciendo del conocimiento del miembro activo, su derecho de nombrar defensor que sea miembro activo del Partido, así como su derecho de presentar su contestación, ofrecer pruebas y rendir alegatos. Se dictará acuerdo de desechamiento, cuando la solicitud de sanción sea presentada por persona u órgano no facultado para ello, cuando no se cumpla con lo dispuesto por el presente Reglamento o cuando no se desahogue en tiempo y forma la prevención acordada.", como se desprende del numeral reglamentario antes transcrito, el auto de radicación tomado por ésta autoridad, no cumple con lo dispuesto en la fracción 11 del numeral reglamentario antes citado, lo anterior toda vez que en dicho acuerdo no se contempla ni se manifiesta que la solicitud cumpliera con los requisitos señalados en el artículo 36 del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones, lo que desde luego conlleva consigo mismo una flagrante violación procedimental en perjuicio del suscrito, lo que me coloca en un completo estado de indefensión para oponerme legalmente a la procedencia o no del procedimiento instaurado en mi contra, lo que desde luego es motivo suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de dicho acuerdo de radicación. ", luego entonces, mi agravio iba encaminado a demostrar que el auto de radicación no reúne los requisitos señalados en el artículo 41 del reglamento en especial en su fracción segunda y que lo es que la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 36 del presente Reglamento, circunstancias que la responsable paso por alto al resolver la causal de improcedencia en cuestión, y únicamente realiza un estudio de que la denuncia cumple con los requisitos de ley, pero no manifiesta nada al hecho de que en el auto de radicación no se contempla que dicha denuncia si cumple con



todos y cada uno de los requisitos a que hace alusión el artículo 36 del reglamento en cita, y que por lo tanto al no haber resuelto mi agravio conforme a derecho es que sea motivo suficiente para que se revoque la sentencia combatida, mas aun cuando el propio artículo 41 del reglamento es claro en señalar los requisitos que debe de cumplir el auto de radicación y que por lo tanto al no cumplir con el requisito señalado en su fracción II sea motivo suficiente para revocar dicho acuerdo de radicación y en consecuencia reponer todo el procedimiento a partir de dicha resolución de radicación.

D).- En cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por el suscrito relativo a la Comisión de indicar a la Comisión de Orden si el suscrito me encuentro derechos a salvo, si he sido sancionado, si estoy sujeto a procedimiento por autoridad distinta o si estoy pendiente de cumplir una sanción, y que la autoridad partidista inferior decreta mi agravio como inoperante, al sustentar su actuar en su siguiente argumento: **"Si bien el Comité solicitante no relaciona el detalle de señalar a la Comisión de Orden lo relativo a la situación del sujeto a procedimiento respecto de si ha sido sancionado, si se encuentra con sus derechos a salvo, si se le sigue un procedimiento de sanción alternativo y si tiene pendiente el cumplimiento de una sanción, ello no significa incumplimiento de una formalidad que trascienda en un requisito de tal entidad que tenga como consecuencia su improcedencia -en el caso, no se refiere a alguno de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley de la materia- en todo caso dicha omisión es una mera insuficiencia que no resulta suficiente como para acreditar que se vulneren derechos sustanciales del denunciado, ni tampoco se lesiona la secuela procesal del presente procedimiento, pues dichos datos son información para determinar en su caso, que el denunciado puede ser reincidente, si no tiene a salvo sus derechos suspendidos, entre otros antecedentes que le impida llevar a cabo el procedimiento, lo que no es limitante para que esta autoridad intrapartidaria continúe con este procedimiento, al no ser considerados por el legislador panista como requisitos generales ni especiales de procedencia, de ahí que se desestime la presente causal de improcedencia."** Argumento infundado que vierte la responsable inferior toda vez que todo procedimiento electoral debe de cumplir con los principios rectores de la materia electoral, a decir el de legalidad, objetividad, imparcialidad y certeza jurídica, circunstancia que no cumple el procedimiento instaurado en mi contra, lo anterior es así en virtud de que contrario a lo que argumenta la responsable la solicitud que le fuera planteada no cumple con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18 del reglamento Sobre Aplicación de Sanciones, que a la letra señala lo siguiente: **"Artículo 18.- ... segundo párrafo: En todo caso el órgano que solicite el inicio de un procedimiento de sanción, deberá indicar a la Comisión de Orden si el miembro activo sujeto a procedimiento se encuentra con sus derechos a salvo, si ha sido sancionado con anterioridad, si está sujeto a procedimiento de sanción por autoridad diferente o si tiene pendiente de cumplir una sanción. Para cumplimiento de lo anterior podrá presentar constancia de haber solicitado al registro Nacional de Miembros la información correspondiente para que sea entregada a la Comisión de Orden que resolverá la solicitud de sanción."**, como se desprende de la anterior transcripción legal, era obligación del órgano solicitante del inicio del procedimiento de sanción, indicarle al órgano partidista inferior si el suscrito me encuentro con mis derechos a salvo, si he sido sancionado con anterioridad, si estoy sujeto a procedimiento de sanción por autoridad diferente o si tengo pendiente de cumplir una sanción, y que contrario a lo que sostiene la inferior si es un requisito de procedencia para la instauración del procedimiento, pues es un requisito legal establecido en la ley reglamentaria, y por ende al no haberlo establecido el órgano partidista petionario de la sanción en su escrito de denuncia, es que no cumpla con la solicitud con la legalidad establecida, incumpliendo con su actuar el principio electoral de legalidad, aunado a lo anterior tampoco cumple dicha solicitud de sanción con el principio rector de certeza jurídica, puesto que la autoridad no puede establecer a su simple criterio y sin sustento alguno si el suscrito estoy o no en pleno uso de mis derechos partidistas, puesto que en el caso de que el suscrito estuviera suspendido de mis derechos partidistas el procedimiento sería ocioso, es decir,



no se puede establecer un procedimiento de sanción alguna en contra de un miembro que no se encuentra en pleno uso de sus derechos partidistas, y que por lo tanto era menester que la responsable inferior tuviera pleno conocimiento de la situación de mis derechos partidarios a efecto de establecer con certeza jurídica la procedencia o no del procedimiento solicitado, y en consecuencia lo que lo responsable debió de haber hecho al recibir la solicitud de marras era verificar que reuniera todos y cada uno de los requisitos de ley, y en caso de que hubiese alguna omisión haber requerido al órgano partidista solicitante sobre dicha omisión a efecto de que subsanara dicha omisión tal y como hace referencia el artículo 41 de la ley reglamentaria aplicable al caso en concreto, motivo por el cual se desprenda que la causal de improcedencia hecha valer por el suscrito sea procedente pues si es un requisito formal que si trasciende en el proceso instaurado en mí contra, ya que si dicha omisión no fuera subsanada por el órgano partidario peticionario llevaría a decretar el desechamiento de la solicitud.

De igual forma no pasa por desapercibido al suscrito el hecho de que legalmente la responsable pretenda establecer que es una omisión que no trasciende a efecto de que se decrete su improcedencia y que no es un requisito establecido en el artículo 36 del reglamento, y que dicha omisión es una insuficiencia que no resulta suficiente como para acreditar que se vulneren derechos sustanciales y que tampoco lesiona la secuela procesal; aberración jurídica que esgrime la responsable inferior, toda vez que si es una omisión que trasciende y afecta su improcedencia, puesto que es bien claro que el principio de legalidad electoral obliga a toda autoridad a conducir sus actos por todos sus caminos procesales velando por el cumplimiento de la ley aplicable al caso en concreto, como lo es en el presente caso que la responsable debió de haber vigilado que la solicitud de sanción cumpliera con todos sus requisitos formales establecidos en la ley reglamentaria, en especial en los artículos 18 y 36 de dicha ley reglamentaria, y que en caso de haberse omitido algún requisito haber prevenido al órgano partidista solicitante a efecto de que cumpliera con las omisiones detectadas, como lo señala el propio artículo 41 de la ley reglamentaria, y que para el caso de que no cumpliera con las omisiones que fueron detectadas haber desechado de plano la solicitud planteada, de ahí que si tiene trascendencia la omisión que hizo valer el suscrito y que sin fundamento ni motivación alguna la responsable lo decreta como inoperante, y que por ende deba de revocarse la sentencia que es recurrida.

De igual forma la responsable no entra al estudio de mi agravio consistente en el hecho de que el Comité Directivo Estatal no cumplió con los requisitos indispensables señalados en el artículo 36 fracción 11, inciso b), del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, que a la letra dice: **"36.- La solicitud para dar inicio a los procedimientos de sanción previstas en las fracciones IV, V Y VI del artículo 13 de los Estatutos Generales de Acción Nacional, deberá presentarse por escrito y cumplir con los siguientes requisitos: ... fracción 11. Inciso b) El nombre, domicilio y clave del Registro Nacional de miembros del miembro o miembros activos sujetos a procedimiento"**, agravio que la responsable paso por alto y que no entro al estudio del mismo, lo anterior sin fundamento ni sustento alguno, y que desde luego era menester que se manifestara sobre el mismo y que al no haberlo hecho violento en mi perjuicio lo consagrado en los artículos 14, 16 Y 17 de nuestra Carta magna pues me privo del derecho sin fundamento ni sustento alguno de que se manifestara de todas y cada uno de mis alegatos vertidos por el suscrito y en especial los de las causales de improcedencia que el suscrito hice valer en tiempo y forma legales y que por ende deba esta autoridad partidista de alzada entrar al estudio del mismo y decretar procedente mi causal de improcedencia por no cumplir la solicitud de sanción con los requisitos de ley establecidos en la ley reglamentaria aplicable al caso en concreto.

Para lo anterior tengo a bien citar la siguiente tesis jurisprudencial: (se transcribe)
Por una patria ordenada y generosa



SEGUNDO.- La resolución de fecha 3 de noviembre del año 2011, tomada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y recaída dentro de los autos del expediente principal número COE-CDEZ/003/201.

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS POR LA RESPONSABLE.- Se transgreden los artículos 14, 16, 17 Y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que la autoridad señalada como responsable inferior realiza una inadecuada valoración de las pruebas ofertadas por el órgano partidista denunciante, (periódicos), no menos cierto es que por un lado la responsable inferior no determina su fuerza indiciaria, es decir, no califica si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, además de que no pondera las circunstancias existentes en cada caso concreto, lo anterior sin determinar además de que las notas que se le imputan indebidamente al suscrito son aisladas, es decir, el contenido de las mismas son simples notas derivadas de un solo medio de comunicación escrito que no se encuentran corroboradas con otro rotativo, aunado al hecho de que el suscrito en todo momento en mi defensa he negado las mismas, circunstancias que la responsable partidista inferior no toma en cuenta al valorar las mismas, lo que desde luego dicha valoración no tiene sustento legal alguno, además de violentar los derechos del suscrito; en segundo lugar, porque la responsable inferior no hace una adecuada valoración de las mismas pues solo señala que de dichas documentales privadas se desprenden indicios, haciendo únicamente una narración frívola de cada nota periodística pero sin señalar en su valoración cual o cuales fueron las violaciones que a su decir se cometieron con las mismas, ni tampoco relaciona la o las conductas que a su decir el suscrito incurrió y que se encuadran en la normatividad partidista, esto tal y como se verá a continuación:

a).- La responsable sostiene que en fecha 15 de junio de 2010, se publicó en el Periódico denominado "Imagen", contenida en la página 1 y 3, la nota titulada **"Manipulo el PAN nuestra encuesta: acusa Berumen."** Nota periodística que desde luego no se le imputa al suscrito, ni la responsable inferior señala de qué manera se relaciona dicha nota con el suscrito o bien que es lo que prueba en perjuicio del suscrito el indicio de esa nota, lo que desde luego se desprende la violación procedimental a la valoración de dicha nota periodística realizada por la responsable inferior, y que deja al suscrito en un completo estado de indefensión para oponerme a la misma.

b).- Así mismo, la responsable sostiene que en fecha 17 de junio de 2010, se publicó en el Periódico denominado "Imagen", contenida en la página 1 y 3, la nota titulada **"Si se manipulo la encuesta: Calderón Galván" "El candidato a gobernador por el PAN declaró que en efecto se manipuló la encuesta y se deslinda del hecho, así como a directivos del PAN".** Nota periodística que desde luego la responsable inferior no señala que es lo que prueba en perjuicio del suscrito el indicio de esa nota, además de cuál fue la violación estatutaria que contiene la misma, cuando suponiendo sin conceder que el suscrito hubiese manifestado lo que en la nota se contiene en todo caso, probaría a mi favor de que en ningún momento he hablado mal de mis correligionarios panistas, pues la misma responsable sostiene que me deslindo del hecho así como a funcionarios panistas, por lo que al no estar relacionada la misma conforme a derecho es que se desprenda una flagrante violación a la valoración de dicha probanza en perjuicio del suscrito.

c).- Por otro lado, la responsable sostiene que en fecha 5 de octubre de 2010, se publicó en el Periódico denominado "La Jornada", contenida en la página 1 y 3, la nota titulada **"Calderón Galván: Acción Nacional, negocio personal de algunas familias" "Arremete contra sus correligionarios Ramírez Bucio y Ramón Medina."**, y que a decir de la responsable se desprende: **Que el suscrito denigre a funcionarios panistas,** pero la responsable no señala de qué manera fehaciente alguna de que manera o forma el suscrito denigre a



dichos funcionarios panistas, cuales fueron a su decir las palabras que el suscrito supuestamente use o empleé para denigrarlos, lo que desde luego se desprende una flagrante violación procedimental en perjuicio del suscrito al no valorar conforme a derecho dicha prueba; que el suscrito supuestamente declare que me uno a Pancho López ex candidato a gobernador por el PAN en 2004, para recuperar el partido de las manos de familias que han hecho un negocio personal, desprendiéndose de nueva cuenta que la responsable si bien es cierto señala supuestos datos que se contienen en la nota periodística no menos cierto es que no señala que es lo que en derecho acredita la misma ni la relaciona con algún numeral legal en la que el supuestamente el suscrito incurri en alguna falta estatutaria, además de ser una nota aislada que no prueba nada; que existe el indicio de que Pancho López y el suscrito no pararemos hasta llegar a la Dirigencia del Comité Directivo Estatal, supuesto indicio de que supuestamente el suscrito realice, pero que de igual manera no prueba nada pues aun y cuando lo hubiera dicho lo cuanto al indicio de que supuestamente el suscrito califique a Ramírez Bucio, de ser el vividor más grande del pan y que es un clínico que no tiene sentido ni razón en criticar un movimiento que realmente es de la militancia y no de tres personas para ver como se reparten los huesos, de igual manera es una nota aislada que el suscrito nunca he aceptado además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito; y por último en cuanto al supuesto indicio de que de la nota se desprende que el suscrito supuestamente manifesté no es justo que las mismas personas se repartan los puestos federales a su antojo, de igual manera es una nota aislada que el suscrito nunca he aceptado además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito; todos esos indicios únicamente reflejan la responsabilidad de quien escribió y publico la nota, más no así la veracidad de que el suscrito hubiese realizado dichas manifestaciones, pues las mismas no se encuentran corroboradas con otros medios de prueba que acrediten que efectivamente el suscrito realice dichas manifestaciones y en el sentido en el que se contempla en la misma.

d).- De igual forma, la responsable sostiene que en fecha 30 de noviembre de 2010, se publico en el Periódico denominado "El Sol de Zacatecas", contenida en la página 1 y 6, la nota titulada **"Denuncian por fraude a Cuauhtémoc Calderón"** **"Acude proveedor ante la PGJE"** nota periodística que no le es imputable al suscrito y que lo único que señala es que una persona acudió a denunciarme ilegalmente, y que la responsable no señala de que manera dicho indicio encuadra en alguna violación a la normatividad estatutaria de nuestro partido, además de ser supuestamente dicha nota realizada por un tercero que se escuda en el anonimato, y del cual no se desprenda violación estatutaria alguna.

e).- Por otro lado, la responsable sostiene que en fecha 1 de diciembre de 2010, se publico en el Periódico denominado "El Sol de Zacatecas" contenida en la página 1 y 10, la nota titulada **"Yo no debo nada quien debe es el PAN: Calderón"** nota periodística imputada indebidamente al suscrito pero de la cual de igual manera no se desprende violación estatutaria alguna de la misma que perjudique al suscrito y que en todo caso refleja que el suscrito me estuviera deslindando de cualquier contrato que no realice, y que la responsable no señala tajantemente que es lo que se pretende acreditar con la misma o bien que normatividad se infringió lo que desde luego se desprenda la violación procedimental en su valoración por parte de la responsable inferior.

f).- Por otro lado, la responsable sostiene que en fecha 24 de diciembre de 2010, se publico en el Periódico denominado "La Jornada", contenida en la página 1 y 4, la nota titulada **"Demandado el PAN por adeudos de casi 6 mdp de Cuauhtémoc Calderón."** Nota periodística que no es imputable al suscrito y que solo refleja el dicho de quien escribió y publico la misma más no así del suscrito y que la responsable de igual manera no señala tajantemente que es lo



que se pretende acreditar con la misma o bien que normatividad se infringió lo que desde luego se desprenda la violación procedimental en su valoración por parte de la responsable inferior.

g).- De igual forma, la responsable sostiene que en fecha 29 de diciembre de 2010, se publicó en el Periódico denominado "La Jornada", contenida en la página 1 y 4, la nota titulada **"Obligación moral y posiblemente legal del PAN pagar adeudos de campaña."**, de igual manera esta nota no refleja un supuesto dicho de mi parte sino se refiere al dicho de José Viramontes, además de que la responsable de igual manera no señala tajantemente que es lo que se pretende acreditar con la misma o bien que normatividad se infringió lo que desde luego se desprenda la violación procedimental en su valoración por parte de la responsable inferior.

h).- Por otro lado, la responsable sostiene que en fecha 24 de enero de 2011, se publicó en el Periódico denominado "Página 24", contenida en la página 1, 4 y 5, la nota titulada **"Plagada de corruptelas la meteórica carrera política de Cuauhtémoc." "Ahora quiere dirigir al PAN"**, nota periodística que no le es imputable al suscrito y que por el contrario deviene a atacar infundada mente la imagen del suscrito y que pretende acreditar con la misma o bien que normatividad se infringió lo que desde luego se desprenda la violación procedimental en su valoración por parte de la responsable inferior.

i).- De igual forma, la responsable sostiene que en fecha 7 de marzo de 2011, se publicó en el Periódico denominado "La Jornada", contenida en la página 1 y 3, la nota titulada **"Tilda Cuauhtémoc Calderón al PAN y a la sagrada familia entreguista al gobierno", "Asegura que hay acuerdos con Miguel Alonso para recibir beneficios y posiciones políticas", "Pactaron Pedro Martínez, Ramón Medina, Arturo Ramírez y José Isabel Trejo, denuncia el alcalde"**, Por lo que es de señalarse que es una nota aislada que el suscrito nunca he aceptado además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito, además de que son supuestos indicios que únicamente reflejan la responsabilidad de quien escribió y publicó la nota, más no así la veracidad de que el suscrito hubiese realizado dichas manifestaciones, pues las mismas no se encuentran corroboradas con otros medios de prueba que acrediten que efectivamente el suscrito realice dichas manifestaciones y en el sentido en el que se contempla en la misma.

j).- Por otro lado, la responsable sostiene que en fecha 14 de marzo de 2011, se publicó en el Periódico denominado "Página 24", contenida en la página 12, la nota titulada **"Me avergüenzo de la dirigencia de mi Partido: Cuauhtémoc Calderón"**, Por lo que es de señalarse que es una nota aislada que el suscrito nunca he aceptado además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito, además de que son supuestos indicios que únicamente reflejan la responsabilidad de quien escribió y publicó la nota, más no así la veracidad de que el suscrito hubiese realizado dichas manifestaciones, pues las mismas no se encuentran corroboradas con otros medios de prueba que acrediten que efectivamente el suscrito realice dichas manifestaciones y en el sentido en el que se contempla en la misma.

k).- Así mismo, lo responsable sostiene que en fecha 22 de abril de 2011, se publicó en el Periódico denominado "La Jornada Zacatecas", contenido en la página 1 y 3, lo noto titulado **"Presidente estatal del PAN, inepto y sin liderazgo: Cuauhtémoc Calderón"**, Por lo que es de señalarse que es una nota aislada que el suscrito nunca he aceptado además de que lo responsable no señalo cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni lo transgresión a lo norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de lo probanza en perjuicio del suscrito, además de que son supuestos indicios que



únicamente reflejan lo responsabilidad de quien escribió y publicó la nota, más no así la veracidad de que el suscrito hubiese realizado dichas manifestaciones, pues los mismos no se encuentran corroborados con otros medios de prueba que acrediten que efectivamente el suscrito realice dichos manifestaciones y en el sentido en el que se contempla en lo mismo.

En cuanto a lo documental consistente en el expediente 33/2010 correspondiente al Juicio Mercantil Ordinario promovido por el C. JEHUCHAN HERNANDEZ, en el que ofrecen al suscrito como testigo, y en lo cual a decir de lo responsable inferior se desprende que el suscrito actué como testigo en dicho juicio mercantil en contra del Partido Acción Nacional, es de señalarse que dicha probanza no acredita nada en perjuicio del suscrito, y que demuestra una vez más el desconocimiento del derecho que tienen las autoridades partidistas inferiores, puesto que es de explorado derecho que todo ciudadano tiene la obligación legal de acudir a los tribunales para declarar sobre los hechos de que tenga conocimiento, además de que el suscrito fui llamado por dicho tribunal a petición de una de las partes y solo actué en ejercicio de mis obligaciones que como ciudadano tengo el deber legal de hacerla. Además de que lo responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito.

En cuanto a la documental consistente en el expediente 34/2010 correspondiente al Juicio Mercantil Ordinario promovido por lo C. FABIOLA ELIZONDO ESPINOZA, en el que ofrecen al suscrito como testigo, y en la cual a decir de lo responsable inferior se desprende que el suscrito actué como testigo en dicho juicio mercantil en contra del Partido Acción Nacional, es de señalarse que dicha probanza no acredita nada en perjuicio del suscrito, y que demuestra una vez más el desconocimiento del derecho que tienen las autoridades partidistas inferiores, puesto que es de explorado derecho que todo ciudadano tiene la obligación legal de acudir a los tribunales para declarar sobre los hechos de que tenga conocimiento, además de que el suscrito fui llamado por dicho tribunal a petición de una de las partes y solo actué en ejercicio de mis obligaciones que como ciudadano tengo el deber legal de hacerla. Además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito.

En cuanto a la documental consistente en la copia certificada de la demanda y anexos de diligencias preparatorias a juicio mercantil promovida por el C. EDUARDO CANALES SILVA, en fecha 17 de noviembre de 2010, por conceptos de diversos consumibles supuestamente suministrados a la casa de campaña del suscrito en el pasado proceso electoral local de Zacatecas, es de señalarse que dicha probanza no acredita nada en perjuicio del suscrito, pues en todo caso lo único que se desprende es que se suministraron insumos para trabajar en la casa de campaña. Además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito.

En cuanto a la documental consistente en copia de la denuncia penal promovida por el C. PEDRO DAMIAN FELIX ALVAREZ EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2010, Y su respectiva ratificación POR EL DELITO DE FRAUDE Y LO QUE RESULTEN en contra del C. Cuauhtémoc CALDERÓN GALVÁN, por motivo de la supuesta adquisición de cómputo para la casa de campaña, y que la responsable señala que el suscrito fui denunciado por el presunto delito de fraude, es de señalarse que dicha probanza no acredita nada en perjuicio del suscrito, pues solo contiene el dicho de una persona que se siente agraviada por el suscrito, pero de ninguna manera queda acreditada la supuesta comisión de dicho delito, por la supuesta interposición de la denuncia, ni obra en autos constancia alguna de que el suscrito se hubiese sometido a algún proceso penal o bien que hubiese sido condenado por el supuesto delito que se



me imputa. Además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito.

En cuanto a la documental consistente en copia de la comparecencia ante el Ministerio Público de la LIC. MARIZA CARDENAS HERNANDEZ, donde ratifica escrito de denuncia penal promovida por el H. Ayuntamiento de Zacatecas, por una serie de delitos supuestamente imputados al suscrito, y que la responsable señala que el suscrito fui denunciado por diversos delitos por el H. Ayuntamiento de Zacatecas, es de señalarse que dicha probanza no acredita nada en perjuicio del suscrito, pues solo contiene el dicho de una autoridad que se siente agraviada por el suscrito, pero de ninguna manera queda acredita en autos la supuesta comisión de dichos delitos por la supuesta interposición o ratificación de la denuncia, ni obra en autos constancia alguna de que el suscrito se me hubiese sujetado a algún proceso penal o bien que hubiese sido condenado por los supuestos delitos que se me imputan. Además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito.

En cuanto a la documental consistente en el Dictamen de la cuenta pública del municipio de Zacatecas relativa al ejercicio fiscal de 2008, mismo que sanciona al suscrito con el fincamiento de responsabilidades administrativas, por supuestamente no haber respetado los criterios que marca la ley, es de señalarse que con dicha probanza no se acredita nada en contra del suscrito por el supuesto fincamiento de responsabilidades administrativas, pues en todo caso lo único que se desprende es que al suscrito se le puede llamar a rendir cuenta en la que se me dé la garantía de audiencia y poder defenderme, aunado al hecho de que no señala la responsable a qué tipo de fincamiento de responsabilidades se refiere. Además de que la responsable no señala cual es la violación que supuestamente cometí con ello ni la transgresión a la norma estatutaria, lo que deviene a una inadecuada valoración de la probanza en perjuicio del suscrito.

En cuanto a la prueba técnica, consistente en un disco compacto que contiene una videograbación de una entrevista al programa diálogos del grupo radiofónico 8-15 realizada al C. Cuauhtémoc CALDERÓN GALVÁN, transmitida en fecha 28 de septiembre de 2010, en la que a decir de la responsable se hacen declaraciones que dañan gravemente la imagen del partido y la de sus dirigentes situación que a decir de la responsable contravienen los fines y principios de Acción Nacional, al respecto se señala que la autoridad responsable cometió una flagrante violación al haber admitido dicha probanza, pues fue admitida sin fundamento ni motivación alguna, ya que al ser una videograbación como lo sostiene la responsable, es requisito sine qua non que se ofrezca con todos los requisitos señalados por la ley, a decir, el de señalar concretamente lo que se pretendía acreditar, identificar a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la responsable inferior estuviese en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, situación que no fue ofertada de este modo y que por lo tanto debió de haber sido desechada la misma, y que al haberla admitido y desahogado la responsable inferior es que violenta en mí perjuicio lo consagrado en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al hecho de que la responsable ni siquiera la desahoga en los términos precisados con anterioridad, y que por ende la misma no deba de ser tomada en cuenta por esta autoridad partidista de alzada.



En cuanto a la prueba técnica, consistente en un disco compacto que contiene la grabación de una entrevista realizada por un periódico de circulación estatal supuestamente al suscrito, es de señalarse que la misma también es violatoria a mis derechos constitucionales, pues la valoración que hace la responsable violenta los principios rectores de la materia electoral en especial a los de legalidad y certeza jurídica, pues no es posible que se pretenda valorar una probanza que supuestamente deviene una entrevista realizada por un periódico que no fue debidamente identificado ni por la responsable inferior ni por el propio denunciante, por lo que no debió de haberse tomado en cuenta, además de que dicha grabación de ninguna manera refleja de manera alguna que sea la voz del suscrito ni que yo hubiese participado en la misma, ya que no se corrobora con ningún otro medio de prueba, lo que desde luego no tiene valor probatorio alguno como ilegalmente pretende hacerlo creer la responsable, y que por ende deba de desecharse al momento de valorar de nueva cuenta esta probanza por parte de esta autoridad de alzada.

Para lo anterior tengo a bien citar las siguientes interpretaciones jurisprudenciales dictadas por la H. Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: (se transcribe)

TERCERO.- La resolución de fecha 3 de noviembre del año 2011, tomada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y recalda dentro de los autos del expediente principal número COE-CDEZ/003/201.

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS POR LA RESPONSABLE.- Se transgreden los artículos 14, 16 Y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que la autoridad señalada como responsable inferior, en la sentencia que se tacha de ilegal, especifica mente en su apartado **EXISTENCIA DE LOS HECHOS**, señala lo siguiente: **"De las constancias en examen que obran en autos, se advierte que existen indicios de grado convictivo suficientes para afirmar que el C. Cuauhtémoc Calderón Galván realizó expresiones que se enderezan como ataques de hechos y de palabra a los principios y programas del Partido, a sus intereses, a su honor, a su dignidad, y su dirigencia, entre otras conductas que constituyen infracciones a la disciplina intrapartidaria, todo ello, mediante las diversas entrevistas realizadas en medios de comunicación social, tanto escritos como electrónicos en el Estado."** Así mismo señala **"De lo anterior, sin embargo, en autos existen varias notas y entrevistas de los diversos órganos de información que coinciden en lo sustancial de las expresiones, sin que exista un mentis en el momento oportuno en que se publicaron dichas notas o entrevistas en que se le atribuyeron varios ataques de hecho y de palabra a la institución política, sus órganos y su normatividad, no se pronuncio sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, tanto en su momento, como en el propio escrito de defensa presentado por el denunciado en el presente procedimiento."**, posteriormente la autoridad partidista responsable inferior realiza una serie de argumentaciones que nada tiene que ver con la existencia de los hechos; como se desprende de lo anterior la responsable inferior en ningún momento acredita hecho alguno realizado por el suscrito, sino únicamente se ciñe en señalar que "... se advierte que existen indicios de grado convictivo suficientes para afirmar que el C. Cuauhtémoc Calderón Galván realizó expresiones que se enderezan como ataques de hechos y de palabra ...", pero no hace alusión alguna a cuales fueron esos supuestos ataques de hechos y de palabra, o bien a que indicios se refiere, cuáles fueron las supuestas acciones de hecho y de palabra que el suscrito supuestamente realice, por lo que denota que la propia autoridad inferior responsable es sabedora que el suscrito no realice ninguna acción, también se transgreden nuestras normas estatutarias, y que al no señalar con mediana claridad las acciones y/o omisiones



realizadas supuestamente por el suscrito, es que se derive la inexistencia de los mismos, y por lo tanto dicho apartado se encuentra fuera de todo sustento legal alguno al no estar debidamente fundado ni motivado; ahora bien y en cuanto a lo que aduce la responsable inferior que " ... en autos existen varias notas y entrevistas de los diversos órganos de información que coinciden en lo sustancial de las expresiones ... ", su argumento es muy subjetivo pues no señala en principio a que notas se refiere, en que parte coinciden en lo sustancial en las supuestas expresiones realizadas por el suscrito, ni cuales fueron los hechos u argumentos que supuestamente el suscrito realice, lo que deviene a lo infundado de su argumento y por ende se transgreden mis garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, y que por ende conlleve a esta autoridad partidista de alzada a revocar en todas y cada una de sus parte la sentencia recurrida por no haberse dictado conforme a derecho.

Para lo anterior tengo a bien citar la siguiente tesis jurisprudencial: (se transcribe)

CUARTO.- La resolución de fecha 3 de noviembre del año 2011, tomada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y recaída dentro de los autos del expediente principal número COE-CDEZ/003/201.

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS POR LA RESPONSABLE.- Se transgreden los artículos 14, 16 Y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, al no encontrarse fundado ni motivado su considerando QUINTO, de la sentencia recurrida, lo anterior en base a las siguientes consideraciones lógicas jurídicas que en seguida señalo:

EN CUANTO A LOS HECHOS:

A).- Se transgrede en mi perjuicio el resumen de hechos que realiza la responsable, y que se basa en señalar las pruebas que fueron ofertados por la autoridad partidista denunciante, desde este momento y para efectos de este apartado solicito se me tenga por reproduciendo los agravios vertidos en este escrito y señalado como **SEGUNDO**, y en el cual el suscrito combato todos y cada uno de los elementos de prueba que dieron sustento a los supuestos hechos denunciados, y en el cual por economía procesal es que solicito se me tenga por reproducidos en este apartado, argumentando además que en los hechos a que hace alusión la responsable inferior de que el suscrito fui testigo en un proceso judicial en contra del Partido Acción Nacional, en la cual si bien es cierto sostiene que probablemente el suscrito lo hice en virtud de un acto cívico, y que false mi declaración, en virtud de que fui el suscrito el que manejo los gastos de campaña, lo anterior no tiene sustento legal alguno y solo la responsable inferior emite una aberración jurídica, esto en virtud de que es de explorado derecho de que toda persona tiene la obligación de acudir a los tribunales judiciales si es llamado a rendir su testimonio sobre los hechos que son motivos de la Litis, y en dicho caso el suscrito fui llamado por un tribunal a efecto de rendir mi declaración y que por lo tanto era mi obligación legal de acudir al mismo a rendir mi declaración sobre los hechos que me constan y que fueron parte de la Litis, y no por ese hecho el suscrito estoy yendo en contra de mi partido, puesto que como lo pretende la responsable inferior era que el suscrito me presentara para mentir ante una autoridad judicial con el fin de proteger los intereses del Partido, lo que desde luego al haberlo hecho de la manera que la responsable señala me encontraría el suscrito incurriendo en un delito penal que se llama falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial y por lo tanto lo infundado de su argumento; ahora bien y en cuanto a que el suscrito maneje los gastos de campaña, es de decirse que la responsable inferior señala verdades a medias, puesto que si bien es cierto se formo un grupo de personas que estuvieron al tanto de los gastos de campaña, no menos cierto



es que dichas personas son parte del Partido, y comisionados para ejercer los gastos que se van erogando por concepto de la campaña realizada por el suscrito, lo cual desde luego tiene una normatividad fiscal, en la que todos los insumos y productos que se generen por concepto de la campaña deben de ser justificados con facturas a nombre del Partido Acción Nacional, en donde los productos que se compren pasan a ser propiedad del Partido y no del suscrito, y que por lo tanto el Partido tiene la obligación legal de justificar dichos egresos así como las deudas que se originen por concepto de la campaña realizada por cada uno de sus candidatos, y no como infunda y temerariamente pretende hacer creer la responsable de que al suscrito se le entregó un dinero para usarlo a discreción y que del mismo no tenga que dar cuenta a nadie de ello, además de que es obligación de los partidos de realizar las campañas en base al presupuesto otorgados por la autoridad administrativa electoral y en base a su tope de campaña para cada una de sus candidatos, de ahí que no le asiste el derecho ni la razón a la responsable para determinar que el suscrito falseó su declaración, máxime que no existe prueba de su dicho dentro del expediente y que devenga de lo infundado de su dicho.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL SUSCRITO:

B).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que la denuncia presentada por el PAN adolece de oscuridad, ya que no señala situaciones de tiempo, modo y lugar donde se dieron u originaron los hechos que se me imputan, haciendo únicamente transcripciones de notas periodísticas sin valor legal alguno, y que la autoridad partidista responsable inferior lo señala como inoperante, al señalar infundadamente que el Comité denunciante estableció en el apartado correspondiente las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión, aseveración errónea y falaz que emite la responsable, puesto que basta ver el escrito de denuncia en la cual solamente establece la transcripción de notas periodísticas y su fecha de publicación, mas no así determina el lugar donde supuestamente el suscrito realice las supuestas entrevistas que dieron origen a su publicación, así como a que periodista les hice dichas declaraciones y las fechas en que las realice, circunstancias que al no señalarse en la denuncia deja al suscrito en completo estado de indefensión para oponerme legalmente a las mismas, pues el suscrito no puedo defenderme válidamente si estuve presente ese día en que supuestamente se realizaron las entrevistas que se me imputan, circunstancias que eran necesarias para mi adecuada defensa, y no como de manera parcial la responsable inferior pretende hacer creer que la denuncia si establece dichas formalidades, al pretender establecer que se deduce de las mismas dichas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que desde luego su argumento carezca de todo sustento legal al no estar debidamente fundado ni motivado, además de que no establece en que parte de la denuncia se establecen esas condiciones, sino que únicamente se limita a establecer que el comité denunciante estableció en el apartado correspondiente dichas circunstancias, pero no señala fehacientemente en cual apartado se dice o se señala, lo que devenga a lo infundado de lo resuelto por la responsable inferior y que consigo mismo trae una flagrante violación a mis garantías individuales y que conlleven a esta autoridad partidista de alzada a revocar la sentencia recurrida declarando que son procedentes mis agravios.

Para lo anterior tengo a bien citar la siguiente tesis jurisprudencial: (se transcribe).

B).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que en la denuncia no se señala cuáles fueron las supuestas manifestaciones que se dice hice públicas como asuntos internos del partido, y que la responsable señala mi agravio como inoperante, al manifestar textualmente lo siguiente: **"El órgano directivo señala en la parte conducente del escrito de denuncia que las declaraciones hechas por el hoy denunciado en la prensa escrita y en tv se vertieron públicamente de maneja sistemática y señalando el medio de comunicación social, escrito o electrónico, la fecha y el ejemplar correspondiente y complementariamente su resumen, lo que**



contradice lo manifestado por el denunciado en su escrito de defensa, de ahí lo inoperante del presente agravio", como se desprende del anterior argumento que vierte la responsable, el mismo no tiene sustento legal alguno ni se encuentra debidamente fundado ni motivado, denotando además de que la responsable inferior desconoce las formalidades esenciales de una denuncia o demanda, y que lo es que contenga hechos claros y precisos, es decir, que en la denuncia se establezca de manera fehaciente causales son los hechos imputados al suscrito haciendo una relación de los mismos en los que se contengan circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de que se identifique planamente el hecho que se imputa, y no como temerariamente pretende la responsable hacer creer que con la pura denominación de los rotativos y su resumen ya se está cumpliendo con los requisitos y formalidades de la ley, pues es claro que en toda denuncia se debe de identificar de manera clara y precisa cuales fueron las supuestas manifestaciones que a su decir de la denunciante el suscrito hizo públicas y cuál fue el probable ilícito ocasionado que trajo consigo mismo la violación estatutaria o reglamentaria, y que por lo tanto al no haberse determinado de esta manera en el escrito de denuncia ni encontrarse debidamente fundado ni motivado el argumento vertido por la responsable inferior, es que este órgano partidista de alzada deba de revocar la sentencia recurrida y decretar como fundado mi agravio dejando en consecuencia a salvo de mis derechos partidistas.

C).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que en la denuncia no se señala en que forma el suscrito realice el ataque de hecho o de palabra a la dirigencia estatal, y que la responsable señala mi agravio como inoperante, al manifestar textualmente lo siguiente: **"Como ya se estableció en agravio precedente, se dieron un sin número de expresiones públicas que dieron origen a la denuncia del Comité Directivo Estatal, esto es, de los autos se desprende que la forma de atacar de palabra a los programas y principios del partido, así como a su dirigencia y consecuentemente a su honra y dignidad, entre otras consecuencias de indisciplina, lo fue a través de los medios de comunicación social del Estado, además no sólo estas expresiones públicas constituyen actos de deslealtad para con el partido entre otros actos de indisciplina."** desprendiéndose una vez más el desconocimiento que tiene la responsable del derecho y que tal parece únicamente trata de justificar que el órgano partidista denunciante cumplió como los requisitos esenciales de una denuncia, violentando con su actuar los principios rectores de la materia electoral en especial los de legalidad e imparcialidad, pues es de explorado derecho que en toda denuncia se debe de identificar de manera clara y precisa cuales fueron las supuestas formas en que el suscrito realice el de hecho de palabra a la dirigencia estatal y que trajo consigo mismo la violación estatutaria o reglamentaria, y que por lo tanto al no haberse determinado de esta manera en el escrito de denuncia ni encontrarse debidamente fundado ni motivado el argumento vertido por la responsable inferior, es que este órgano partidista de alzada deba de revocar la sentencia recurrida y decretar como fundado mi agravio dejando en consecuencia a salvo mis derechos partidistas.

D).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que en la denuncia no existen fundamentos legales para considerar que el suscrito presentado por el Comité Directivo Estatal sea una formal denuncia, y que la responsable señala mi agravio como infundado, al manifestar textualmente lo siguiente: **"En el escrito de denuncia se describe por un lado, los supuestos aplicables al caso en concreto de solicitud de expulsión del miembro activo denunciado, y por el otro, en tanto se da lectura íntegra del escrito de marras, se advierte como el Comité denunciante deduce se violan las mismas al establecer desde su óptica las consideraciones que creyó pertinentes, según se observa: ..."**, como se desprende una vez más, la responsable inferior actúa de manera parcial al resolver los argumentos o agravios vertidos por el suscrito, toda vez que no basta el que el órgano denunciante diga que se violentan artículos estatutarios, sino que debe además relacionar los numerales con los hechos y señalar de manera fehaciente a forma en que a su juicio se vulnera cada uno de los preceptos legales de conformidad a



los supuestos hechos, y que al no estar de esta forma no reúna los requisitos de una denuncia o demanda, dejando al suscrito en un completo estado de indefensión para imponerme legalmente a la denuncia o demanda interpuesta en contra del suscrito, de ahí que sea este órgano de alzada la que deje sin efectos la sentencia recurrida, por no estar debidamente fundado ni motivado la sentencia que en este acto se recurre y dejar a salvo mis derechos partidistas para todos los efectos legales a que haya lugar.

E).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que las 12 notas en que se sustenta la supuesta denuncia no todas le son imputadas al suscrito, sino que por el contrario contienen afectaciones jurídicas infundadas en mi contra, que en todo caso afectan únicamente al suscrito, de ahí que sea ineficaz la misma, por carecer de valor jurídico alguno por las demás notas que se me imputan y que dicen que el suscrito realice sin reconocerlo son manifestaciones y responsabilidad de quien lo escribe, además de que son notas editadas y que no reflejan en nada la información brindada por el informante, sino la opinión de segunda mano la da a conocer, por lo que se debía desechar la denuncia presentada en mi contra, por ser notoriamente frívola e improcedente, y que la responsable inferior señala que mi agravio es infundado, al manifestar textualmente lo siguiente: **"Lo anterior es así, toda vez que de lo manifestado por el denunciado en el sentido de que no todas las notas periodísticas se imputan a su persona, en tanto que la nota publicada en el periódico denominado "imagen" de fecha 15 de junio de 2010, cuyo rubro señala "Manipulo el PAN nuestra encuesta, acusa Berumen." Se infiere nítidamente que en efecto en ella no tiene relación alguna con declaración que afecte a los principios y programas del partido, a sus dirigentes, intereses o derechos básicos del PAN",** así mismo la responsable inferior sigue señalando **"Sin embargo, las notas periodísticas de El Sol de Zacatecas de fecha 30 de noviembre de 2010, cuyo rubro señala "Denuncian por fraude a Cuauhtémoc Calderón". "Acude ante la PGJE". La publicación en el periódico La jornada de fecha 29 de diciembre del 2010, cuyo rubro contiene "demandado el PAN por adeudos de casi 6mdp de Cuauhtémoc Calderón", también la nota del Periódico "Página 24" de fecha 24 de enero del 2011, cuyo rubro es "Plagadas de corruptelas la meteórica carrera política de Cuauhtémoc." "Ahora quiere dirigir al PAN", y finalmente la nota publicada de fecha 28 de febrero del año 2011, cuyo rubro es, "Embargan a Calderón por una deuda de \$1 millón 9 mil 500", si bien no le imputan declaraciones como ataques de hecho o de palabra al partido, si le causa un descrédito a la imagen del Partido Acción Nacional, ya que en sí mismas las noticias que se difunden en dichos medios de prensa forman opinión pública, esto es, al ser un militante con cierta notoriedad, viola la imagen del partido, el honor de los miembros y la militancia en general, porque el C. Cuauhtémoc Calderón en calidad de Ex Presidente Municipal de la Capital Zacatecana y ex candidato a Gobernador en la contienda electoral de 2010, y su involucramiento es escándalo de corrupción y demandas por fraudes, manchan en forma invariable al partido en su imagen y su prestigio", y por último la responsable inferior aduce "Lo relatada permite arribar a la conclusión de que con excepción de la primera de las notas referidas, las demás si producen denigración del partido y su dirigencia, por lo tanto se declara infundado el presente agravio."** Como se desprende de los argumentos señalados por la responsable inferior para determinar infundado mis alegaciones, los mismos no tienen sustento jurídico alguno por no estar debidamente fundados ni motivados, esto es así porque no es válido aceptar lo que sostiene la responsable que imputaciones realizadas en perjuicio del suscrito, manchen en forma invariable al partido en su imagen y su prestigio, pues como ya se dijo son afectaciones directas que en todo caso dañan la imagen y prestigio del suscrito pero no así la del Partido Acción Nacional, pues pensar lo contrario nos llevaría al absurdo de que cualquier persona al que se le hagan imputaciones injustas o no se le sigan procesos de sanción de expulsión, o bien que a cualquier funcionario público militante del Partido Acción Nacional a que se le achagues delitos u cualquier otra denuncia administrativa deba de ser sancionado con la como por ejemplo al Presidente de la República quien es militante del PAN y al



que se le achacan delitos graves por su combate al Narcotráfico, y que por consecuencia deba de sujetarse a proceso de expulsión por dañar la imagen del partido, lo que además de ser absurdo es ilegal e ilógico, además no existe sustento legal en las publicaciones que la responsable inferior determina ilegalmente como procedentes, pues no hay sentencias firmes ni procedimientos legales mediante la cual se haya acreditado lo señalado en las notas en perjuicio del suscrito, y que por lo tanto no se debe de hacer valoraciones o juicios de manera subjetivos, además de que la responsable no señala de manera fehaciente en qué forma se daño la imagen y prestigio de partido, por las declaraciones que le fueron imputadas al suscrito, lo que deviene en todo ello en lo infundado y motivado del sustento de la responsable que la llevo a declarar como infundado mis argumentos de defensa, de ahí que esta autoridad partidista de alzada revoque en todos y cada uno de sus términos la resolución recurrida para todos los efectos legales a que haya lugar, dejando en consecuencia a salvo todos mi derechos partidistas como miembro activo del Partido Acción Nacional.

F).- En cuanto el agravo en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que las pruebas ofertadas por el órgano partidista denunciante, son insuficientes e ineficaces para acreditar la supuesta solicitud de expulsión del PAN, ya que estas son notas periodísticas que sólo tienen valor de indicios y para hacer prueba de su contenido, resulta necesario que las mismas se adminiculen con otra prueba que se relacione de manera directa o indirecta con las aseveraciones contenidas en dichas notas periodísticas, y que la responsable inferior señala que mi agravio es infundado, al manifestar textualmente lo siguiente: **"La inconformidad del denunciado es inexacta, e razón de que el órgano directivo presentó diversas probanzas que a consideración de esta Comisión de orden resultan suficientes para decretar la expulsión del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, por lo que para mayor claridad, se desglosan las inferencias que de ellas se obtienen a continuación"**: posteriormente la responsable hace una transcripción de las pruebas que oferto la autoridad partidista denunciante y en seguida vuelve a señalar lo siguiente: **"De lo anterior, y de lo señalado en la parte conducente de transcripción de declaraciones en prensa escrita y electrónica por parte del C. Cuauhtémoc Calderón (SIC) (pruebas que obran en autos) contrariamente a lo afirmado por el denunciado se actualizan las hipótesis normativas previstas en los Estatutos Generales y Reglamentos sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, ya que constituyen no sólo ataques de palabra a la dirigencia estatal del Partido, sino que constituyen actos de deslealtad para con el partido."** y luego sigue señalando **"La mayoría de las declaraciones son contrarias a la realidad, y por ello, no pueden tener otra intención que la afectación dolosa al partido, además el denunciado señala que las pruebas que oferta el Comité denunciante son sólo notas periodísticas, y se limitó cuestionar la intencionalidad y la calidad probatoria de dichos documentos, pero en ningún momento negó haber realizado los actos o que el contenido sea incorrecto."** Aduciendo además **"El contenido de las notas genera convicción de los hechos que en ellas se consignan, dado que provienen de distintos medios, citan al acusado como fuente y coinciden en lo sustancial. Las notas periodísticas no son pruebas aisladas, sino que, opuestamente a lo que afirma el denunciado, se adminicula con pruebas técnicas (grabaciones y entrevistas) donde se escucha la voz de el (SIC) C. Cuauhtémoc Calderón y se advierte la coincidencia de lo declarado con las notas periodísticas."** Como se desprende de las anteriores argumentaciones que realiza la responsable inferior, las mismas no se encuentran debidamente fundadas ni motivada para decretar como infundadas mis alegaciones; esto es así en primer lugar, porque contrario a lo que sostiene la responsable los elementos de prueba presentados por la autoridad partidista denunciante no son suficientes para acreditar la probable responsabilidad del suscrito en los hechos que se me imputan, toda vez que como ha quedado debidamente sustentado en agravios que anteceden y que por economía procesal solicito se me tengan por reproducidos en esta apartado, las documentales privadas únicamente podrían en su caso señalar indicios que adminiculados una con otras cada una de ellas se refiere a distintos hechos y no



a son solo de ellos, y que no se sustentan con ningún otro medio de prueba, que robustezca lo consignado en cada una de ellas, en cuanto a las documentales públicas de igual manera no tienen valor probatorio pleno por contener simples hechos de los cuales no se encuentran acreditados ni ante las autoridades públicas o judiciales como tampoco ante la autoridad partidista responsable inferior, y en cuanto a las grabaciones que señala la responsable inferior, las mismas ni siquiera pueden ser tomadas como prueba porque no reúnen los requisitos de ley para su admisión y desahogo, además y en cuanto a la grabación que contiene voces que se imputan al suscrito, las mismas fueron corroboradas con otros medios de prueba que determina que una de ellas pertenece al suscrito, es decir, con una prueba pericial de voz que determinara que una de ellas si pertenece al suscrito, de ahí lo infundado de las manifestaciones realizadas por la responsable inferior, en segundo lugar, porque la responsable hace una argumentación subjetiva de que si se actualizan las hipótesis normativas previstas en los Estatutos Generales y Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, puesto que para ello debió de haber señalado a que hipótesis normativas a que refiere encuadra cada uno de los hechos y pruebas que pesan en mi contra, por lo que al no señalar lo anterior deje al suscrito en un completo estado de indefensión para oponerme legalmente a la misma y consigo mismo envuelva únicamente expresiones subjetiva sin sustento legal y que devenga a lo infundado e inmotivado de su dicho, y en cuanto a que constituyen no sólo ataques de palabra a la dirigencia estatal del partido, de igual manera solo hace señalamientos subjetivos si sustento legal alguno, pues la responsable no hace señalamiento a que ataques de palabra se hicieron a la dirigencia estatal y que a su decir constituyen actos de deslealtad, es decir, en que se fundamenta para determinar que existieron por parte del suscrito actos de deslealtad, y toda vez que sus argumento no se encuentra sustentados conforme a derecho por no estar debidamente fundados ni motivados es que se deba de revocar la sentencia recurrida; en tercer lugar, porque cuando la responsable aduce que la mayoría de las declaraciones son contrarias a la realidad, y por ello, no pueden tener otra intención que la afectación dolosa del partido, de igual forma es infundado pues la responsable hace una valoración sui generis de las notas periodísticas pero no señala de manera particular a cual o cuales de ellas se refiere, dejando al suscrito en completo estado de indefensión para oponerme legalmente a la misma, pues si hablamos que de 12 notas periodísticas 6 son las únicas que se le imputan al suscrito, a cual de ellas se refiere máxime que señala que a la mayoría de ellas, lo que hace suponer que es mas de la mitad, y que por ende valora en mi perjuicio como ataques al partido notas de las cuales no les son imputadas al suscrito, de ahí lo infundado de su argumento, ahora bien en cuanto sostiene la responsable inferior de que el suscrito únicamente me limitea cuestionar la intencionalidad y la calidad probatoria de dichos documentos, pero en ningún momento negué haber realizado los actos o que el contenido sea incorrecto, de igual manera su dicho es infundado, y que denota la falta de exhaustividad de mi escrito de defensa por parte de la responsable inferior pues se desprende con exactitud a foja nueve de mi escrito de defensa textualmente lo siguiente: **"...además de que las demás notas que se me imputan y que dicen que el suscrito realice sin reconocerlo desde luego..."** luego entonces queda claro que el suscrito nunca e reconocido como más las notas periodísticas que se me imputan y que en todo caso quien estaba obligado a probar que el suscrito si las realice lo era precisamente el órgano denunciante y no el suscrito demostrar que no las realice de ahí lo infundado e inmotivado de argumento vertido por la responsable inferior, y que devenga a que esta autoridad revoque la resolución combatida por todos los efectos legales a que haya lugar; ahora bien y en cuanto a lo que aduce la responsable de que el contenido de las notas le genera convicción de hechos que en ellas se consignan, dado que provienen de distintos medios, citan al cusado como fuente y coinciden en lo sustancial, es de señalarse que la responsable inferior emite una argumentación si fundamento ni motivación alguna, puesto que no menciona con median claridad a que hechos se refiere o cuales son los hechos que en ellas se consignan que generan transgresiones a la normatividad partidista, lo que deja al suscrito en completo estado de indefensión para oponerme a su argumento legalmente, y el hecho de que provengan de distintas fuentes de igual manera en las mismas se contiene



diversos hechos que no se infieren a uno solo de ellos, por lo que cada una de ellas se refiere a hechos aislados y no en su conjunto, así mismo el hecho de que se mencione al suscrito como supuesta fuente en algunas de ellas no son en todas como temerariamente lo pretende hacer valer la responsable inferior, denotando su actitud dolosa en contra del suscrito, además de que las que se me imputan devienen a ser notas editadas de a las que únicamente refieren la responsabilidad de quien la escribe y no del suscrito, y como ya se dijo no coinciden en lo sustancial una con otra o que deviene a lo infundado del argumento de la responsable inferior; por otro lado y en cuanto a lo que sostiene la responsable de que las notas periodísticas no son pruebas aisladas, sino que, opuestamente a lo que afirma el denunciado, se adminiculas con pruebas técnicas y que se advierte la coincidencia de lo declarado con las notas periodísticas, de igual forma su argumento es infundado, pues que aun y cuando la responsable ilegalmente pretenda adminicular las notas con las pruebas técnica, en ellas reflejan en todo caso hechos o circunstancias diversas que no se refieren a un solo hecho, como ilegalmente pretende hacer creer la responsable inferior, además de que no señala de manera fehaciente la forma de adminiculación que se da una con otra, es decir como refuerza una prueba con otra lo consagrado en cada una de ellas, los supuestos hechos consignados en estas, de ahí lo infundado de su argumento, y que derive a que esta autoridad revoque la sentencia que es recurrida y deje a salvo en consecuencia mis derechos partidistas para todos los efectos ilegales a que haya lugar.

Ahora bien y en cuanto a lo que afirma la responsable al señalar textualmente **"Como se puede apreciar, el C. Cuauhtémoc Calderón tuvo el propósito de denigrar al partido, a su dirigencia y compañeros. Acuso a su dirigente de inepto, señalo a su partido como negocio personal y de familias, hereda una deuda millonaria a su partido por la campaña como candidato a gobernador, acuso al Pan (SIC) de entreguista al Gobierno del Estado, asegurando públicamente que hay acuerdos con el Gobernados Miguel Alonso para recibir beneficios económicos y posiciones políticas, que el Comité estatal opero en contra mía (SIC) y que el PAN en el estado es una mafia, entre otras afirmaciones públicas."** Es de señalarse que su argumento es infundado frívolo e improcedente, lo anterior y como ya se dijo la responsable inferior toma como base notas que si bien es cierto le son imputadas al suscrito, no menos cierto es que en autos no se corrobora que el suscrito las hubiera realizado, demás de que no son notas aisladas que fueron editadas por que realizó las publicaciones de las mismas, y que por lo tanto se trata únicamente de indicios no corroborados fehacientemente por otros medios de prueba como ya se dijo, aunado a lo argumentado en los anteriores agravios hechos valer por el suscrito y que desde este momento pido se me tenga por reproducidos para los efectos de ley, y que demuestra fehacientemente la infundado del argumento de la responsable inferior.

Así mismo, y en cuanto hace al argumento vertido por la responsable inferior al señalar textualmente: **" Este tipo de declaraciones buscaron el desprestigio de la institución política de la cual Calderón Galván forma parte, porque con esas expresiones en medios de comunicación social trató de injuriar, calumnia, denostar o denigrar a terceros o al institución las notas periodísticas contienen frases intrínsecamente vejatoria, ya que utilizó expresiones como inepto, mafia, secta, entreguista, me avergüenzo del Pan (sic), sínico y vividor. En este sentido se denota la tipificación de conductas negativas (artículo 13 de los estatutos en relación con el artículo 16 A fracción IV del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones) que redundan en el demerito de la opinión fama pública que se tiene en una institución o entidad de interés público, con lo que se demuestra el ataque a los principios y programas del partido y su dirigencia y a las conductas típicas señaladas anteriormente como indisciplina."** Ahora bien, dicha argumentación vertida por la responsable deviene a estar indebidamente fundada y motivada, esto es así en base a los anteriores agravios vertidos por el suscrito y que desde luego pido se me tenga por reproducidos en este apartado, y con ello se pretende acreditar que el suscrito no incurri en ninguno de los supuestos o hechos que se me imputan, además de que suponiendo sin



conceder de la existencia de los mismos por parte del suscrito de igual forma no se configuran en ellos sanción alguna, además de estar viciado todo el procedimiento de nulidad absoluta como ya quedo debidamente claro en los agravios que preceden, y que por ende esta autoridad partidista de alzada deba de revocar la sentencia recurrida para todos los fines legales a que haya lugar dejando a salvo mis derechos partidistas como miembro activo del Partido Acción Nacional.

G).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que la sola publicación de diversa información a través de medios de comunicación no trae aparejada de forma infalible la autenticidad de los hechos con los que se cuenta, pues el origen de su contenido puede obedecer a diversas fuentes, cuya confiabilidad no siempre es posible contratación, además existe la posibilidad de deformación del contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos en la labor o en el personal interpretación de los hechos por parte de quienes intervienen en su redacción y preparación, de ahí que las pruebas no tengan valor jurídico alguno, sino únicamente el valor de indicios, y que la responsable inferior señala que mi agravio es inoperante, al manifestar textualmente lo siguiente". **Ello es así en razón de que como ya se dijo, el contenido de las notas genera convicción respecto de los hechos que en ella se consignan, dado que proviene de distintos medios, citan al acusado como fuente y coinciden en lo sustancial. Las notas periodísticas no son pruebas aisladas, sino que, opuestamente a lo que afirma el denunciado, se administran con pruebas técnicas (grabaciones y entrevistas) donde se escucha la voz del el (sic) C. Cuauhtémoc Calderón y se advierte la coincidencia de lo declarado con las notas periodísticas. De ahí lo infundado del agravio".** Como se desprende del argumento vertido por la responsable inferior, la misma no resuelve el punto controvertido sin que transcribe en esencia otro argumento de mis agravios anteriores, esto es así toda vez que el suscrito controvertí el hecho de que la sola publicación de diversa información a través de medios de comunicación no trae aparejada de forma infalible la autenticidad de los hechos con lo que se cuenta, pues el origen de su contenido puede obedecer a diversas fuentes, cuya confiabilidad no siempre es posible constatación, además existe la posibilidad de deformación del contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos en la labor o en la personal interpretación de los hechos por parte de quienes intervienen en su redacción y preparación y la responsable no entra al estudio de dicho agravio o argumento, sino que resuelve o hace manifestaciones diferentes a las señaladas por el suscrito de ahí lo infundado de su argumento y que conlleve a que se revoque la sentencia reclamada.

H).- En cuanto al agravio en vía de manifestación vertido por el suscrito, referente a que los medios magnéticos ofertados por la autoridad denunciante, tienen el carácter de técnicas para lo cual se establecen reglas específicas para su ofrecimiento como son el que se señale concretamente lo que se pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares, y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, lo que en la especie no aconteció y por ello carece de valor probatorio, y que la responsable inferior señala que mi agravio es infundado, al manifestar textualmente lo siguiente: "**Para arribar a esta conclusión es necesario acudir al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SU-JCD-0641/2011 en donde sostiene que para tener como prueba plena aquellas como notas periodísticas, deben de ser estas provenientes de distintos medios, que citen al denunciado como fuente, que coincidan en lo sustancial que administradas todas estas, con pruebas técnicas (grabaciones en medio magnético- discos compactos y entrevistas) donde se escuche la voz del denunciado emitiendo declaraciones que coinciden con lo consignado en las notas periodísticas, ver prueba ofrecida relacionada con el numeral 9 , lo cual analizado conjuntamente genera prueba plena de su contenido, aunado a la posición asumida por el acusado, la cual es pública y notoria".** Como se desprende del infundado argumento citado por la responsable, la misma se infiere a cuestiones distintas a lo planteado en el agravio o argumento de defensa vertido por el suscrito, y que



se constriñe esencialmente en que las probanzas no fueron ofertadas conforme a la ley, es decir no reúnen los requisitos de ley para ser admitidas como medio de pruebas y que por ende no debieron de haber sido tomados ni siquiera en cuenta, y la responsable vierte manifestaciones privadas (notas periodísticas) pueden tener mayor o menor peso, que corroborados con medios magnéticos pueden surgir mayor grado de convicción, situación que no es el asunto que le fue planteado a la responsable, pues la Litis o controversia se ciñó en el hecho de que la misma no pueden ser consideradas como medio de pruebas por no haber sido ofertadas de conformidad a lo dispuesto por las leyes aplicables al caso en concreto, de ahí lo infundado e inmotivado del argumento vertido por la responsable, y que conlleve a que este órgano partidista de alzada revòquela sentencia o resolución recurrida para todos los efectos de ley por no estar debidamente fundada ni motivada.

QUINTO.- La resolución de fecha 3 de noviembre de año 2011, tomada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y recaída dentro de los autos del expediente principal número COE-CDEZ/003/201.

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS POR LA RESPONSABLE.- Se transgreden los artículos 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, al no encontrarse fundada ni motivado su considerando QUINTO de la sentencia recurrida, lo anterior en virtud de la declaración que hace la responsable inferior de fundada la denuncia presentada por el Comité Directivo Estatal del PAN en Zacatecas, al señalar textualmente lo siguiente: **"Con base en todo lo expuesto, se considera que la denuncia presentada por el Comité Directivo Estatal del PAN en Zacatecas debe declararse fundada pues como quedo evidenciado en la presente resolución se acreditan los ataques de hechos y de palabras a los principios y programas del partido, a su dirigencia y a su militantes, se acredita la afectación a los integrantes del Partido, y se acredita la lesión a la honra y dignidad de sus integrantes directivos y militantes, se acredita la indisciplina del denunciado."** Argumento fuera de toda fundamentación y motivación, en primer lugar, porque ha quedado fehacientemente establecido con los agravios vertidos por el suscrito y que anteceden a este que la responsable no funda ni motiva adecuadamente su actuar, y que por ende sus razonamientos no se ajusten a los principios rectores de la materia electoral, en segundo lugar porque su razonamiento es vago, impreciso y fuera de toda fundamentación y motivación, esto es así, toda vez que únicamente se ciñe a señalar que **"debe declararse fundada pues como quedo evidenciado en la presente resolución se acreditan los ataques de hechos y de palabras a los principios y programas del Partido, a su dirigencia, y a sus militantes, se acredita la afectación a los integrantes del Partido, y se acredita la lesión a la honra y dignidad de sus integrantes directivos y militantes, se acredita la indisciplina del denunciado"** pero no ha señalamientos alguno de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente quedo acreditado todo su anterior argumento, además de que como se establece en toda la resolución la responsable en ningún momento acredita como es que se violentan o se acreditan dichas afectaciones de ahí que su razonamiento es infundado y fuera de toda lógica jurídica.

Por otro lado y en cuanto a las supuestas infracciones que dice que el suscrito incurrió de igual manera sus argumentos son infundados y carentes de toda motivación tal y como se verá a continuación:

1.- En cuanto a la supuesta **indisciplina** que la responsable inferior dice que el suscrito incurrió y que sostiene que se acredita con el siguiente argumento: **"La indisciplina se acredita al establecerse intrínsecamente que los actos de ataques de hecho y de palabra a la institución conlleva a determinar su**



consecuente indisciplina." Como se desprende de su anterior argumento el mismo es infundado y carente de toda motivación, pues señala cuales fueron los ataques de hecho y de palabra a la institución que generaron dicha indisciplina, y desde luego al no establecerlo además de lo infundado deja al suscrito en completo estado de indefensión para poder oponerme legalmente al mismo.

2.- En cuanto a la supuesta **indisciplina** que la responsable inferior dice que el suscrito incurrió y que sostiene que se acredita con el siguiente argumento: "De la misma manera que en la conducta típica anterior, el denunciando al ser miembro activo del PAN, debe conocer la normatividad interna donde se prevé los mecanismos de participación como militante, debe de saber sus derechos y obligaciones, así como los medios de defensa intrapartidaria para hacer valer derechos, en ese tenor al acudir a instancias públicas no oficiales a dirimir asuntos internos, se configura la indisciplina como miembro activo del PAN". Como se desprende de su anterior argumento el mismo es infundado y carente de toda motivación, pues no señala cuales son las instancias públicas no oficiales, así como tampoco señala de manera fehaciente cuales fueron los asuntos internos que a decir se dirimieron en dichas instancias, y desde luego al no establecerlo además de lo infundado deja al suscrito en completo estado de indefensión para poder oponerme legalmente al mismo.

3.- En cuanto a los supuestos **Actos de deslealtad** que la responsable inferior dice que el suscrito incurrió y que sostiene que se acredita con el siguiente argumento: "En sentido similar al anterior supuesto normativo, el denunciado incurre en actos de deslealtad al partido cuando al acudir a diversos medios de comunicación a tratar asuntos internos (los relacionados en el artículo 5 de los estatutos y el artículo 46 párrafo 3 y 4 del COFIPE) y, por ello, el denunciado es deber acudir a las instancias partidistas a denunciar cualquier irregularidad pero al no hacerlo y acudir a instancia ajenas al partido de declarar asuntos internos sin prueba alguna como por ejemplo el atribuir a la dirigencia del partido pacto con el gobierno en turno y acusar de que este recibe privilegios económicos, de que no tiene liderazgo, de que se avergüenza de su dirigencia, que compañeros del PAN se sientan con el nuevo gobierno vendiendo la dignidad y los principios del partido, todo lo anterior, sin comprobarlo y sin acudir a las instancias internas a denunciar las supuestas irregularidades". Como se desprende su anterior argumento el mismo es infundado y carente de toda motivación, pues si bien es cierto la responsable en este apartado si señala cuales fueron las supuestas deslealtades, no menos cierto es que en la especie las mismas no pueden ser consideradas como tales, además de que en la especie el suscrito ha acreditado fehacientemente que los hechos que me fueron imputados no fueron probados y que por lo tanto no se acredita el supuesto normativo a que hace alusión la responsable inferior.

4.- En cuanto a los supuestos **Ataques de hechos o de palabra a los principios y programas del partido así como a su dirigencia, fuera de reuniones oficiales** que la responsable inferior dice que el suscrito incurrió y que sostiene que se acredita con el siguiente argumento: "Las declaraciones que realizó en los diversos medios de comunicación social respecto de que el partido y su dirigencia mantiene un pacto de beneficio económica y de privilegios, el señalar públicamente que se avergüenza del dirigente del Partido, de que califico al legislador Ramírez Bucio de ser "vividor más grande del PAN, es un cínico...", que el partido y sus dirigentes son "entreguistas al gobernador", en entrevistas sostuvo que el dirigente del partido en el estado realizó una campaña en su contra, que su partido es una mafia, que el PAN es un "autoritario y retrograda", que el "Presidente es un inepto" Por lo tanto, se presume que las relatadas expresiones públicas son con el ánimo de ofender, atacar y dañar públicamente la imagen del partido y la de sus dirigentes. El propósito del denunciado es las declaraciones hechas a la prensa fue restar presencia y credibilidad y legitimidad a las decisiones adoptadas por los órganos partidistas de buscar el desprestigio de la institución política, mintió al aseverar



públicamente y sin prueba que el partido y sus dirigencias pacto con el gobernador Miguel Alonso para recibir prevendas (sic) y privilegios, causando un grave daño a la institución política a la que pertenece". Como se desprende de su anterior argumento vertido por la responsable inferior, el mismo es infundado y carente de toda motivación, en primer lugar, porque se insisten ya ha quedado debidamente establecido no se acreditan en los agravios que anteceden, en segundo lugar porque la responsable no hace señalamiento alguno a que principios y programas del partido se violentaron con las supuestas declaraciones, así como tampoco establece de qué forma se restó presencia y credibilidad y legitimidad a las decisiones adoptadas por los órganos partidistas, es decir, no señal como fue que la responsable midió o acreditó la supuesta afectación a la presencia y credibilidad del partido, lo que desde luego además de no estar fundado deja en completo estado de indefensión al suscrito para oponerme legalmente a su argumento, así mismo tampoco señala de que forma el suscrito con mis supuestas acciones buscaba el desprestigio de la institución política, es decir como lo midió, como lo descubrió, de que constancias o pruebas se sustenta para acreditar lo anterior, lo que desde luego además de no estar fundado deja en completo estado de indefensión al suscrito para oponerme legalmente a su argumento, aunado al hecho de que no acredita de manera fehaciente cual fue el grave daño o como lo midió el causado a la institución política, lo que de igual manera además de no estar fundado, deja al suscrito en completo estado de indefensión para oponerme legalmente al mismo.

5.- En cuanto a lo que aduce la responsable respecto de **las Acciones o declaraciones que dañen gravemente a la institución** que la responsable infiere dice textualmente que: **"Esta infracción no se actualiza en razón de haber sido declarada inconstitucional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación"**, sin embargo la responsable, en todos los anteriores supuestos los ha venido aplicando lo que se traduce en una flagrante violación a mis derechos, y que deberá de ser tomada en cuenta por esta autoridad partidista de alzada al momento de dictar su resolución.

6.- En cuanto a la supuesta **Comisión de actos delictuosos** que la responsable inferior dice que se perfecciona la señalar textualmente lo siguiente: **"Esta infracción se perfecciona al existir a la fecha una sentencia que condena al Partido Acción Nacional al pago de \$5,680.00 (sic) esto hasta el día de la fecha y sin tomar en cuenta la existencia de diversas demandas civiles, mercantiles y penales en el mismo tenor"**, derivándose de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que en primer lugar, quien fue demandado y condenado fue el Partido Acción Nacional y no el suscrito y el hecho de que fungiera como testigo no existe sanción alguna sino que es una obligación legal acudir a los tribunales jurisdiccionales a rendir el testimonio sobre los hechos que me constan y que son parte de la Litis de ahí que no le asista la razón a la responsable inferior para determinar que el suscrito cometí una infracción, además de que contrario a lo que sostiene las campañas políticas son llevadas por la propia institución política y los costos y gastos de las mismas son su responsabilidad pues es de explorado derecho que aun y cuando exista financiamiento privado el mismo debe de ingresar a las arcas del partido y ahí aplicarse a la campaña a efecto de que el mismo sea auditado por las autoridades electorales, luego entonces no le asiste el derecho ni la razón para determinar que se acredita supuestos hechos delictuosos por haber acudido a declarar ante una instancia judicial en contra del partido sino que en la especie el suscrito acudí por mandado judicial y respondí sobre los hechos que me fueron preguntados, de ahí que su argumento carezca de toda fundamentación y motivación.

7.- En cuanto a la supuesta **Comisión de actos que afecten la imagen del partido** que la responsable inferior dice que se perfecciona al señalar textualmente lo siguiente: **"Las conductas desplegadas por el denunciado y que han quedado demostradas en relación a llevar asuntos internos del partido a instancias fuera de lo que establece la normatividad..."**,



derivándose de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, lo anterior como ya se dijo en agravios que anteceden la responsable no establece la forma en que se afectó la imagen del partido ni establece como fue que midió dicha afectación, lo que desde luego deja al suscrito en completo estado de indefensión para imponerse a dicho sustento además de carecer de una adecuada fundamentación y motivación.

8.- En cuanto a la **supuesta infracción a las normas contenidas en los Estatutos, Reglamentos, Código de Ética y demás disposiciones del Partido**, que la responsable inferior dice que se perfecciona al señalar textualmente lo siguiente: **"Esta infracción encuadra perfectamente en las conductas realizadas por el denunciado ya que al acreditarse varias irregularidades por esta comisión de Orden, en consecuencia se actualiza el tipo en examen"**, derivándose de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que no manifiesta cuales fueron las irregularidades que a su decir encuadran a dicha norma, lo que desde luego deja al suscrito en completo estado de indefensión para imponerse a dicho sustento además de carecer de una adecuada fundamentación y motivación.

9.- En cuanto a la **supuesta infracción de acudir a instancias públicas o privadas ajenas del partido, para tratar asuntos internos del mismo o para intentar su intromisión en los actos propios del partido** que la responsable inferior dice que se perfecciona al señalar textualmente lo siguiente: **"Este tipo normativo a (sic) quedado demostrado con las conductas desplegadas por el denunciado al acudir a instancias diversas al partido a ventilar asuntos internos como son:..."**, derivándose de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que no manifiesta en primer lugar a que instancias públicas o privadas dice que acudió, así como a que asuntos internos fue los que el suscrito ventile ante dichas instancias, a bien de que manera el suscrito trate la intromisión de estas en los asuntos internos del partido, lo que desde luego deja al suscrito en completo estado de indefensión para imponerse a dicho sustento además de carecer de una adecuada fundamentación y motivación.

10.- En cuanto a la **supuesta infracción de Desacatar o desobedecer las disposiciones previstas en los Estatutos, Reglamentos y acuerdo tomados por los órganos directivos del partido** que la responsable inferior dice que se actualiza al señalar textualmente lo siguiente: **"La infracción en examen se actualiza de manera consecuente, en tanto han quedado demostradas varias conductas irregulares por el denunciado."**, La infracción en examen se actualiza de manera consecuente, en tanto han quedado demostradas varias conductas irregulares por el denunciado", derivado de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que no manifiesta a que disposiciones internas o acuerdos tomados infringió, ni las relaciona en los hechos ni en las pruebas ofertadas por el órgano interno denunciante, lo que desde luego deja al suscrito en completo estado de indefensión para imponerse a dicho sustento además de carecer de una adecuada fundamentación y motivación.

11.- En cuanto a la **supuesta infracción de trata públicamente asuntos confidenciales y conflictos internos del partido** que la responsable inferior dice que se perfecciona al señalar textualmente lo siguiente: **"La infracción en estudio se actualiza en atención a lo establecido en el anterior tipo normativo señalado en el numeral 4"**, derivándose de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que no manifiesta cuales fueron los asuntos confidenciales o conflictos internos del partido que dice trate públicamente, lo que desde luego deja al suscrito en completo estado de indefensión para imponerse a dicho sustento además de carecer de una adecuada fundamentación y motivación.



12.- En cuanto a la supuesta infracción de Atacar, de hecho o de palabra las decisiones y acuerdos tomados por los órganos del partido que la responsable inferior dice que se perfecciona al señalar textualmente lo siguiente: "Este tipo normativo coincide en lo esencial respecto de aquel que prohíbe los ataques de hecho y de palabra a los principios y programas del partido y su dirigencia, el propósito del denunciado en las declaraciones hechas a la prensa fue restar presencia y credibilidad y legitimidad a las decisiones adoptadas por los órganos partidistas de buscar el desprestigio de la institución política, lo que en la especie se actualiza", derivándose de lo anterior que el argumento vertido por la responsable carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que no manifiesta cuáles fue la forma en que supuestamente el suscrito restó presencia y credibilidad y legitimidad a las decisiones adoptadas por los órganos partidistas, o de qué forma el suscrito buscaba a su decir el desprestigio de la institución política, lo que desde luego deja al suscrito en completo estado de indefensión para imponerse a dicho sustento además de carecer de una adecuada fundamentación y motivación.

SEXTO.- La resolución de fecha 3 de noviembre del año 2011, tomada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y recaída dentro de los autos del expediente principal número COE-CDEZ/003/201.

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS POR LA RESPONSABLE - Se transgreden los artículos 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, al no encontrarse fundado ni motivado su considerando SEXTO, de la sentencia recurrida, y mediante el cual decreta la responsabilidad del C. Cuauhtémoc Calderón Galván en la comisión de las supuestas conductas acreditadas, lo anterior al verter el siguiente argumento: "Responsabilidad del C. Cuauhtémoc Calderón Galván en la comisión de las conductas acreditadas. Que una vez estudiadas las constancias que rodean los hechos, esta Comisión de Orden considera que el denunciado debe considerarse responsable en la comisión de las conductas señaladas en el considerando anterior." Después la responsable señala "En ese orden de ideas, esta autoridad estima que el C. Calderón Galván consumó diversas conductas contrarias al orden estatutario y reglamentario del partido Acción Nacional, transgrediendo lo dispuesto por los artículos que a continuación se relacionan: 13 fracciones IV, V y VI, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, en relación con el 16, apartado A, fracciones II, III, IV, VII, VIII, IX y B, fracciones I, II y III, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, en virtud de manifestar públicamente en forma reiterada y sistemática ataques de hecho y de palabra a los principios y programas del partido, a su dirigencia, a sus intereses, a su honra y reputación y diversas conductas de indisciplina partidaria.", posteriormente señala "Lo anterior es así, porque con las expresiones públicas que se traducen en ataques de indisciplina señalados líneas arriba, quebrantó la normatividad panista que prohíbe las conductas reseñadas en esta resolución y que el C. Calderón (sic) Galván propagó deliberadamente para denostar, injuriar y denigrar a la institución política a la que pertenece como miembro activo, pues sus conductas desplegadas, dañó gravemente la imagen del PAN en Zacatecas, tal como se puede advertir a las probanzas que obran en autos", y párrafos más adelante señala "En consecuencia, en autos se cuenta con elementos suficientes para estimar que el denunciado es responsable de las conductas descritas y que se encuadran en los tipos normativos líneas arriba, por los ataques de hecho y de palabra contra los programas y principios del PAN, de su dirigencia y militancia, de sus derechos básicos de sus intereses, de su honra, reputación, dignidad, por su deslealtad al partido, por el incumplimiento de las obligaciones como miembro activo, por la infracción



a las normas contenidas en autos, reglamentos y código de ética, por acudir a instancias públicas ajenas al partido, para tratar asuntos internos del mismo, por la comisión de actos delictuosos y por la comisión de actos de pública deshonestidad". Como se desprende de los anteriores argumentos vertidos por la responsable inferior, los mismos son infundados y carentes de toda motivación, esto es así porque a lo largo de los agravios vertidos en líneas que anteceden y que desde este momento solicito se tenga por reproducidos en este apartado para efectos de ley, y de las cuales se acredita fehacientemente que en autos del expediente principal no quedo debidamente acreditada responsabilidad alguna por parte del suscrito, además de ser una sentencia contraria a derecho y violatoria a los principios rectores de la materia electoral, esto se puede constatar fácilmente con los argumentos subjetivos y sin sustento alguno vertidos por el responsable, por ejemplo cuando señala "... sistemática ataques de hecho y de palabra a los principios y programas del partido, a su dirigencia, a sus intereses, a su honra y reputación y diversas conductas de indisciplina partidaria.." cuando habla de sistemática no acredita en qué forma es que se dio de manera sistemática las presuntas violaciones que a su decir realizó el suscrito, cuando habla de hecho y de palabra, no acredita como es que se dio de hecho es decir al hablar de hecho es que desde luego se infiere a acciones emprendidas que producen una consecuencia, y que la responsable no señala cuales fueron esas acciones que produjeron esas consecuencias, cuando habla de honra y reputación, en primer lugar, no señala como es que se violentó esas supuesta honra o reputación ni el daño ocasionado con ese daño, en segundo lugar porque acaso las entidades de interés público tienen honra y reputación, pues esos términos únicamente se dañan a las personas físicas y no así a las personas morales, de ahí que se desprenda lo infundado y carente de motivación de los argumentos vertidos por el responsable inferior. Así mismo es infundado el hecho de que la responsable determine que se acreditó que el suscrito soy responsable de los hechos que se me imputaron, además quedo plenamente acreditado que el suscrito no violentó ninguna disposición estatutaria ni reglamentaria como quedo plenamente acreditado en los agravios que anteceden y por lo tanto su argumento carezca de una adecuada fundamentación y motivación y por ende deba de revocarse la sentencia recurrida para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEPTIMO.- La resolución de fecha 3 de noviembre del año 2011, tomada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y recaída dentro de los autos del expediente principal número COE-CDEZ/003/201.

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS POR LA RESPONSABLE.- Se transgreden los artículos 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Se vulnera en perjuicio del suscrito lo consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carga Magna, al no encontrarse fundado ni motivado su considerando SEPTIMO, de la sentencia recurrida, y mediante el cual decreta la supuesta INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, lo anterior al verter el siguiente argumento: "**INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Que toda vez que esta Comisión de Orden considera que el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, tiene responsabilidad directa, respecto a la comisión de las conductas multicitadas, en virtud de que incurrieron en los supuestos establecidos en los artículos 13, fracciones IV, V, y VI de los Estatutos del Partido acción Nacional, en relación con el 16, apartado A, fracciones II, III, IV, VII, VIII, IX, y B, fracciones I, II, III, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, en virtud de manifestar públicamente en forma reiterada y sistemática ataques de hecho y de palabra a los principios y programas del partido, a su dirigencia a su intereses, a su honra y reputación y diversas conductas de indisciplina partidaria, por lo que el partido, su dirigencia y su militancia, fueron dañados en su imagen.**" Posteriormente la responsable manifiesta "**el artículo 13 de los Estatutos del PAN en relación con el diverso 16 del Reglamento en el tema, estable las sanciones aplicables a**



los miembros del partido. " Después la responsable inferior señala: **"1. Así para calificar debidamente la falta, la Comisión debe valorar :"** haciendo una serie de apartados mediante el cual pretende individualizar la sanción que se le imputa al suscrito, argumentaciones todas ellas contenidas endicho considerando carentes de toda fundamentación motivación, esto es así puesto que aun y cuando la responsable pretende hacer una individualización de la sanción en base a los hechos denunciados y que supuestamente de la sanción en base a los hechos denunciados y que supuestamente el suscrito cometió, lo cierto es que hace una serie de argumentaciones que valora en su conjunto y no de forma individualizada en base a los supuestos normativos transgredidos, y no de forma individualizada como por ley debió de haberlo realizado, esto es que si la responsable aduce que el suscrito cometió varias infracciones a los numerales estatutarios y reglamentarios que señala, por lógica jurídica debió de haber encuadrado el hecho con la trasgresión y que al no haberlo hecho de esta manera su determinación de expulsión carezca de toda fundamentación, mas aun cuando la responsable inferior al calificar la gravedad de la infracción lo realiza con una gravedad mayor, al sostener textualmente lo siguiente: **"En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con la gravedad mayor, ya que la misma, afecto la imagen del partido y de sus dirigentes mediante el ataque de hecho y de palabra a sus principios y programas, a su reputación y dignidad, derivando como consecuencia en la deslealtad del denunciado, de infringir la vida interna del partido, denostando y denigrando a sus militantes"**, como se puede desprender la responsable no individualiza la sanción sino que la realiza en su conjunto lo que desde luego, transgrede los principios rectores de la materia electoral, en perjuicio del suscrito, además de que no hace un razonamiento por medio del cual funde y motive porque lo llevo a determinar considerarlo con una falta de gravedad mayor sino que únicamente señala que en base a los elementos objetivos anteriormente precisados, es que se impone dicha calificación, lo que desde luego no cumple con los requisitos mínimos indispensable de ahí que al no estar debidamente fundada ni motivada su argumento y resolución es que conlleve a esta autoridad partidista a revocar la resolución combatida dejando a salvo todos y cada uno de mis derechos partidistas."

Visto lo anterior, a continuación esta Comisión procede a precisar de manera clara la intención del promovente a fin de interpretar el sentido de su pretensión, el citado criterio encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/99, consultable en la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen "Jurisprudencia", páginas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y tres, con el rubro y texto siguientes:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.—Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que



el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende."

Establecido lo anterior, la causa de pedir de **Cuauhtémoc Calderón Galván** radica en que debe revocarse la resolución impugnada por las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto, el reclamante engloba en siete apartados los conceptos de impugnación que le genera la resolución que recurre, también lo es que los tópicos a que hace referencia se refieren de manera general a lo siguientes aspectos:

- a) **En cuanto al procedimiento.** Señala el impetrante que existieron diversas violaciones dentro del procedimiento sancionador, destaca que cuando se le notificó el inicio del mismo no se acompañó el acuerdo de radicación respectivo, consecuentemente, no se le hicieron saber sus derechos como miembro activo sujeto a procedimiento al no proporcionársele dicho proveído, además que la responsable realizó un indebido y deficiente estudio de las causales de improcedencia que invocó en su favor, medularmente señala que la solicitud de sanción no cumplió con el artículo 41 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones dado que el acuerdo de radicación no precisó que ésta cumplió con los requisitos que enlista el numeral 36 del propio Reglamento, asimismo que la solicitud de sanción no exhibió los antecedentes del militante respecto del cual se solicitó la sanción y que la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas estimó que es una formalidad que no trasciende en su esfera de derechos, asimismo se duele de que el órgano responsable no se pronunció por el hecho de que la solicitud de sanción no precisó domicilio y clave del Registro Nacional de Miembros de Cuauhtémoc Calderón Galván, lo que a su juicio resulta un requisito indispensable en la formulación de toda solicitud de sanción.
- b) **En cuanto a la valoración del material probatorio.** Que existió una **indebida valoración probatoria** de los medios de convicción que obran en actuaciones por parte de la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas para tener por acreditados los actos de indisciplina imputados en su contra, lo anterior al manifestar que en autos obran notas periodísticas respecto de las cuales no fue determinada su fuerza indiciaria aunado a que no se encuentran adminiculadas con otras para que tengan valor probatorio pleno, asimismo que de las notas periodísticas no se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de los supuestos hechos que señalan; que su comparecencia como testigo en una demanda entablada contra el Partido Acción Nacional aconteció porque fue

Por una patria ordenada y generosa



requerido por una autoridad jurisdiccional, y tal situación no puede entenderse como un ataque al Partido sino como un deber ciudadano. Además cuestiona el valor probatorio de las denuncias penales interpuestas en su contra y los audios y entrevistas que obran en autos aludiendo que la responsable admitió indebidamente las pruebas técnicas y que dicha consideración no obstante haber sido expuesta ante la responsable fue estudiada indebidamente por lo que debe restársele todo valor probatorio a éstas.

- c) **En cuanto al fondo.** Que no obstante que en el procedimiento sancionador negó el contenido de las notas periodísticas que se le imputan, en autos no está demostrado que haya generado un daño al Partido Acción Nacional, porque no es válido aceptar que las imputaciones realizadas en su perjuicio por los medios de comunicación dañen al Partido, pues en su consideración se llegaría al absurdo de que cualquier funcionario público militante de Acción Nacional a que se le imputen delitos o irregularidades administrativas deba ser sancionado con la expulsión, *"como por ejemplo al Presidente de la República quien es militante del PAN (sic) y al que se le achacan delitos graves por su combate al Narcotráfico, y que por consecuencia deba de sujetársele a proceso de expulsión por dañar la imagen del partido, lo que además de ser absurdo es ilegal e ilógico, además no existe sustento legal en las publicaciones que la responsable inferior determina ilegalmente como procedentes, pues no hay sentencias firmas ni procedimientos legales mediante los cuales se haya acreditado lo señalado en las notas en perjuicio del suscrito, y que por lo tanto no se debe de hacer valoraciones o juicios de manera subjetivos, además de que la responsable no señala de manera fehaciente en qué forma se daño (sic) la imagen y prestigio del partido, por las declaraciones que le fueron imputadas al suscrito, lo que deviene en todo ello en lo infundado y motivado del sustento de la responsable que la llevo (sic) a declarar como infundado mis argumentos de defensa, ..."*
- d) **Indebida fundamentación y motivación de la resolución reclamada.** Asevera que las causales de indisciplina que tuvo por acreditadas la responsable en su contra se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, exponiendo las consideraciones respectivas.
- e) **Individualización de la sanción impuesta.** Que carece de fundamentación y motivación el apartado en el que la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas pretendió individualizar la sanción impuesta en su contra; que a su juicio, la responsable debió encuadrar el hecho con la transgresión e ir imponiendo la pena a cada una de las transgresiones, y que al no hacerlo de tal manera la expulsión impuesta carece de toda fundamentación y motivación.



Análisis de los motivos de inconformidad.

A) Por cuestión de técnica, en primer término se analizarán las cuestiones relativas y precisadas con el inciso a) que se hacen consistir en supuestas violaciones procedimentales, que a juicio de Cuauhtémoc Calderón Galván acontecieron durante la sustanciación del procedimiento sancionador incoado en su contra.

Los conceptos de agravio son **infundados** en una parte e **inoperantes** en otra en atención a lo siguiente:

Con respecto a lo aducido por el impetrante en el sentido de que cuando se le notificó el inicio del procedimiento sancionador no se acompañó el acuerdo de radicación respectivo, y como consecuencia de ello no se le hicieron saber los derechos que como miembro activo tiene conferidos, es **inoperante** tal argumento por lo siguiente:

La cédula de notificación que obra en autos practicada el día 20 de septiembre de 2011, por Reynaldo Delgadillo Moreno, indica que se practicó dicha diligencia con Ignacio Jiménez Castro, a quien se le entregó, como se asienta en dicha constancia, lo siguiente:

"un tanto del Expediente en original que contiene la solicitud de sanción, la denuncia, copia certificada del Acta de CDE de fecha 27 de junio de 2011, así como los elementos de prueba anexos y el original de la presente cédula de notificación",

Ahora bien, ciertamente no se precisa que se acompañó dentro de la documentación entregada el auto de 13 de septiembre de 2011, emitido por la responsable en el que ordenó la radicación de la solicitud de sanción formulada por el Comité Directivo Estatal de Zacatecas en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la finalidad del acuerdo de radicación es que el órgano partidista señale al miembro activo la fecha, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia reglamentaria que nuestra normatividad partidaria otorga en su favor, con el objetivo de que en ésta pueda verter los razonamientos, excepciones, defensas y pruebas que a su interés convengan con relación a la solicitud de sanción formulada en su contra por algún órgano directivo del Partido, es decir, que la autoridad está obligada ineludiblemente a escuchar los argumentos que en su defensa formulen los militantes sujetos a procedimiento sancionador; en el caso concreto, está claro que Cuauhtémoc Calderón Galván compareció por escrito ante la Comisión de



Orden del Consejo Estatal de Zacatecas según se advierte del documento de defensa que exhibió ante la responsable, obrando tal escrito en los autos del expediente COE-CDEZ/003/2011, inclusive en la parte trasera de la última foja se asienta lo siguiente: **"Rúbrica ilegible. Recibí 5/oct/11 17:02 pm"**

Es decir, de lo anterior se advierte que Cuauhtémoc Calderón Galván presentó su escrito de defensa y ofreció pruebas de su intención **precisamente en la hora y fecha señaladas por la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas**, 05 de octubre de 2011 a las 17 horas, para concedérsele su derecho de audiencia, lo que a juicio de los suscritos debe contrastarse con el hecho de que la responsable fijó en el acuerdo de radicación emitido el 03 de septiembre del año próximo pasado día y hora para tal diligencia y el entonces miembro activo sujeto a procedimiento sancionador presentó el escrito de defensa justamente en el día y hora señalados, en consecuencia, se estima que se cumplió el objetivo de otorgarle su derecho de defensa al otorgarle la posibilidad de audiencia y de manifestar lo que a su derecho conviniera; inclusive a foja 1 del escrito respectivo el recurrente manifestó lo siguiente:

"Que vengo por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 35, 41 Y 116 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 fracción IV de los Estatutos del Partido Acción Nacional, y estando en tiempo y forma legales comparezco, a interponer Escrito de Defensa, en contra del Procedimiento de Expulsión la Solicitud instaurado por esta Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, mismo que lo hago al tenor de los siguientes argumentos lógico jurídicos que en seguida exponga; ..."
(sic)

Por otro lado, se estiman **infundadas** las consideraciones en las que la parte recurrente asevera que la responsable realizó un indebido y deficiente estudio de las causales de improcedencia que invocó en su favor, específicamente por lo que hace a que el acuerdo de radicación no precisó que la solicitud de sanción cumplió con los requisitos que enlista el numeral 36 del propio Reglamento, asimismo que la solicitud de sanción no exhibió los antecedentes del militante respecto del cual se solicitó la sanción y que la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas estimó que es una formalidad que no trasciende en su esfera de derechos, tal suerte también corre el argumento en el que se aduce que el órgano responsable no se pronunció por el hecho de que la solicitud de sanción no precisó domicilio y clave del Registro Nacional de Miembros de Cuauhtémoc Calderón Galván, lo que a su juicio resulta un requisito indispensable en la formulación de toda solicitud de sanción.



En primer término, es de precisarse que contrariamente a lo señalado por Cuauhtémoc Calderón Galván, en la solicitud de sanción que corre agregada en actuaciones, si se señaló domicilio y clave del Registro Nacional de Miembros del impetrante, a que alude el artículo 36, fracción II, inciso b), del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, pues en la solicitud se asentó lo siguiente:

"Hacer constar el nombre, domicilio y clave del Registro Nacional de Miembros del denunciado. Al respecto, la solicitud para dar inicio a los procedimientos de sanción es contra el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, con domicilio en C. Tepozan 135, fraccionamiento Villas del Tepozan, Zacatecas, Zac; con Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional CLAVE: CAGC750619HZSLLHOO."

Por lo que resulta a todas luces infundado lo aseverado por el recurrente en cuanto a dicho tópico.

Con respecto a que no se precisaron los antecedentes del militante a que hace referencia el artículo 18 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, debe señalarse que obra en autos el oficio **SG/170-2011/ZAC**, de fecha 30 de agosto de 2011, a través del cual el Secretario General del Comité Directivo Estatal de Zacatecas se dirigió formalmente a los integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en la propia entidad federativa para solicitar el inicio del procedimiento sancionador en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván, en dicho oficio se estableció lo siguiente:

"...a efecto de que se inicie el procedimiento de sanción respectivo en contra del C. CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN a efecto de que una vez satisfechas las etapas procesales sea expulsado del Partido Acción Nacional, para lo cual se me permito señalar los siguientes antecedentes:

1. El C. CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN. Es miembro activo desde el 16 de Agosto de 2007, nunca ha sido sancionado, no existe en su contra, procedimiento de sanción en curso ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional y tiene su domicilio en C. Tepozan No. 135 Fracc. Villas del Tepozán, código postal 98060 en el Municipio de Zacatecas, Estado de Zacatecas
2. ..."
(sic)

Por lo que se estima cumplido el requisito exigido por el artículo 18, párrafo dos, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, que prevé que los órganos que soliciten el inicio de un procedimiento de sanción debe indicar a la Comisión de Orden si el miembro activo se encuentra con sus derechos a salvo, si ha sido sancionado con anterioridad, si está sujeto a procedimiento de sanción por autoridad diferente o si tiene pendiente de cumplir una sanción.



En consecuencia, deviene infundado el planteamiento formulado por el impetrante.

Por otro lado, si bien es cierto el acuerdo de radicación de fecha trece de septiembre de dos mil once, omite señalar que la solicitud de sanción hubiera cumplido con los requisitos que establece el numeral 36 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, y ello es una exigencia que prevé el artículo 41, fracción II, del propio ordenamiento, tal situación no constituye por sí misma una irregularidad que trascienda de manera determinante en la esfera de derechos de Cuauhtémoc Calderón Galván, pues como se ha indicado, tuvo conocimiento del inicio del procedimiento sancionador e inclusive formuló su defensa ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas en la fecha y hora señaladas por dicho órgano partidista.

Es decir, el entonces sujeto a procedimiento sancionador tuvo conocimiento de la incoación del mismo, y si el objeto de las notificaciones es dar a conocer un acto de autoridad se ha cubierto el objeto de la notificación quedando subsanada cualquier irregularidad que en su desarrollo pudiese haberse cometido; en el caso específico, Cuauhtémoc Calderón Galván formuló su defensa ante el órgano partidista responsable y por ello **tuvo conocimiento de los actos que le imputó el Comité Directivo Estatal de Zacatecas, lo que le permitió asumir el comportamiento que consideró conveniente de acuerdo a sus intereses**, concretamente, optó por ejercer su derecho de audiencia que prevé en su favor el artículo 15 de los Estatutos Generales y 18 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones formulando ante la responsable su escrito de defensa en el que realizó los planteamientos que a su interés convenían y ofreció las pruebas que estimó pertinentes; al respecto se cita *mutatis mutandis* la tesis jurisprudencial pronunciada por el Poder Judicial de la Federación, a través de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Página 492, cuyo texto y rubro es el siguiente:

NOTIFICACIONES IRREGULARES. QUEDAN SUBSANADAS CUANDO EL INTERESADO SE HACE SABEDOR DEL ACTO DE AUTORIDAD Y A PARTIR DE ESE MOMENTO DEBE COMPUTARSE EL TÉRMINO PARA SU IMPUGNACIÓN. El objeto de las notificaciones es dar a conocer a los particulares un acto de autoridad y, si en el juicio de nulidad quedó acreditado que dichos actos fueron del conocimiento del interesado en una fecha determinada, tal fecha es la que debe tomarse en consideración para computar el término respectivo. Es decir, al conocer, la hoy parte quejosa, los actos de autoridad, resulta irrelevante que sus notificaciones no se ajusten estrictamente a la ley, **pues el conocimiento que de tales actos ya tiene el particular, le permite asumir el comportamiento que considere conveniente de acuerdo a sus intereses**.

Por una parte oñuchada y generosa



B) Valoración probatoria efectuada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas.

Para dilucidar el asunto en cuestión esta juzgadora procede en primer término a establecer las conductas que tuvo por acreditadas la responsable y que imputó a Cuauhtémoc Calderón Galván, remitiéndonos para tal efecto a la resolución impugnada que en la parte conducente señala lo siguiente:

"Con base en todo lo expuesto, se considera que la denuncia presentada por el Comité Directivo Estatal del PAN en Zacatecas debe declararse fundada pues como quedó evidenciado en la presente resolución se acreditan los ataques de hecho y de palabra a los principios y programas del partido, a su dirigencia, y a sus militantes, se acredita la afectación a los intereses del partido, se acredita la lesión a la honra y la dignidad de sus integrantes directivos y militantes, se acredita la indisciplina del denunciado.

De lo señalado y para mayor claridad se especifica cada una de las infracciones en que incurrió el denunciado:

1.- Indisciplina, abandono continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas (a. 13, fr. IV, Estatutos).

La indisciplina se acredita al establecerse intrínsecamente que los actos de ataque de hecho y de palabra a la institución conlleva a determinar su consecuente indisciplina.

2.- Indisciplina, abandono continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones de **miembro activo del Partido Acción Nacional** (a. 13, fr. IV, Estatutos y a. 16 apartado A, fr. II, Reglamento).

De la misma manera que en la conducta típica anterior el denunciado al ser miembro activo del PAN, debe conocer la normativa interna donde se prevé los mecanismos de participación como militante, debe de saber sus derechos y obligaciones, así como los medios de defensa intrapartidaria para hacer valer inconformidades y garantizar en su caso, el cumplimiento de sus derechos, en ese tenor al acudir a instancias públicas no oficiales a dirimir asuntos internos, se configura la indisciplina como miembro activo del PAN.

3.- Actos de deslealtad al partido (a. 13, fr. V, Estatutos y a. 16, apartado A, fr. VIII, Reglamento).

En sentido similar al anterior supuesto normativo, el denunciado incurren en actos de deslealtad al partido cuando al acudir a diversos medios de comunicación a tratar asuntos internos (los relacionados en el artículo 5 de los Estatutos y el artículo 46 párrafo 3 y 4 del COFIPE) y, por ello, el denunciado es deber acudir a las instancias partidistas a denunciar cualquier irregularidad, pero al no hacerlo y acudir a instancias ajenas al partido a declarar asuntos internos sin prueba alguna, como por ejemplo el atribuir a la dirigencia del partido pactos con el gobierno en turno y acusar de que éste recibe privilegios económicos, de que no tiene liderazgo, de



que se avergüenza de su dirigencia, que compañeros del PAN se sientan con el nuevo gobierno vendiendo la dignidad y los principios del partido, todo lo anterior, sin comprobarlo y sin acudir a las instancias internas a denunciar las supuestas irregularidades.

*Así se configura la deslealtad por incumplir con la norma interna de ser leal a la misma y al partido y sus principios, por mentir constantemente acerca de los supuestos acuerdos con el gobierno en turno y los supuestos privilegios económicos recibidos, no sólo por la dirigencia, sino por diversos militantes notables del partido, sirve traer al estudio lo que señala el diccionario manual de la Lengua Española Vox 2007 Larousse Editorial, S.L. que dice "**deslealtad** s.f. Incumplimiento de un juramento o una promesa. Infidelidad. Lealtad."*

Como se ve, queda de manifiesto que el denunciado fue desleal al partido con sus conductas ante la normativa que se lo prohíbe y ante el partido y sus principios que se lo demandan.

4. Ataques de hecho o de palabra a los principios y programas del partido, así como a su dirigencia, fuera de sus reuniones oficiales (a. 13, fr. VI, Estatutos ya. 16, apartado A, fr. IV, Reglamento).

La conducta típica anterior, se advierte queda demostrada por lo siguiente:

Los órganos directivos del partido, a través de sus integrantes, tienen la obligación de orientar y vigilar que los trabajos y acciones desempeñados se ajusten a la normativa partidaria, y de cumplir con los acuerdos de las dirigencias tomados en sus respectivas esferas de competencia.

La membresía (sic) activa implica la aceptación voluntaria a la normativa del partido y a las decisiones que éste tome, sin que ello suponga sumisión de los militantes, puesto que las decisiones y acuerdos son sujetos a debate y discusión, a través de la participación en los procesos democráticos internos, o a través de los medios de defensa intrapartidarios.

Optar por causas alternos y no regulados ni permitidos por el partido político, constituye el incumplimiento de la obligación de los militantes de observar la normativa interna, la cual obliga a acatar los acuerdos y disposiciones emitidos por los órganos competentes.

Las infracciones (sic) precisadas se actualizan un miembro activo, a través de sus acciones o palabras, "públicas y/o cívicas" perjudica, daña, refuta o contradice fuera del marco contemplado en la normativa interna, los principios de Doctrina, los Programas de Acción o a la dirigencia de la institución.

En el caso específico, las declaraciones del C. Cuauhtémoc Calderón incumplen con lo previsto en la normativa partidaria, porque:

Las declaraciones que realizó en los diversos medios de comunicación social respecto de que el partido y su dirigencia mantiene un pacto de beneficios económicos y de privilegios, al señalar públicamente que se avergüenza del dirigente del partido, de que calificó al legislador Ramírez Bucio de ser el "vividor más grande del PAN, en un cinico..." que el partido y sus dirigentes son "entreguistas al gobierno" en entrevista sostuvo que el dirigente del partido en el Estado realizó una campaña en su contra, que



su partido es una mafia, que el PAN es "autoritario y retrograda", que el "presidente es un inepto".

Por lo tanto, presume que las relatadas expresiones públicas son con el ánimo de ofender, atacar y dañar públicamente la imagen del partido y la de sus dirigentes.

El propósito del denunciado en las declaraciones hechas a la prensa fue restar presencia y credibilidad y legitimidad a las decisiones adoptadas por los órganos partidistas, de buscar el desprestigio de la institución, política, mintió al aseverar públicamente y sin pruebas que el partido y su dirigencia pacto con el Gobernador Miguel Alonso para recibir prevendas (sic) y privilegios (sic), causando un grave daño a la institución política a la que pertenece.

Por lo anterior, la Comisión de Orden Estatal concluye que el denunciado dañó de manera grave la imagen del partido y de su dirigencia, ya que:

- a) Incluyen afirmaciones que resultan intrínsecamente injuriantes, vejatorias y desproporcionadas;*
- b) Afirman hechos falsos; y*
- c) Tiene la intención explícita de denostar al Partido Acción Nacional.*

Esta infracción atribuida al denunciado, no requiere de una prueba adicional del daño distinta a la acreditación de la conducta. En este sentido, ante las manifestaciones del denunciado y de acuerdo con la normativa del Partido Acción Nacional, acreditados los supuestos fácticos de la conducta y la culpabilidad del hoy denunciado, el daño a los intereses, reputación, dignidad o a la imagen del partido se debe tener por actualizado de acuerdo por lo sostenido por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria SUP-JDC-0641/2011, como apoyo a lo anterior se presenta los siguientes criterios de jurisprudencia. (se transcriben).

5. Acciones o declaraciones que dañen gravemente a la institución (a. 13, fr. VI, Estatutos).

Esta infracción no se actualiza en razón de haber sido declarada inconstitucional por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

6. Comisión de actos delictuosos (a. 13, fr. VI, Estatutos ya. 16 apartado A., fr. IX, Reglamento).

Esta infracción se perfecciona al existir a la fecha una sentencia que condena al Partido Acción Nacional al pago de \$5,680 00, (sic) esto hasta el día de la fecha y sin tomar en cuenta la existencia de diversas demandas civiles, mercantiles y penales en el mismo tenor.

Lo anterior cobra relevancia y se acredita con la documental privada que se hace consistir en el expediente identificado con el número 33/2010-II, promovido en contra del Partido, se desprende que en fecha once de mayo de 2011, se llevó a cabo un ataque de hecho en contra de Acción Nacional en el ámbito económico, por parte del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, dicho ataque se hace consistir en el acto de declarar ante una autoridad judicial en contra de Acción Nacional a favor de quien demanda ante el Juez Segundo del Distrito de la Ciudad de Zacatecas, el pago de una deuda que el partido no realizó. En dicho acto jurídico (comparecencia



como testigo) el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, señaló que comparecía ante ese H. Juzgado en forma voluntaria para declarar a favor de su conocido desde hace muchos años JEHU CHAN HERNANDEZ, y que previo a su comparecencia ante esa autoridad judicial se había visto en tres ocasiones con el demandante y con su abogado para preparar la diligencia, situación que en los hechos constituye la existencia de un acto premeditado en contra del partido, mismo que una vez dictada la resolución por parte del Juez, se tradujo en un daño al partido toda vez que este determino condenar a Acción Nacional al pago de la cantidad de \$5,680.00 pesos, (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), señalando que la base fundamental del ataque de referencia se funda en el hecho de que se trata de una afectación patrimonial a la economía del partido, pues en términos reales la cantidad a la que se está sentenciando a pagar al partido lo es el equivale al 50% del financiamiento público estatal del Partido Acción Nacional, en el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal de 2011, a lo que implica dejar de funcionar la mitad de la estructura orgánica del Partido ante la falta de recursos económicos para destinarlos al cumplimiento de un mandato judicial como lo es el pago de los adeudos de campaña del candidato a gobernador del estado de Zacatecas en el proceso electoral de 2010, CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN, miembro activo que omitió sujetarse a las disposiciones en materia de financiamiento, fiscalización y vigilancia de ingresos y gastos de precampaña y campaña expedidos por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional.

Ahora bien suponiendo que el acto del C. CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN, miembro activo sujeto al presente procedimiento haya obedecido a un acto cívico en aras de contribuir a la buena administración de la justicia, ello no es posible, puesto que fue el candidato a Gobernador del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y sabía (sic) y conocía a la perfección el manejo del financiamiento para gastos de campaña. Mientras que, por un lado asume y reconoce que el monto, que en el juicio mercantil referido es una deuda de su campaña, y por el otro omitió informar en tiempo y forma al Comité Directivo Estatal sobre la existencia de este, lo se traduce en una falta grave a la normatividad partidistas máxime que como ya se dijo la sentencia condenatoria en contra del Partido Acción Nacional, que prevalece a la fecha afecta el financiamiento público y por tanto la operatividad política y fines del mismo.

Lo anterior cobra relevancia desde el momento en que el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, rinde su testimonio en fecha once de mayo de 2011, dentro del juicio ordinario mercantil marcado con el numero 33/2010, ventilado en el Juzgado Segundo de Distrito en esta Ciudad Capital, buscando evadir su responsabilidad con el proveedor de su campaña a gobernador contestando a todas las posiciones con evasivas y/o verdades a medias, tal como consta en la foja 225 del expediente anteriormente citado mismo que obra en autos, y que como se desprende de dicha documental al preguntarle para que persona se elaboro la propaganda motivo del multicitado juicio mercantil este respondió, que para el Partido Acción Nacional; a sabiendas de que el recurso económico para campañas fue manejado por los propios candidatos, siendo él uno de ellos y aceptando además que conocía el hecho del adeudo que en el juicio se reclamó y en cuyo documento base de la acción ejercitada se estableció claramente que el material fue elaborado para la campaña política del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Candidato por el Partido Acción Nacional a Gobernador del Estado, misma que obra en el expediente a foja cinco. Lo cual constituye un acto de deshonestidad al declarar, y que influyo (sic) de



manera importante en la sentencia condenatoria que recayó en contra del Partido Acción Nacional.

Ahora bien, el hecho de haber reconocido ante autoridad judicial un adeudo y que no fue enterado al Partido Acción Nacional, por conducto del Comité Directivo Estatal en Zacatecas, constituye una falta grave en términos de la legislación electoral vigente. Lo que pone en riesgo al Partido de la imposición de una sanción que aparte del adeudo causaría una afectación mayor, toda vez que se trata de una conducta alejada de la normatividad partidista interna, lo cual es inadmisibile y contrario a los principios de doctrina a que se sujeta todo individuo que acepta de manera voluntaria adherirse y afiliarse al Partido Acción Nacional como miembro activo del mismo.

7.- Comisión de actos que afectan públicamente la imagen del partido (a. 13, fr. VI, Estatutos).

Las conductas desplegadas por el denunciado y que han quedado demostradas en relación a llevar asuntos internos del partido a instancias fuera de lo que establece la normatividad (medios de comunicación social), así como denostar, injuriar y denigrar al partido y a su dirigencia, encuadran el tipo en estudio, esto es así, en tanto que públicamente se dañó la imagen y prestigio de la institución política a la que pertenece, sin acudir a los causes institucionales del partido, dada la membresía activa en el mismo, esto es, la de denunciar ante el órgano partidista competente de los señalados en el artículo 5 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, (como por ejemplo, denunciar en las instancias partidistas los presuntos acuerdos del PAN y su dirigencia en Zacatecas con el Gobierno del Estado para obtener beneficios económicos y de posiciones políticas).

8.- Infracción a las normas contenidas en los Estatutos, Reglamentos, Código de Ética y demás disposiciones del partido (artículo 16, apartado A, fr. III, Reglamento).

Esta infracción encuadra perfectamente en las conductas realizadas por el denunciado, ya que al acreditarse varias irregularidades por esta Comisión de Orden, en consecuencia se actualiza el tipo en examen.

9.- Acudir a instancias públicas o privadas ajenas al partido, para tratar asuntos internos del mismo o para intentar su intromisión en los actos propios del partido (a. 16, apartado A, f. VII, Reglamento).

Este tipo normativo a (sic) quedado demostrado con las conductas desplegadas por el denunciado al acudir a instancias diversas al partido a ventilar asuntos internos como son:

- *Acusar públicamente a la dirigencia del partido de pactar con el gobierno en turno para obtener beneficios económicos y posiciones políticas.*
- *Acusar públicamente al partido de ser una mafia o una secta.*
- *Acusar públicamente al partido de ser un negocio personal y de familia*
- *Calificar al dirigente del PAN en el Estado de inepto.*

Lo anterior, demuestra que el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, utilizó cauces ajenos al partido para dirimir sus diferendos inconstitucionales, llevando a los medios de comunicación social asuntos internos del partido, lo que actualiza la presente infracción.



10.- Desacatar o desobedecer las disposiciones previstas en los Estatutos, Reglamentos y acuerdos tomados por los órganos directivos del partido (a. 16, apartado B, fr. I, Reglamento).

La infracción a examen se actualiza de manera consecuente, en tanto han quedado demostradas varias conductas irregulares por el denunciado.

11.- Tratar públicamente asuntos confidenciales y conflictos internos del partido (a. 16, apartado B, fr. II, Reglamento).

La infracción a estudio se actualiza en atención a lo establecido en el anterior tipo normativo señalado con el numeral 4.

12.- Atacar, de hecho o de palabra, las decisiones y acuerdos tomados por los órganos del partido (a. 16, apartado B, fr. III, Reglamento).

Este tipo normativo coincide en lo esencial respecto de aquel que prohíbe los ataques de hecho y de palabra a los principios y programas del partido y su dirigencia, el propósito del denunciado en las declaraciones hechas a la prensa fue restar presencia y credibilidad y legitimidad a las decisiones adoptadas por los órganos partidistas, de buscar el prestigio de la institución política, lo que en la especie se actualiza.

Además, no acató las disposiciones dictadas por los órganos competentes, respecto de acudir a las instancias internas para ventilar sus divergencias o inquietudes respecto de los temas que al denunciado interesaran. Si bien cualquier militante puede disentir de las decisiones del partido, lo debe hacer dentro de los espacios destinados para ello y no públicamente como sucedió con el denunciado.

Por lo relatado, y en base a las declaraciones realizadas por el denunciado a los medios de comunicación social, implica desacato y desobediencia a los acuerdos tomados por los órganos del partido, además de ser actos de indisciplina flagrante que denostan la imagen del partido frente a la sociedad.

Finalmente, podemos establecer que de las expresiones públicas del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, se advierten pautas similares de comportamiento que en los tipos normativos desglosados anteriormente, que si bien, en sí mismas constituyen infracción, espero que valoradas en conjunto confirman el carácter reiterado y sistemático de sus conductas, como lo señala el Comité Directivo denunciante.

En el caso, el ahora denunciado no controvierte sus expresiones públicas, se limita a señalar que las notas periodísticas sólo tienen el carácter de indicios y que la sola publicación de diversa información a través de medios de comunicación no trae aparejada su autenticidad, pero no niega haber expreso los ataques al partido y su dirigencia.

En el sentido, la sanción que se pide se imponga (expulsión) corresponde con la gravedad de la falta, pues resulta proporcional a la gravedad de las conductas, al dirigir ataques de hecho y de palabra reiterados y sistemáticos a los principios y programas del partido, a su dirigencia, a su honro y dignidad, a sus intereses y derechos básicos, incurriendo en la

Por una patria ordenada y generosa



indisciplina de deslealtad al partido y su militancia, entre otras faltas que se le imputan como consecuencia directa de su conducta antipartidista.

Sirve de apoyo a lo descrito la siguiente jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (se transcribe).

En el contexto señalado se debe tomar en cuenta, que el denunciado pudo dirimir sus divergencias sobre cualquier asunto, en el ámbito interno del propio partido, antes de trasladar al plano de la prensa y la opinión pública, la discusión y la difusión de los asuntos internos del partido o la inconformidad con las decisiones tomadas por los órganos internos del instituto político."

(sic)

Ahora bien, una vez analizada la totalidad de constancias de autos, esta resolutoria estima que del estudio exhaustivo y objetivo que realiza al material probatorio aportado por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas y estableciendo en base a ellas la causa de pedir de Cuauhtémoc Calderón Galván, no se encuentran acreditadas plenamente las conductas imputadas al impetrante como a continuación se expone:

Las pruebas ofrecidas por el órgano directivo estatal para acreditar los supuestos actos de indisciplina que atribuyó a Cuauhtémoc Calderón Galván fueron las siguientes:

- a) 12 **notas periodísticas** (11 ejemplares de periódico y una nota periodística recortada)
- b) **Copia cotejada** del escrito de demanda y anexos de los Medios Preparatorios a Juicio Mercantil número 1409/2010, promovido por Eduardo Canales Silva en contra del Partido Acción Nacional reclamando la cantidad de \$182,717.96 (Ciento ochenta y dos mil setecientos diecisiete pesos 96/100 M.N.)
- c) **Copia certificada** por el Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas 2010-2013, del escrito de Ratificación de denuncia que presenta Mariza Cárdenas Hernández, Síndico Municipal del propio Ayuntamiento, ante la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, contra Cuauhtémoc Calderón Galván y otros por los delitos de "ADMINISTRACION FRAUDULENTE, ABUSO DE AUTORIDAD, ABUSO DE CONFIANZA, COALICION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO, TRAFICO DE INFLUENCIAS Y NECOGACIONES (sic) ILICITAS, RESPONSABILIDAD TECNICA Y ARTISTICA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL, USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PRESESION Y LOS QUE RESULTEN"

Por una patria ordenada y generosa



- d) **Copia simple** del expediente 34/2010, correspondiente al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Fabiola Elizondo Espinosa en contra del Partido Acción Nacional, demandando el pago por suerte principal de la cantidad de \$121,961.87 (Ciento veintiún mil novecientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.).
- e) **Copia simple** del expediente 33/2010, correspondiente al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Jehu Chan Hernández en contra del Partido Acción Nacional, demandando *"Por concepto de suerte principal el pago de la cantidad de \$4,793,830.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como importe principal más la cantidad de \$767,012.80 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado equivalente al 16% y que en total suman \$5,560,842.80 (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL derivado de la falta de pago de una (1) factura que se anexa a la presente como documento fundatorio de la acción"*, que se encuentra estrechamente relacionada con la Copia certificada de la resolución de fecha 30 de noviembre de 2011, dictada en el Recurso de Apelación 5/2011-II, por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y cédula de notificación de fecha 01 de diciembre de 2011 y la Cédula de notificación de fecha 16 de diciembre de 2011 y acuerdo en copia simple emitido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, en el expediente J.O.M. 33/2010, que fueron admitidas por este órgano con anterioridad en la presente determinación como pruebas supervenientes.
- f) **Copia simple** del documento que se identifica como "Decreto #29", que supuestamente emita "LA HONORABLE SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS", de fecha treinta de octubre de dos mil diez.
- g) Dos **discos compactos** con formato de audio con supuestas entrevistas a Cuauhtémoc Calderón Galván.

Ahora bien, del análisis al contenido de las notas periodísticas ofrecidas en autos, se desprenden los siguientes elementos:

| INDICIO | | FECHA |
|---------|--|--|
| IMAGEN | "Manipuló el PAN nuestra encuesta, acusa Berumen" Por una patria libre y generosa | Que la firma Berumen y Asociados acusó al Partido Acción Nacional de manipular los resultados de una encuesta de la elección de Gobernador, y aclaró |
| | | 15 de junio de 2010 |



| | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------------|
| | | que el PRI aventaja en los resultados de ésta. | |
| IMAGEN | "Si se manipuló la encuesta: Calderón Galván" | <p>Que el candidato a Gobernador Cuauhtémoc Calderón reconoció que la encuesta difundida por César Nava, en la que se le daba ventaja en las preferencias electorales, fue manipulada.</p> <p>Que responsabilizo a Mario Franco de haber manipulado las cifras, anunció el término de la relación profesional con éste y que se procedería con las acciones legales; además deslindó a César Nava y Pedro Martínez (Presidente del CDE) de los hechos ocurridos, añadió que fueron "vilmente engañados"</p> | 17 de junio de 2011 |
| LA JORNADA | "Calderón Galván: Acción Nacional, negocio personal de algunas familias" | <p>Que Cuauhtémoc Calderón y Francisco López se sumaron para <i>"recuperar el partido de las manos de familias que han hecho de él un negocio familiar"</i></p> <p>Que calificó a Ramírez Bucio como <i>"el vividor más grande del PAN, es un cínico que no tiene sentido ni razón en criticar un movimiento que realmente es de la militancia y no da tres personas para ver como se reparten los huesos"</i></p> <p>Que señaló que Ramírez Bucio es cuñado de Ramón Medina, quien es delegado federal; que su esposa, Guadalupe Medina, también lo era; que él mismo lo fue, y que como esos casos hay muchos.</p> <p><i>"Es grave que se coloque a personas en la titularidad de una delegación sin tener el perfil, porque el PAN busca colocar a los mejores y eso no significa poner a los parientes y amigos"</i></p> | Martes 05 de octubre de 2010 |
| EL SOL DE ZACATECAS | "Denuncian fraude Cuauhtémoc Calderón" | <p>Que un proveedor que pidió permanecer en el anonimato, suministró a la casa de campaña del PAN computadoras, las entregó y que no se le</p> | Martes 30 de noviembre de 2010 |



| | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | han pagado, que el adeudo asciende a 140 mil pesos; señala la nota que es la primer denuncia penal que se interpone pero que son varios los proveedores, sin que se haya podido confirmar esta versión | |
| EL SOL DE ZACATECAS | "Yo no debo nada; quien debe es el PAN: Calderón" | <p>Que al cuestionar a Cuauhtémoc Calderón por el adeudo a un proveedor de 140 mil pesos, sobre equipos de cómputo, éste señaló: "Yo no pedí ni recibí ningún producto, no sé del asunto porque yo estaba en la calle haciendo campaña"</p> <p>"No sé si se pidió o se recibió en casa de campaña si así fue, entonces es un compromiso un adeudo que tiene la campaña del PAN a gobernador, en donde yo era candidato, debe quedar claro que yo no eh (sic) tengo adeudo"</p> <p>"Yo como Cuauhtémoc Calderón no debo ni un solo peso, no hay documento alguno que debo a una, tal o cual persona, todo ciudadano tiene derecho a interponer una demanda, así como todo ciudadano tiene derecho a defenderse y demostrar que no es culpable"</p> | Miércoles 01 de diciembre de 2010 |
| LA JORNADA | "Demandado el PAN por adeudos de casi 6 mdp de Cuauhtémoc Calderón" | <p>Que el Partido Acción Nacional tiene dos demandas hechas por proveedores de la campaña del ex candidato a Gobernador y que éstas ascienden a 5 millones 800 mil pesos</p> <p>Que el Presidente del CDE informó que el Partido no adeuda ni un solo peso y por ello no pagará; que él es el único facultado para firmar los contratos o convenios de representación del Partido.</p> <p>Que comentó que los contratos publicitarios o de otra índole que el PAN hizo en apoyo a la campaña del ex</p> <p>Por una patria ordenada y generosa</p> | Viernes 24 de diciembre de 2011 |



| | | candidato fueron pagados en tiempo y forma. | |
|------------|--|---|--------------------------------------|
| LA JORNADA | "Obligación moral y posiblemente legal del PAN, pagar adeudos de campaña" | <p>Que José Manuel Viramontes, coordinador de finanzas de campaña del ex candidato a gobernador Cuauhtémoc Calderón, sostuvo que la dirigencia estatal del Partido tiene la obligación moral y posiblemente legal de responder por los adeudos con algunos proveedores derivados de la campaña electoral</p> <p>Que informó que no ha habido acercamientos con el Presidente del comité estatal para <i>"por lo menos, corroborar que se adeuda verdaderamente ese dinero"</i></p> <p>Que aseveró que <i>"sería muy poco ético de parte del presidente no admitir que el responsable de las acciones derivadas de la candidatura es el partido"</i></p> | Miércoles 29 de diciembre de 2011 |
| PAGINA 24 | "Plagada de corruptelas la Meteórica Carrera Política de Cuauhtémoc Calderón" | La nota imputa a Cuauhtémoc Calderón Galván que tiene demandas en su contra por falsificar documentos, denuncias por apropiarse de terrenos federales, que se hizo de nuevos locales comerciales, además de un autolavado en terrenos federales y que es un deudor millonario. | Lunes 24 de enero de 2011 |
| IMAGEN | "Embargo contra Cuauhtémoc por deuda" | <p>Que el Juzgado Primero del Ramo Mercantil informó que Cuauhtémoc Calderón Galván deberá fijar bienes para garantizar el embargo a favor del también empresario Florencio Quezada; que a raíz de dicho acontecimiento Cuauhtémoc Calderón denunció a Florencio Quezada por "falsificación de documentos y falsificación de documentos de crédito"</p> <p>Que trascendió extraoficialmente que la deuda de Calderón Galván se habría</p> | |



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | contraído durante la campaña al gobierno estatal | |
| No se advierte del recorte de la nota periodística | "Tilda Cuauhtémoc Calderón al PAN y a la <i>sagrada familia</i> de entreguistas al gobierno" | <p>Que Cuauhtémoc Calderón Galván acusó a la dirigencia estatal de Acción Nacional y al grupo <i>la sagrada familia</i> de tener un acuerdo con el gobernador Miguel Alonso para, a cambio de un "partido entreguista" al gobierno, recibir beneficios económicos y posiciones políticas</p> <p>Que Calderón sostuvo en entrevista que por tal acuerdo existe una campaña en su contra con el pretexto de los adeudos de la pasada campaña electoral.</p> <p>Que en el supuesto pacto intervinieron también Ramón Medina, delegado de SEDESOL y los legisladores federales Arturo Ramírez Bucio y José Isabel Trejo.</p> <p>Que manifestó que no tiene pruebas de sus dichos aunque es ya un comentario generalizado.</p> <p><i>"Estamos trabajando fuertemente, con conciencia y no con amenazas ni promesas de chamba, para evitar que el partido vuelva a caer en manos de quien lo vende al mejor postor"</i></p> | No se advierte del recorte de la nota periodística |
| PAGINA 24 | "Me avergüenzo de la Dirigencia de mi Partido: Cuauhtémoc Calderón" | <p>Que Calderón Galván calificó de <i>"vergonzosa y lamentable"</i> la destitución del secretario juvenil que realizó el Comité Directivo Estatal de Zacatecas.</p> <p>Que en un mensaje de Twitter dirigido a Gustavo Madero recalcó que en Zacatecas: <i>"No respetan la democracia ni nuestros principios"</i></p> <p>Que señaló: <i>"Ahora resulta que el PAN es autoritario y retrógrada"</i></p> <p>Que concluyó una serie de tweets exclamando un <i>"No a la imposición del secretario juvenil en"</i></p> | |

Por una patria ordenada y democrática



| | | | |
|------------|--|---|--|
| | | <p>Zacatecas: <i>"Fundamental que se respeten los derechos de los chavos"</i></p> <p>Que el alcalde subió a su cuenta de Facebook la queja siguiente: que ahora el "ex priista" y tesorero del CDE, José Manuel Balderas, lo amenazaba con <i>"sancionar y quitar mis derechos"</i>.</p> <p>Y que se preguntó: <i>"Ahora en el PAN tampoco se puede hablar? Me avergüenzo de la dirigencia de mi partido. ¡Sigo fuerte con las convicciones panistas!"</i></p> | |
| LA JORNADA | <p>"Presidente estatal del PAN, inepto y sin liderazgo: Cuauhtémoc Calderón"</p> | <p>Que Cuauhtémoc Calderón afirmó que los problemas del CDE y el diputado Osvaldo Contreras Vázquez, obedecen a la falta de liderazgo e incapacidad para generar acuerdo del actual dirigente, Pedro Martínez Flores.</p> <p>Que refirió que <i>"Es lamentable y me parece un buen momento para decirles a los panistas del estado que se debe reflexionar sobre el partido que queremos, hacia dónde vamos y si nos interesa realmente servir y trabajar en el gobierno en pro del ciudadano o pelear posiciones de poder con tal de potenciar a uno u otro grupo dentro"</i>.</p> <p>Que señaló además <i>"la situación es vergonzosa y lamentable, yo invito a los compañeros a que hagan una mesa de diálogo, lleguen a acuerdos y que no evidencien públicamente los problemas y diferencias del instituto y que deben lavarse en casa"</i>.</p> <p>Que las cosas se sobredimensionaron debido a la incapacidad de la dirigencia actual, y en consecuencia, solamente se exhiben las fracturas al interior</p> | |

Por una patria ordenada y generosa



| | | |
|--|---------------|--|
| | del albiazul. | |
|--|---------------|--|

En primer término, no escapa a la atención de los suscritos que el hoy accionante, cuando compareció por escrito ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas en ejercicio de su garantía de audiencia, **negó la veracidad de lo contenido de las notas periodísticas de referencia**, así, precisó:

"(fojas 10 y 11 del escrito de defensa)

...; luego entonces se desprende que el órgano partidista denunciante pretende fundar su acción con notas periodísticas que como ya se ha venido diciendo carecen de valor jurídico alguno, la mayoría de ellas son ataques hacia mi persona que de manera infundada lo realizaron los medios de comunicación impresos y que solo tienen una afectación única y exclusiva hacia el suscrito, además de que las demás notas que se me imputan y que dicen que el suscrito realice (sic) **sin reconocerlo desde luego**, únicamente son manifestaciones y responsabilidad de quien lo escribe, y no así del suscrito, debiéndose tomar en consideración además de que son notas que son editadas y que no reflejan en nada la información que brinda el informante, sino la opinión de quien de segunda mano la da a conocer, de ahí que los fundamentos en que sustenta el Comité Directivo Estatal su denuncia, carezca de todo valor jurídico y devenga la improcedencia de la misma, debiendo en consecuencia esta Comisión de Orden desechar la denuncia presentada en mí (sic) contra, ser notoriamente frívola e improcedente" (sic)

Precisado lo anterior, no pasa por desapercibido para esta autoridad que la responsable ofrece, entre otros medios de prueba, diversas notas periodísticas para acreditar los distintos actos de indisciplina que tuvo por acreditados al hoy reclamante, al respecto, esta autoridad resolutora señala en primer término que resulta de explorado derecho, por nuestro máximo órgano de justicia electoral, que el contenido de las notas periodísticas es insuficiente para tener por demostrado un hecho; así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha concluido que tales publicaciones únicamente acreditan su existencia en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezcan, y que lo que en ellas se contiene representa **el punto de vista o interpretación de su autor**, y por tal consideración, su contenido únicamente es imputable a este último, más no a aquéllos que se vean involucrados en la nota respectiva.

Ahora bien, contrario a lo que concluye el órgano responsable, esta juzgadora advierte que si bien es cierto tales notas periodísticas provienen de distintos órganos informativos y se atribuyen a diferentes autores **no son coincidentes en lo substancial**, pues no son homogéneas en su contenido, porque abordan distintos tópicos y no en todos los casos se imputan expresiones o hechos al impetrante Cuauhtémoc Calderón Galván, en tales términos únicamente puede dárseles el



carácter de **indicios simples** conforme a la jurisprudencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que enseguida se precisará; así, se habla de que se manipuló una encuesta de la elección de candidato a Gobernador en 2010 pero ni indiciariamente se atribuye tal alteración al recurrente, quien de acuerdo a la segunda nota periodística, deslindó de tales hechos al entonces Presidente Nacional del Partido y al Presidente del órgano directivo estatal, asimismo se habla de una alianza para "*recuperar al partido*" y una supuesta queja de diversas irregularidades, por otro lado que existe una denuncia por fraude contra Cuauhtémoc Calderón Galván de una persona que pidió el anonimato, señala otra nota que el impetrante manifestó no tener conocimiento de un adeudo de campaña por el suministro de equipos de cómputo por un monto de 140 mil pesos, que el Partido fue demandado por adeudos de la campaña de Gobernador por casi 6 millones de pesos de acuerdo a supuestas declaraciones del Presidente estatal Pedro Martínez Flores, en otra nota se señalan diversas declaraciones del coordinador financiero de la campaña a Gobernador del Partido Acción Nacional en 2010 con respecto a adeudos económicos pendientes de la contienda electoral, otras notas relatan supuestas "corruptelas" en la carrera política de Cuauhtémoc Calderón Galván, que un juzgado del ramo mercantil informó que el impetrante debía señalar bienes para garantizar un embargo a favor de un empresario, que el impetrante se quejó de un grupo al interior del Partido bajo la denominación "*sagrada familia*", el cual se reparte beneficios económicos y posiciones políticas, en otra nota se narran supuestos "tweets" de la cuenta personal de la red social Twitter de Cuauhtémoc Calderón Galván en la que expone que se avergüenza de la dirigencia estatal por la situación relativa a la Asamblea Estatal Juvenil de Zacatecas y en la última de las notas se plantean diversos posicionamientos que se atribuyen al recurrente en lo relativo a la manera en que el órgano directivo estatal procesó un conflicto relacionado con la elección del Secretario Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional.

Es decir, dichas notas no son coincidentes en su contenido y por tal razón es errónea la conclusión de la responsable al otorgarles el carácter de indicios de mayor grado convictivo, porque se insiste, abordan distintos tópicos, aunado a que no en todas se imputan actos, declaraciones y/o expresiones a Cuauhtémoc Calderón Galván.

En efecto, conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se transcribirá, las notas periodísticas únicamente puede arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, sin embargo, en el caso concreto, el alcance probatorio que es posible desprende de las mismas es arrojar indicios leves dado que se refieren a diversas situaciones narradas

Por una patria ordenada y generosa



en las propias notas por lo que no son coincidentes de manera sustancial, conforme a la tesis de jurisprudencia S3ELJ 38/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que indica lo siguiente:

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.— Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de **indicios simples** o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, **si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial**, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, **y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.**

Ahora bien, la propia jurisprudencia obliga a que tales elementos probatorios se adminiculen con otros (aunque sean menores como señala la tesis) para tener por plenamente probados los hechos que pretenden acreditar; así, en autos lo únicamente posible adminicular son los siguientes elementos:

- a) En relación a la nota bajo el cintillo "**Demandado el PAN por adeudos de casi 6 mdp de Cuauhtémoc Calderón**", se vincula con la **Copia simple** del expediente 33/2010, correspondiente al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Jehu Chan Hernández en contra del Partido Acción Nacional, demandando "*Por concepto de suerte principal el pago de la cantidad de \$4,793,830.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como importe principal más la cantidad de \$767,012.80 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado equivalente al 16% y que en total suman \$5,560,842.80 (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL derivado de la falta de pago de una (1) factura que se anexa a la presente como documento fundatorio de la acción, así como la **Copia certificada de la***



resolución de fecha 30 de noviembre de 2011, dictada en el Recurso de Apelación 5/2011-II, por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y cédula de notificación de fecha 01 de diciembre de 2011 y la Cédula de notificación de fecha 16 de diciembre de 2011 y acuerdo en copia simple emitido por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, en el expediente J.O.M. 33/2010, que fueron admitidas por este órgano con anterioridad en la presente determinación como pruebas supervenientes.

- b) En relación a la nota periodística **"Plagada de corruptelas la Meteórica Carrera Política de Cuauhtémoc Calderón"**, se puede adminicular con los siguientes elementos de prueba: 1) **Copia certificada** por el Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas 2010-2013, del escrito de Ratificación de denuncia que presenta Mariza Cárdenas Hernández, Síndico Municipal del propio Ayuntamiento, ante la Agenta del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, contra Cuauhtémoc Calderón Galván y otros por los delitos de *"ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ABUSO DE AUTORIDAD, ABUSO DE CONFIANZA, COALICION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO, TRAFICO DE INFLUENCIAS Y NECOGACIONES (sic) ILICITAS, RESPONSABILIDAD TECNICA Y ARTISTICA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL, USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PRESESION Y LOS QUE RESULTEN"*, y 2) **Copia simple** del documento que se identifica como "Decreto #29", que supuestamente emita "LA HONORABLE SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS", de fecha treinta de octubre de dos mil diez.
- c) En relación a la nota titulada **"Denuncian por fraude a Cuauhtémoc Calderón"** pudiera adminicularse con los siguientes elementos de prueba: 1) **Copia cotejada** del escrito de demanda y anexos de los Medios Preparatorios a Juicio Mercantil número 1409/2010, promovido por Eduardo Canales Silva en contra del Partido Acción Nacional reclamando la cantidad de \$182,717.96 (Ciento ochenta y dos mil setecientos diecisiete pesos 96/100 M.N.) y 2) **Copia simple** del expediente 34/2010, correspondiente al Juicio Ordinario Mercantil promovido por Fabiola Elizondo Espinosa en contra del Partido Acción Nacional, demandando el pago por suerte principal de la cantidad de \$121,961.87 (Ciento veintiún mil novecientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.).

Sin embargo, a juicio de los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional los incisos b) y c) ^{Por una patria ordenada y generosa} no son susceptibles de sanción precisamente porque si bien



es cierto se demuestra la existencia de demandas y denuncias penales en las que se involucra a Cuauhtémoc Calderón Galván, lo cierto es que no obran en autos las constancias suficientes de las que se advierta que alguna autoridad competente, en definitiva, haya determinado la responsabilidad penal, administrativa o de otra naturaleza, de Cuauhtémoc Calderón Galván, en consecuencia debe presumirse la inocencia del mismo.

Al caso, resulta aplicable la tesis emanada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que indica:

Partido Verde Ecologista de
México
Vs.
Consejo General del
Instituto
Federal Electoral
Tesis XLIII/2008

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, **que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad**, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Julio — Diciembre 2008 T e s i s Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.



Mención especial merece el acto imputado al recurrente identificado con el inciso a), dado que si bien es cierto se encuentra acreditado en autos que el Partido Acción Nacional fue condenado de manera definitiva al pago de \$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), y que el órgano partidista responsable consideró como un ataque de hecho atribuible a Cuauhtémoc Calderón Galván en la medida y por las siguientes consideraciones:

"se llevó a cabo un ataque de hecho en contra de Acción Nacional en el ámbito económico, por parte del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, dicho ataque se hace consistir en el acto de declarar ante una autoridad judicial en contra de Acción Nacional a favor de quien demanda ante el Juez Segundo del Distrito de la Ciudad de Zacatecas, el pago de una deuda que el partido no realizó. En dicho acto jurídico (comparecencia como testigo) el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, señaló que comparecía ante ese H. Juzgado en forma voluntaria para declarar a favor de su conocido desde hace muchos años JEHU CHAN HERNANDEZ, y que previo a su comparecencia ante esa autoridad judicial se había visto en tres ocasiones con el demandante y con su abogado para preparar la diligencia, situación que en los hechos constituye la existencia de un acto premeditado en contra del partido, mismo que una vez dictada la resolución por parte del Juez, se tradujo en un daño al partido toda vez que este determino condenar a Acción Nacional al pago de la cantidad de \$5,680.00 pesos, (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), señalando que la base fundamental del ataque de referencia se funda en el hecho de que se trata de una afectación patrimonial a la economía del partido, pues en términos reales la cantidad a la que se está sentenciando a pagar al partido lo es el equivale al 50% del financiamiento público estatal del Partido Acción Nacional, en el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal de 2011, a lo que implica dejar de funcionar la mitad de la estructura orgánica del Partido ante la falta de recursos económicos para destinarlos al cumplimiento de un mandato judicial como lo es el pago de los adeudos de campaña del candidato a gobernador del estado de Zacatecas en el proceso electoral de 2010, CUAUHEMOC CALDERON GALVAN, miembro activo que omitió sujetarse a las disposiciones en materia de financiamiento, fiscalización y vigilancia de ingresos y gastos de precampaña y campaña expedidos por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional.

Ahora bien suponiendo que el acto del C. CUAUHEMOC CALDERON GALVAN, miembro activo sujeto al presente procedimiento haya obedecido a un acto cívico en aras de contribuir a la buena administración de la justicia, ello no es posible, puesto que fue el candidato a Gobernador del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas, y sabía (sic) y conocía a la perfección el manejo del financiamiento para gastos de campaña. Mientras que, por un lado asume y reconoce que el monto, que en el juicio mercantil referido es una deuda de su campaña, y por el otro omitió informar en tiempo y forma al Comité Directivo Estatal sobre la existencia de este, lo se traduce en una falta grave a la normatividad partidistas máxime que como ya se dijo la sentencia condenatoria en contra del Partido Acción Nacional, que prevalece a la fecha afecta el financiamiento público y por tanto la operatividad política y fines del mismo.



Lo anterior cobra relevancia desde el momento en que el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, rinde su testimonio en fecha once de mayo de 2011, dentro del juicio ordinario mercantil marcado con el número 33/2010, ventilado en el Juzgado Segundo de Distrito en esta Ciudad Capital, buscando evadir su responsabilidad con el proveedor de su campaña a gobernador contestando a todas las posiciones con evasivas y/o verdades a medias, tal como consta en la foja 225 del expediente anteriormente citado mismo que obra en autos, y que como se desprende de dicha documental al preguntarle para que persona se elaboró la propaganda motivo del multicitado juicio mercantil este respondió, que para el Partido Acción Nacional; a sabiendas de que el recurso económico para campañas fue manejado por los propios candidatos, siendo él uno de ellos y aceptando además que conocía el hecho del adeudo que en el juicio se reclamó y en cuyo documento base de la acción ejercitada se estableció claramente que el material fue elaborado para la campaña política del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Candidato por el Partido Acción Nacional a Gobernador del Estado, misma que obra en el expediente a foja cinco. Lo cual constituye un acto de deshonestidad al declarar, y que influyó (sic) de manera importante en la sentencia condenatoria que recayó en contra del Partido Acción Nacional.

Ahora bien, el hecho de haber reconocido ante autoridad judicial un adeudo y que no fue enterado al Partido Acción Nacional, por conducto del Comité Directivo Estatal en Zacatecas, constituye una falta grave en términos de la legislación electoral vigente. Lo que pone en riesgo al Partido de la imposición de una sanción que aparte del adeudo causaría una afectación mayor, toda vez que se trata de una conducta alejada de la normatividad partidista interna, lo cual es inadmisible y contrario a los principios de doctrina a que se sujeta todo individuo que acepta de manera voluntaria adherirse y afiliarse al Partido Acción Nacional como miembro activo del mismo."

No menos es cierto que señala la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas que tal adeudo fue por una adquisición de la campaña a Gobernador del Estado en el proceso electoral 2010, en el que Cuauhtémoc Calderón Galván fue su candidato, y que el impetrante *"omitió informar en tiempo y forma al Comité Directivo Estatal sobre la existencia de éste"*, sin embargo de autos no se advierte que esté acreditada plenamente tal omisión, por los siguientes razonamientos:

En la copia certificada de la resolución del Toca mercantil 5/2011-II, de fecha 30 de noviembre de 2011, ofrecida como prueba superveniente por el Comité Directivo Estatal en Zacatecas, se advierte a fojas 50 y 51 que el Tribunal Unitario del XXII Circuito del Poder Judicial de la Federación asentó:

"Sostiene el natural que dicha prueba tiene pleno valor probatorio, no obstante que la demandada opuso la excepción de falsedad y alteración del documento, sin embargo no demostró tales circunstancias con ninguno de los medios de convicción, pues no bastaba la sola afirmación de (sic) objetar el documento, sino que de conformidad con lo establecido por el artículo 1247 del código de



comercio, se requería que dicha demandada demostrara los hechos en que sustentaba su objeción y tampoco observó el procedimiento a que se refieren los artículos 1250 y 1250 bis del cuerpo de leyes en cita, pues dicha demandada no ofreció la prueba pericial respectiva.

Aduce el Juez Segundo de Distrito que con dicha probanza se acreditó la relación comercial existente entre las partes puesto que la factura tiene como efecto demostrar la compra venta de productos de publicidad apara (sic) campaña política de candidato a gobernador por el partido demandado, documento que obra en autos en el que se aprecia sello de goma con la leyenda "PAN. COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL. TESORERIA, ZACATECAS, ZAC.", con lo que se tiene por comprobada la existencia de la relación comercial entre las partes y la entrega de productos."

Es decir, el Partido no demostró la falsedad y alteración de la factura número 4228 y se tuvo por acreditada la existencia de la relación comercial entre las partes y la entrega de productos al Partido, además, se advierte de la propia resolución que al representante legal de la parte demandada, Presidente del Comité Directivo Estatal de Zacatecas, se le tuvo por confeso de las posiciones "*que se calificaron de legales como que conoce al actor y que éste presentó al Partido Acción Nacional la factura que constituye el documento base de la acción*", es decir, que con motivo de su incomparecencia al desahogo de la prueba confesional se tuvo por cierto el hecho de que Jehu Chan Hernández presentó al Partido Acción Nacional la factura respectiva, entonces es ilógico que a partir de tales elementos la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas haya concluido que Cuauhtémoc Calderón Galván no la hizo del conocimiento del órgano directivo estatal porque no contaba con elementos suficientes para arribar a tal consideración.

En efecto, si como lo sostiene la responsable, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas no fue informado en tiempo y forma de la adquisición de propaganda respectiva por parte de Cuauhtémoc Calderón Galván, entonces candidato a Gobernador del Estado, por qué circunstancias se asentó el sello a que hace referencia la resolución transcrita, lo cual no fue desvirtuado en el juicio mercantil respectivo.

No pasa por inadvertido asimismo que, en la demanda de origen el actor Jehu Chan Hernández adujo lo siguiente:

"CUARTO. Una vez elaborados y entregados los artículos encomendados, se me informo (sic) que debía presentar la factura correspondiente en esta caso la número 4228 de fecha 30 de junio del año dos mil diez, por la cantidad de \$4,793,330.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como importe principal



más la cantidad de \$767,012.8 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 80/100 M.N.) misma que se presentó (sic) ante las Oficinas del Partido Acción Nacional que se encuentran en esta Ciudad sito en el domicilio Calzada Héroes de Chapultepec número 1302 de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., y se me selló (sic) de recibida tal y como consta en el documento fundatorio de la acción que ahora intento.

QUINTO. Se me informo (sic) que se le daría el trámite (sic) administrativo correspondiente para emitir el pago respectivo y que pasara en un periodo de ocho días para recoger el cheque, pero a la fecha me dan evasivas y no quieren hacer el pago del citado documento, motivo por el que me veo precisado a demandar en la vía y formas que ahora promuevo, para que mediante resolución judicial se obligue al cumplimiento de la obligación contraída.

SEXTO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1378, me permito proporcionar los nombres de los testigos que presenciaron estos hechos y que en su oportunidad serán llamados a presentar su testimonio antes esta Autoridad y que son: CUAUHTEMOC CALDERON GALVAN, RAMIRO MARTÍNEZ SANCHEZ, ALFREDO CID GARCIA, DIANA DE LUNA OSEGEDA, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CABRERA, ARTURO SOLIS CALDERA Y RAFAEL SORIANO IBARRA."

Es decir, el planteamiento formulado por Jehu Chan Hernández en el sentido de que presentó ante el Partido Acción Nacional en Zacatecas la factura 4228 y se le selló de recibo, se insiste, no fue controvertida eficazmente en el juicio ordinario mercantil respectivo, y es el único elemento objetivo con el que cuenta esta Comisión de Orden del Consejo Nacional para emitir la presente determinación.

Por otro lado, el hecho de que Cuauhtémoc Calderón Galván rindiera su testimonio en el propio juicio ordinario mercantil 33/2010, ello no puede estimarse como un acto de indisciplina partidista, y considerarse como un acto de deslealtad hacia el instituto político, dado que el deponente únicamente afirma o niega hechos que le constan y da la razón de su dicho; en el caso concreto, no debe perderse de vista que el documento base de la acción es una factura recibida por el Partido Acción Nacional en Zacatecas, de la que supuestamente el órgano directivo estatal no tenía conocimiento, sin embargo, en el juicio respectivo no combatió eficazmente su autenticidad por lo que el órgano jurisdiccional acogió la pretensión de Jehu Chan Hernández, condenando al Partido Acción Nacional al pago correspondiente.

En este apartado trascienden las diligencias para mejor proveer ordenadas por esta Comisión de Orden del Consejo Nacional mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil doce, emitidas con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio para determinar el oportuno conocimiento del adeudo de \$5,560,842.80 (Cinco millones



quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) por el Comité Directivo Estatal, ya que el sello asentado en la factura 4228 que ampara dicha cantidad pecuniaria genera el indicio de que el órgano directivo estatal tuvo conocimiento del adeudo, tan es así que por dicha consideración se plasmó un sello del Partido en el documento respectivo; en la diligencias respectivas se solicitó al Comité Directivo Estatal en Zacatecas, por conducto de su Presidente, que remitiera copia certificada del informe de gastos de campaña de la elección de Gobernador del Estado del proceso electoral 2010, y a la Tesorería del propio comité se le requirió a efecto de que informara sobre la veracidad del sello asentado en la factura 4228, expedida por Jehú Chan Hernández, de fecha 30 de junio de 2010, que es la que ampara el adeudo de \$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) y remitiera en un sobre cerrado una foja blanca donde plasme el sello oficial que empleo o plasma como constancia de la recepción de documentos.

De los desahogos respectivos se advierte que el Tesorero del Partido en el Estado de Zacatecas señaló que *"En razón de lo anterior, me permito informar a esa H. Comisión Nacional de orden del Consejo Nacional que el sello asentado en la factura 4228 es falso."* y remitió la foja blanca con un sello que ciertamente no coincide con el asentado en la factura 4228 de referencia.

Sin embargo, de la copia certificada del informe de gastos de campaña de la Elección de Gobernador 2010 del Partido Acción Nacional, remitido por el Presidente del Partido en el Estado de Zacatecas, se advierte que a foja 060 hay un egreso de fecha *"10/Mayo/2010 Egresos – 22 Fac 3978 Jehu Chan He"* y dicha factura obra en los autos de la copia simple del Juicio Ordinario Mercantil 33/2010-II (a foja 0170), ofrecido en copia simple por el Comité Directivo Estatal ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal, ambos del Estado de Zacatecas, en el procedimiento sancionador incoado en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván; lo trascendente es que dicha factura expedida el día veintisiete de abril de dos mil diez, por Jehu Chan Hernández al Partido Acción Nacional, por concepto de *"LONAS IMPRESAS DE 2.50 X 1.50 (DE CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN CANDIDATO A GOBERNADOR POR ZACATECAS)"* contiene plasmado el sello partidista que se sostiene "es falso" en la factura 4228 por la que se condenó al Partido Acción Nacional al pago de \$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.)



Asimismo, de la propia copia certificada del informe de gastos de campaña de la Elección de Gobernador 2010 del Partido Acción Nacional, se advierte que a foja 093 hay un egreso de fecha "30/Junio/2010 Egresos – 39 Pago fac 4123 Jehu Chan 39" y dicha factura obra en los autos de la copia simple del Juicio Ordinario Mercantil 33/2010-II (a foja 0167), ofrecido en copia simple por el Comité Directivo Estatal ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal, ambos del Estado de Zacatecas; siendo trascendente de igual manera que dicha factura expedida el día veintisiete de abril de dos mil diez, por Jehu Chan Hernández al Partido Acción Nacional, por concepto de "VINIL IMPRESO DE 58 MUNICIPIOS PARA CAMPAÑA DE CUAUHTÉMOC CALDERON" contiene plasmado de igual manera el sello partidista que se sostiene "es falso" en la factura 4228 por la que se condenó al Partido Acción Nacional al pago de \$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.)

No debe perderse de vista que la copia simple del expediente del Juicio Ordinario Mercantil 33/2010-II, hace prueba plena en contra de su oferente, conforme al criterio jurisprudencial siguiente:

COPIAS SIMPLES. HACEN PRUEBA PLENA EN CONTRA SU OFERENTE. La copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si se aportan pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa naturaleza debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, en lo que perjudica al oferente, ya que no es concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, ignorar la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que precisamente por su ofrecimiento como prueba, implican el cabal reconocimiento de quien la propuso. En cambio esa copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta no operaría la misma razón y en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la medida en que su contenido se corroborara o no con algunos otros indicios.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 24/2000. Raúl Delgado Ortiz y otro. 2 de junio de 2000.

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretaria: Luz Irene Rodríguez Torres.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII septiembre de 2000, página 733, Tesis Aislada III.1o.T.6 K.

Por lo anterior, esta Comisión de Orden del Consejo Nacional determina hacer del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional de tales hechos a efecto de que, de considerarlo procedente, actúe en el marco de sus facultades contenidas en el artículo



6 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, si advierte conductas contrarias a la disciplina partidaria, para lo cual se ordena remitir las constancias atinentes a dicho órgano.

Por otro lado, con respecto a los dos discos compactos ofrecidos por el Comité Directivo Estatal que contienen dos audios, se parte de los argumentos sostenidos por el reclamante Cuauhtémoc Calderón Galván en el Recurso de Reclamación que se resuelve, en el que manifiesta lo siguiente:

"En cuanto a la prueba técnica, consistente en un disco compacto que contiene una videograbación de una entrevista al programa diálogos del grupo radiofónico 8-15 realizada al C. Cuauhtémoc CALDERÓN GALVÁN, transmitida en fecha 28 de septiembre de 2010, en la que a decir de la responsable se hacen declaraciones que dañan gravemente la imagen del partido y la de sus dirigentes situación que a decir de la responsable contravienen los fines y principios de Acción Nacional, al respecto se señala que la autoridad responsable cometió una flagrante violación al haber admitido dicha probanza, pues fue admitida sin fundamento ni motivación alguna, ya que al ser una videograbación como lo sostiene la responsable, es requisito sine qua non que se ofrezca con todos los requisitos señalados por la ley, a decir, el de señalar concretamente lo que se pretendía acreditar, identificar a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la responsable inferior estuviese en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, situación que no fue ofertada de este modo y que por lo tanto debió de haber sido desechada la misma, y que al haberla admitido y desahogado la responsable inferior es que violenta en mi perjuicio lo consagrado en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al hecho de que la responsable ni siquiera la desahoga en los términos precisados con anterioridad, y que por ende la misma no deba de ser tomada en cuenta por esta autoridad partidista de alzada.

En cuanto a la prueba técnica, consistente en un disco compacto que contiene la grabación de una entrevista realizada por un periódico de circulación estatal supuestamente al suscrito, es de señalarse que la misma también es violatoria a mis derechos constitucionales, pues la valoración que hace la responsable violenta los principios rectores de la materia electoral en especial a los de legalidad y certeza jurídica, pues no es posible que se pretenda valorar una probanza que supuestamente deviene una entrevista realizada por un periódico que no fue debidamente identificado ni por la responsable inferior ni por el propio denunciante, por lo que no debió de haberse tomado en cuenta, además de que dicha grabación de ninguna manera refleja de manera alguna que sea la voz del suscrito ni que yo hubiese participado en la misma, ya que no se corrobora con ningún otro medio de prueba, lo que desde luego no tiene valor probatorio alguno como ilegalmente pretende hacerlo creer la responsable, y que por ende deba de desecharse al momento de valorar de nueva cuenta esta probanza por parte de esta autoridad de alzada."

Este órgano del Consejo Nacional al realizar un análisis exhaustivo al escrito de solicitud de sanción estima **parcialmente fundados** los argumentos del impetrante,



pues contrario a lo que manifiesta, el órgano partidista solicitante aportó el disco compacto identificado como *"Dialogos (sic) Cuahutemoc (sic) calderón (sic) 28/sep/10 B-15"* conforme lo establece el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues precisó concretamente lo que pretendía acreditar con ellas *"señalar lo conducente respecto de los ataques de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del partido en el Estado que configuran la infracción establecida en el artículo 13 fracción IV de los estatutos del partido y en el artículo 16 apartado A fracción IV del reglamento de aplicación de sanciones"*, transcribió la totalidad de la entrevista respectiva, manifestó que dicha conversación fue transmitida en *"el Canal televisivo denominado Grupo Radiofónico B-15, una entrevista hecha al C. Cuauhtémoc Calderón Galván el 28 de septiembre de 2010"* y precisó el minuto y segundo a partir de los cuales éste realizó expresiones que el órgano directivo estatal calificó y denunció como ataques de hecho y de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del partido en el Estado de Zacatecas ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal responsable.

Además, es inoperante la alegación del recurrente en el sentido de que la responsable valoró *"una probanza que supuestamente deviene una entrevista realizada por un periódico que no fue debidamente identificado ni por la responsable inferior ni por el propio denunciante, por lo que debió de haberse tomado en cuenta, además que dicha grabación de ninguna manera refleja de manera alguna que sea la voz del suscrito ni que yo hubiese participado en la misma, ya que no se corrobora con ningún otro medio de prueba..."*, porque, no obstante conocer el contenido del audio, durante la sustanciación del procedimiento sancionador no ofreció prueba alguna tendiente a desvirtuar que se tratara de su voz o que esta fuera alterada, o tampoco se demuestra que haya ofrecido medio probatorio para controvertir que sea su voz la que se escucha en el audio respectivo y el órgano responsable no la hubiera admitido, caso en el que operaría el argumento del accionante.

En cambio, **resulta fundado** el argumento expuesto por Cuauhtémoc Calderón Galván en lo tocante al disco compacto identificado como *"la Jornada 21 de Abril 2011 Entrevista C.C.G"*, pues fue indebidamente admitido en el procedimiento sancionador dado que no fue ofrecido en la solicitud de sanción conforme lo establece el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que no se precisó cuál es el acto de infracción que se pretende acreditar con el audio al miembro activo, no identifica las personas que participan en dicho audio, no señaló el órgano directivo estatal precisamente el lugar en que se

Por una patria ordenada y generosa



desarrolló la supuesta entrevista grabada en audio, ni describe o señala las circunstancias de modo y tiempo que reproduce tal prueba.

Lo anterior en la medida de que no se especifican los requisitos que se exigen para la admisión de dicha prueba, es decir, se omite especificar con claridad las personas y circunstancias que rodearon los hechos que pretende acreditar con dicho disco compacto. Al caso es aplicable la siguiente tesis:

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Así, al no ofrecerse conforme a dicha tesis la prueba técnica a que se hace referencia, se genera la imposibilidad de una adecuada defensa del militante respecto del cual se solicitó la incoación de procedimiento sancionador. Así lo ha dispuesto el máximo tribunal del país en la tesis número IV/2008 y que lleva por rubro **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR**

Por una patria ordenada y generosa



ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

Ahora bien, conforme a lo que establece el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria a nuestro Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia; en tales términos, después de escuchar y analizar el contenido del audio identificado como **"Dialogos (sic) Cuahutemoc (sic) calderón (sic) 28/sep/10 B-15"**, si bien es cierto se advierten las expresiones que el órgano directivo estatal en el escrito de solicitud de sanción resalta con "negritas", también lo es que éstas son aisladas y se requiere de mayores elementos para tener plena convicción sobre las mismas, por ejemplo para tener por demostrado que de manera sistemática y reiterada el impetrante emitiera dichos puntos de vista.

Lo anterior es así, dado que la prueba técnica únicamente hace prueba plena cuando a juicio del órgano resolutor, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generan convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados; en tales términos, si la responsable advirtió diversos actos de indisciplina partidista que atribuyó y tuvo por acreditados a Cuauhtémoc Calderón Galván, basando sus argumentaciones medularmente en notas periodísticas a las que confirió valor probatorio de indicios de grado mayor convictivo, cuestión que ya fue rechazada en la presente determinación, y si como se ha precisado éstas son ineficaces para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, precisamente porque *"el contenido de una nota periodística, generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquella no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, más no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente."*, tal y como se sostiene en la siguiente tesis cuyo rubro y texto se transcriben:

"NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezcan, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como



documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquella no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, más no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 7427/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Náñez.

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; tesis: I.4 T.5K; Página: 541.

Lo anterior atendiendo también al efecto sensacionalista y propagandista que los medios de comunicación imprimen a los acontecimientos que narran en sus notas periodísticas; en consecuencia lo procedente es que a dicha prueba técnica únicamente se le puede conferir el grado de indicio leve, que no crea convicción plena sobre el acto de indisciplina imputado a Cuauhtémoc Calderón Galván.

En tales consideraciones, al no estar acreditados plenamente los actos por los que la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas determinó sancionar a Cuauhtémoc Calderón Galván con su expulsión del Partido, lo procedente sería revocar la resolución impugnada y restituir al impetrante en el ejercicio de sus derechos partidistas, sin embargo, a juicio de los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional existen elementos en autos cuyo análisis omitió realizar el órgano responsable y por lo cual procede sancionar al impetrante, por lo que esta Comisión resuelve modificar la resolución recurrida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones.

En efecto, es indudable y se encuentra plenamente acreditado de acuerdo a las constancias de autos, que el Partido Acción Nacional ha sido condenado por las autoridades jurisdiccionales al pago de la cantidad de **\$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos 80/100 M.N.)**, en virtud de sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, emitida en el juicio ordinario mercantil 33/2010-II, misma que fue confirmada en el toca mercantil número 5/2011-I, por el

Por una patria ordenada y generosa



Tribunal Unitario del XXII Circuito, dada la Apelación interpuesta por el Partido Acción Nacional.

Ahora, si bien es cierto ya fue desestimado en el cuerpo de la presente determinación que el hecho de que Cuauhtémoc Calderón Galván compareciera en carácter de testigo en el juicio ordinario mercantil 33/2010-II, ofrecido por la parte actora Jehu Chan Hernández, y manifestara ante el juzgador *"haber sido candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional en julio de dos mil diez, que dicho partido, mandó elaborar publicidad con el actor Jehu Chan Hernández, misma que llevaba el logotipo del partido, que los gastos de campaña, le eran facturados a nombre del Partido Acción Nacional; que sí sabe que éste debe al actor la factura que se le puso en ese momento a la vista, misma que aseguró era la primera vez que la veía; que sabía que dicho comerciante, con anterioridad había elaborado publicidad para el citado partido político; que la propaganda la elaboró para el partido político demandado"*, dado que ello no puede concebirse como un acto de indisciplina partidaria porque el testigo en un proceso de naturaleza judicial únicamente hace del conocimiento del juzgador hechos que le constan y se encuentra bajo protesta de decir verdad, existiendo sanciones de naturaleza penal a quien mienta ante los tribunales, lo cierto es que los suscritos estiman que debe existir una reconfiguración del acto de indisciplina imputado y éste se hace consistir en el hecho de que una vez que Cuauhtémoc Calderón Galván al ser requerido por las autoridades jurisdiccionales para acudir en carácter de testigo o tener conocimiento de que comparecería a rendir su testimonio en el juicio ordinario mercantil 33/2010-II, en la medida de que fue ofrecido por la parte actor Jehu Chan Hernández, éste fue omiso en coordinarse con el Partido Acción Nacional para atender de manera conjunta, coordinada e institucional la demanda mercantil, tomando en cuenta que tuvo el carácter de Candidato a Gobernador por el partido en el proceso electoral local 2010 acontecido en Zacatecas cuya jornada electoral aconteció en **julio de dos mil diez y que el adeudo respectivo se originó en dicha campaña**, sin soslayar que el desahogo de la prueba testimonial tuvo verificativo el día **once de mayo de dos mil once**, aun más a sabiendas, como lo reconoció en la diligencia judicial respecto a la posición: *"Que diga el testigo si sabe si el Partido Acción Nacional, a la fecha le debe al señor Jehu Chan Hernández, el importe que ampara la factura que obre en el juicio en que se actúa, la que solicitó ponerle a la vista la factura 4228 que obra en autos, la cual es documento base de la acción. Calificada de legal, contestó: **sí conozco del hecho de que se debe la factura; y es la primera vez que veo la factura.**"*, es decir, tuvo conocimiento previo a la diligencia del adeudo consignado en la factura 4228 emitida por Jehu Chan Hernández al Partido Acción Nacional por un monto de **\$5,560,842.80** (cinco millones quinientos sesenta mil



ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), inclusive, cuando se le inquiriere la razón fundada de su dicho señala: *"porque soy miembro activo del Partido Acción Nacional y he sido candidato en dos ocasiones a cargos de elección popular, por lo tanto, conozco las situaciones y la metodología en la cual se desarrollan las mismas; además en varias ocasiones me buscó el señor Jehu Chan Hernández, para comentarme los hechos antes mencionados, porque del comité estatal del Partido Acción Nacional, nunca he recibido ninguna comunicación al respecto, me enteré por una rueda de prensa en donde mencionaron asuntos de deuda de campaña, más nos datos precisos".*

Es decir, el miembro activo reconociendo que previo a la diligencia judicial en que se recabó su testimonio, tuvo conocimiento del adeudo reclamado al Partido Acción Nacional por un monto tan considerable, con motivo de adeudos de la campaña a Gobernador de Zacatecas en el proceso electoral 2010, **actuó con lenidad en el cumplimiento de su obligación como miembro activo del Partido de asumir y cumplir los Principios de Doctrina del Partido, ajustando su conducta a los mismos, constituyendo un ataque de hecho su omisión a los principios del Partido consistente en la solidaridad y subsidiariedad, que se resumen en nuestros Principios de doctrina como a continuación se precisa:**

"SOLIDARIDAD

Es la fórmula de convivencia social en la que se conuga el esfuerzo de todos para los fines de la comunidad, sin detrimento de los intereses legítimos de las personas.

La práctica de este principio se basa en el reconocimiento del otro como persona humana, con igualdad esencial y, por tanto, poseedora de los mismos derechos y obligaciones.

También está basado en el vínculo indisoluble entre individuos y sociedad. "No pueden sustituir ni perfeccionarse los valores humanos si decae la comunidad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales."

SUBSIDIARIEDAD

Es un principio ordenador de la sociedad, el cual enuncia que cuando una función social no es realizada por las personas o entidades a quienes corresponde por el orden natural, las entidades superiores pueden y deben asumir la realización de esta función. Es un principio que ayuda sin pretender sustituir al responsable.

La Subsidiariedad se orienta para aliviar la igualdad de condiciones y oportunidades, propiciando que se desarrollen los miembros de la sociedad, para que cada uno cumpla con sus fines, sean individuos o grupos. Es decir, el Estado tiene obligación, supletoria para con los



miembros de la comunidad proporcionándoles los medios para que realicen sus fines.

Esa ayuda debe prestarse conforme lo siguiente:

- Cuando sea necesaria
- Solamente en la proporción necesaria
- Donde sea necesaria
- Solo por el tiempo necesario

Establece con orden las jerarquías o poderes de los órganos del Estado y sobre todo, vela para que en la práctica se respeten. Hace que cada uno se apegue y cumpla su deber o función con eficiencia y, para ello, le dota de los suficientes recursos y facultades.

Cuando los diversos niveles de gobierno funcionan correctamente, esto es, el federal, el estatal y el municipal, los particulares encuentran pronta satisfacción a sus demandas, por ejemplo, cuando demandan algún asunto de servicios públicos, en un primer nivel de gobierno, si se les atiende no hay necesidad de acudir a otras instancias.

Tales actos de indisciplina se encuentran previstos en el artículo 16, Apartado A, fracciones II y IV, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, dado que el primer supuesto sanciona la lenidad -blandura- en el cumplimiento de las obligaciones como miembro activo, la obligación infringida es la contenida en el artículo 10, fracción II, letra a, de los Estatutos Generales que impone a todo miembro activo el asumir y cumplir los Principios del Partido, ajustando su conducta a los mismos, en esa testitura los principios no observados por Cuauhtémoc Calderón Galván son los relativos a la solidaridad y subsidiariedad, lo anterior en la medida de que con su falta de coordinación con los órganos directivos del Partido en la atención del juicio mercantil, no se conjugaron esfuerzos para lograr los fines convenientes al Partido y que en su carácter de ex Candidato a Gobernador debió asumir una función de defensa hacia nuestra organización política.

Individualización de la sanción.

Los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional proceden a individualizar la consecuencia jurídica de los actos de indisciplina que se encuentran acreditados en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván, actos que se traducen en lo siguiente:

- a) La lenidad en el cumplimiento de la obligación como miembro activo consistente en asumir y cumplir los Principios de Doctrina del Partido, relativos a la solidaridad y subsidiariedad, para la atención del juicio mercantil 33/2010-II, y
Por una patria ordenada y generosa



- b) El ataque de hecho a los principios del Partido relativos a la solidaridad y subsidiariedad, al no coordinar esfuerzos con los órganos directivos del partido y asumir institucionalmente la defensa de nuestra organización política.

Partiendo de que el procedimiento administrativo electoral tiene un objetivo con dos aristas: la primera, de carácter general, tiende a proteger bienes jurídicos superiores o especiales para la convivencia humana a través de sistema represivo con efectos preventivos, dado que ante la amanzana de la imposición de una sanción se obliga a los sujetos a cumplir con sus obligaciones; y la segunda, de carácter específico, dirigida a prevenir que se cometa una infracción posterior por aquél que vulneró la normatividad, imponiéndole una sanción proporcional a la infracción cometida.

Por tanto, la sanción en el procedimiento administrativo sancionador electoral persigue, por una parte, **proteger los bienes jurídico-electorales relevantes**; y por la otra, **prevenir que se pongan en peligro dichos bienes**.

Asimismo debe partirse del principio de prohibición de excesos (idoneidad, necesidad y proporcionalidad), que está contenido en la jurisprudencia emanada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro siguiente: **"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. S3ELJ 62/2002.**

Con este principio se trata de proteger a los militantes de los actos arbitrarios de molestia y privación por parte de las autoridades partidistas. La idoneidad significa que la prueba debe ser apta para producir el resultado que se busca, que es sancionar una conducta, y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto. La proporcionalidad significa que debe existir una relación lógica entre la magnitud de la falta y la magnitud de la sanción; y el criterio de necesidad o de intervención mínima implica que deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados.

Asimismo, acorde a la tesis de jurisprudencia **S3ELJ 24/2003** de rubro: **"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN."**, el procedimiento que ha seguir la autoridad sancionadora es el siguiente: Acreditada la infracción cometida, la autoridad debe, en primer lugar, determinar si la falta es levisima, leve o grave, y en el último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza el grado de



particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática; y, en base a estos elementos localizar la clase de sanción que le corresponda de entre las comprendidas en el catálogo legal; y, finalmente, si la sanción contempla un mínimo y un máximo se procederá a graduar o individualizar la sanción.

Ahora bien, a fin de determinar la gravedad de la infracción, en primer lugar, debe precisarse si la falta es levisima, leve o grave; para establecer la magnitud de la gravedad deberán tomarse en cuenta: la trascendencia de la norma violada, tomando en consideración la jerarquía de la norma y la finalidad que persigue; posteriormente, precisar los efectos de la infracción respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho; esto es, ponderar si el bien jurídico tutelado es simple o complejo; y, finalmente, precisar la magnitud de la afectación al bien jurídico e inclusive el riesgo creado; esto es, si la afectación es de resultado, cualitativa o cuantitativamente o de riesgo.

En tales términos, esta Comisión de Orden del Consejo Nacional estima que procede la **suspensión de la totalidad de los derechos partidistas de Cuauhtémoc Calderón Galván por el plazo de un año** por lo siguiente:

Los actos de indisciplina plenamente acreditados a Cuauhtémoc Calderón Galván se hacen consistir en el hecho de que una vez que Cuauhtémoc Calderón Galván al ser requerido por las autoridades jurisdiccionales para acudir en carácter de testigo o tener conocimiento de que comparecería a rendir su testimonio en el juicio ordinario mercantil 33/2010-II, en la medida de que fue ofrecido por la parte actor Jehú Chan Hernández, éste fue omiso en coordinarse con el Partido Acción Nacional para atender de manera conjunta, coordinada e institucional la demanda mercantil, tomando en cuenta que tuvo el carácter de Candidato a Gobernador por el partido en el proceso electoral local 2010 acontecido en Zacatecas cuya jornada electoral aconteció en **julio de dos mil diez y que el adeudo respectivo se originó en dicha campaña, por lo que tenía un deber de solidaridad y subsidiariedad con el Partido**, sin soslayar que el desahogo de la prueba testimonial tuvo verificativo el día **once de mayo de dos mil once**, aun más a sabiendas, como lo reconoció en la diligencia judicial respecto a la posición: *"Que diga el testigo si sabe si el Partido Acción Nacional, a la fecha le debe al señor Jehu Chan Hernández, el importe que ampara la factura que obre en el juicio en que se actúa, la que solicitó ponerle a la vista la factura 4228 que obra en autos, la cual es documento base de la acción. Calificada de legal, contestó: **sí conozco del hecho de que se debe la factura; y es la primera vez que veo la factura.**"*, es decir, tuvo conocimiento previo a la diligencia del adeudo consignado en la factura 4228 emitida



por Jehu Chan Hernández al Partido Acción Nacional por un monto de **\$5,560,842.80** (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), inclusive, cuando se le inquiriere la razón fundada de su dicho señala: *"porque soy miembro activo del Partido Acción Nacional y he sido candidato en dos ocasiones a cargos de elección popular, por lo tanto, conozco las situaciones y la metodología en la cual se desarrollan las mismas; además en varias ocasiones me buscó el señor Jehu Chan Hernández, para comentarme los hechos antes mencionados, porque del comité estatal del Partido Acción Nacional, nunca he recibido ninguna comunicación al respecto, me enteré por una rueda de prensa en donde mencionaron asuntos de deuda de campaña, más nos datos precisos"*.

Es decir, el miembro activo reconociendo que previo a la diligencia judicial en que se recabó su testimonio, tuvo conocimiento del adeudo reclamado al Partido Acción Nacional por un monto tan considerable, con motivo de adeudos de la campaña a Gobernador de Zacatecas en el proceso electoral 2010, **actuó con lenidad en el cumplimiento de su obligación como miembro activo del Partido de asumir y cumplir los Principios de Doctrina del Partido, ajustando su conducta a los mismos, constituyendo un ataque de hecho su omisión a los principios del Partido consistente en la solidaridad y subsidiariedad, que se contienen en nuestros Principios de doctrina.**

A continuación se procede a determinar si éstas son leves, levísimas o graves.

El artículo 10 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, impone diversos derechos y obligaciones a sus militantes activos como parte de su pertenencia al instituto político, con el fin de que intervengan orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública de México y tengan acceso al ejercicio democrático del poder, teniendo obviamente diversas corresponsabilidades hacia el Partido, tales como asumir y cumplir los principios de doctrina, ajustando su conducta a los mismos, por lo cual se instituye en la fracción II, letra a.

Cobra especial importancia lo que nuestros principios de doctrina entienden por solidaridad y subsidiariedad, cuyos conceptos ya han sido transcritos en la presente y que en obvio de repeticiones inútiles se tienen por reproducidos en este apartado.

De lo anterior se colige que nuestra normatividad, desde su ordenamiento fundamental y con mayor jerarquía, los Estatutos Generales, prevé la obligación de sus militantes activos de cumplir sus principios de Doctrina y sujeta la conducta de sus miembros a



éstos, asimismo en el Reglamento sobre Aplicación de Sanciones se prevé como acto de indisciplina su inobservancia o la lenidad en su cumplimiento, consecuentemente la **jerarquía de la norma** partidista violada es superior dado que deriva de nuestro ordenamiento primario.

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que la **finalidad de la norma** violada es **ajustar la conducta de sus militantes activos a los Principios de Doctrina del Partido**, consideración de gran relevancia pues a partir de dicho marco ideológico proyecta sus fines y medios en su participación en la vida pública de México.

Así, es de tomarse en cuenta que **el bien jurídico tutelado** de la norma que establece la obligación de los miembros activos de adecuar su conducta a los principios del partido, es proyectar que Acción Nacional gobierna con principios, que participa en la vida pública con valores, cuya doctrina *"tiene como propósito dotarlo de un pensamiento que le dé y garantice sentido y orientación a toda su actividad pública, la que debe estar guiada por los grandes valores. Por ello, es la mística y la doctrina la que generan una comunidad de ideales, ya que en ellas se expresan los grandes valores que requiere el ser humano y la sociedad para su pleno desarrollo."*

De lo anterior, los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional consideran lógico que si Cuauhtémoc Calderón Galván fue orniso en coordinarse con el Partido Acción Nacional para atender de manera conjunta, coordinada e institucional la demanda mercantil multicitada, tomando en cuenta que tuvo el carácter de Candidato a Gobernador por el partido en el proceso electoral local 2010 acontecido en Zacatecas **y que el adeudo respectivo se originó en dicha campaña, por lo que a raíz de esa candidatura tenía un deber de solidaridad y subsidiariedad con el Partido**, con ello realizó una afectación al Comité Directivo Estatal, dado que el Partido fue condenado por las autoridades jurisdiccionales, entre otras situaciones y circunstancias, al pago de \$5,560,842.80 (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), por lo que **la magnitud de la afectación es cuantitativa y sistemática** porque en dicho plazo, obviamente se verán mermadas las actividades del Partido en el Estado de Zacatecas dado que muchos recursos se deberán destinar al pago del adeudo.

Por tales consideraciones, se concluye que dicha infracción debe considerarse grave y se le otorga el carácter de ordinaria porque no existen elementos suficientes para imputar a Cuauhtémoc Calderón Galván que el adeudo de **\$5,560,842.80** (Cinco millones quinientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), a que



fue condenado el Partido a pagar haya sido impuesto por actos propios, es decir, no existe algún otro elemento ajeno a su falta de coordinación institucional, por el que se pueda considerar o estimar que la gravedad sea especial o mayor.

Por lo anterior, esta Comisión estima que la suspensión de derechos partidistas **por el término de un año que se impone** en contra de Cuauhtémoc Calderón Galván es idónea, proporcional y necesaria, tomando en consideración que la misma pretende ser represiva ante su actuar no solidario ni subsidiario con el Partido con motivo de la demanda entablada por Jehu Chan Hernández, y también preventiva pues su finalidad es sentar precedente de la importancia de que los miembros activos apeguen su actuar a los principios de Doctrina de Acción Nacional, pues éstos, se reitera, tiene como propósito dotarlo de un pensamiento que le dé y garantice sentido y orientación a toda su actividad pública, la que debe estar guiada por los grandes valores. Por ello, es la mística y la doctrina la que generan una comunidad de ideales, ya que en ellas se expresan los grandes valores que requiere el ser humano y la sociedad para su pleno desarrollo.

Para arribar a dicha conclusión se valoran también los elementos objetivos del impetrante, dado que es miembro activo del Partido Acción Nacional desde el dieciséis de agosto de dos mil siete, ello le permite tener la suficiente permanencia en la institución para conocer nuestros ordenamientos partidistas, que le otorgan derechos y obligaciones, tan es así que resultó electo Presidente Municipal de Zacatecas capital emanado de Acción Nacional, para el período 2007-2010, y posteriormente fue nuestro candidato a Gobernador en el Proceso Electoral 2010, teniendo además un nivel escolar asentado como "Segundo año de Profesional" en su testimonio ante el Juez Segundo de Distrito en Zacatecas, circunstancia que por sí misma le otorga un ventaja respecto de aquellas personas desfavorecidas en la superación académica, con lo que todo ello implica y puede beneficiarle.

Por otro lado, si tomamos en consideración que la sanción de expulsión revocada por esta determinación fue emitida por la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas el día tres de noviembre de dos mil once y surtió efectos en perjuicio de la impetrante a partir de su emisión, es obvio que desde esa fecha comenzó a transcurrir la sanción que en este acto se modifica y por lo tanto su vigencia debe tomarse a partir del cuatro de noviembre de dos mil once, dado que el tiempo que estuvo expulsado del Partido debe ser computado como parte de la presente determinación. Conforme a lo anterior, procede dar aviso al Registro Nacional de Miembros a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones deje insubsistente la sanción de expulsión y que en



acatamiento a la presente determinación, modifique las inscripciones correspondientes debiendo asentar la **suspensión de la totalidad de derechos partidistas de Cuauhtémoc Calderón Galván durante la periodicidad del cuatro de noviembre de dos mil once al cuatro de noviembre de dos mil doce.**

En mérito de lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se **modifica** la resolución impugnada; se deja insubsistente la sanción de expulsión decretada en contra del impetrante por la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Zacatecas en fecha tres de noviembre de dos mil once, y se **impone a Cuauhtémoc Calderón Galván la sanción consistente en la suspensión de la totalidad de derechos partidistas por un año**, con periodicidad del cuatro de noviembre de dos mil once al cuatro de noviembre de dos mil doce, se ordena la práctica de las diligencias necesarias a efecto de cumplir la presente determinación. Dese vista al Registro Nacional de Miembros para que actúe conforme a la presente determinación y en ejercicio de las atribuciones que tiene legalmente conferidas.


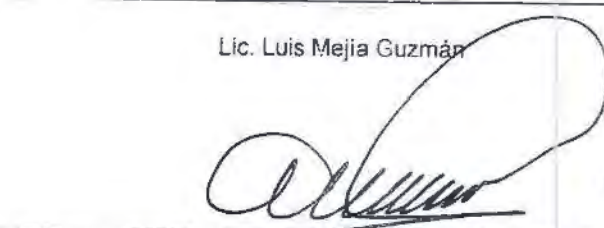
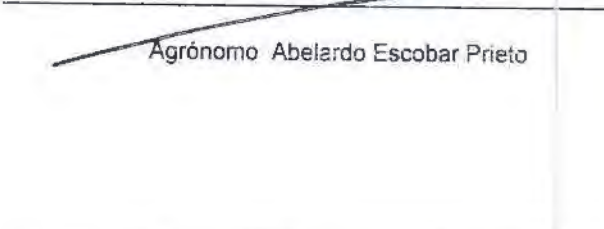
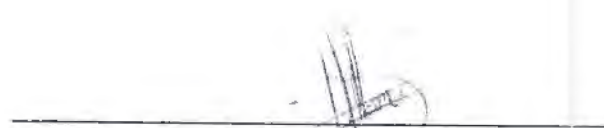
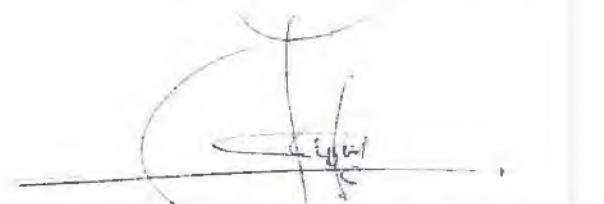
SEGUNDO. Dese vista al Comité Ejecutivo Nacional del contenido de la presente determinación, para que, en su caso, proceda conforme a las facultades que tiene conferidas, conforme a lo ordenado en el cuerpo de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE: **personalmente** al recurrente, en el domicilio ubicado en **Calle Pennsylvania, número 280, Piso 4, interior 1B, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, México, Distrito Federal; por correo certificado** a la autoridad señalada como responsable y al Comité Directivo Estatal de Zacatecas, y por oficio al Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia certificada de la presente resolución, la cual deberá ser cotejada por el Secretario Técnico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones. Recábense las constancias atinentes y agréguese a autos.

En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.



Así, lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional firmando al calce para constancia legal.


Ing. José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez
Lic. Luis Mejía Guzmán
Agrónomo Abelardo Escobar Prieto
Vicente de Jesús Esqueda Méndez
Dip. Norma Leticia Salazar Vázquez
Sen. Sergio Álvarez Mata

Esta hoja de firmas es parte integrante de la resolución dictada por la Comisión de Orden del Consejo Nacional en el expediente al rubro citado en su sesión del 30/agosto/2012.

Por una patria ordenada y generosa